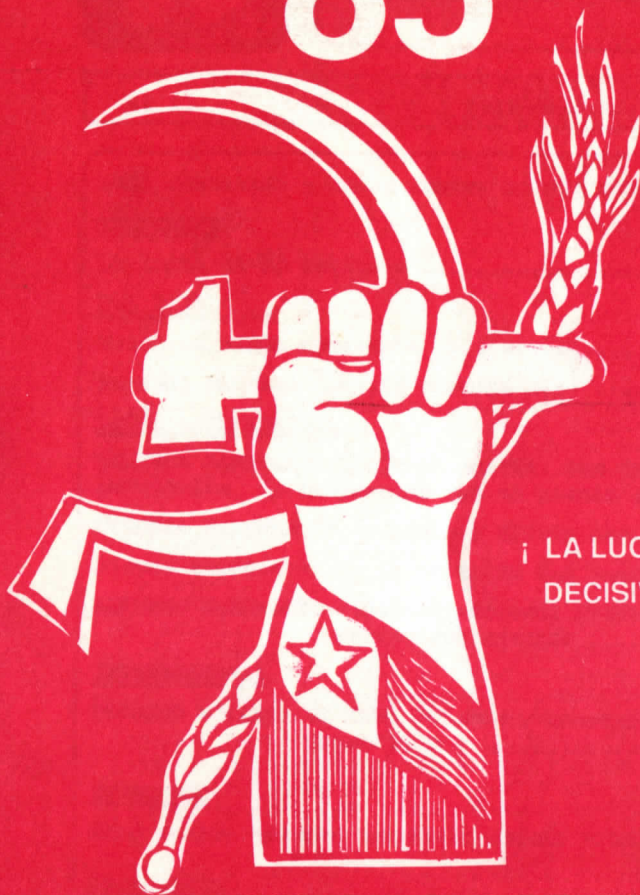


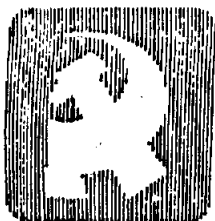
85



¡ LA LUCHA ES LO
DECISIVO !

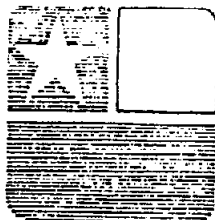
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

BOLETIN DEL EXTERIOR



PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

BOLETIN DEL EXTERIOR



Nº 85

julio-agosto 1987

Págs.

LUIS CORVALAN: ; Todos contra la dictadura 2

EDITORIAL

La lucha es lo decisivo 10

DEL PAIS

Una aclaración necesaria 17

Pascual Barraza cumplió ochenta años 19

LUCHA ANTIFASCISTA

JULIETA CAMPUSANO Y MIREYA BALTRA: Una decisión moral,
patriótica, de compromiso con el pueblo 21

VOLODIA TEITELBOIM: Julieta y Mireya han señalado un camino.. 24

Dignas exponentes de la rebelión del pueblo 26

ALFONSO CARRASCO: Dignidad nacional frente a la
desnacionalización 29

INTERNACIONAL

ORLANDO MILLAS: El Gran Octubre y nosotros, los países
dependientes 36

ECONOMICO

HUGO FAZIO: Resumen económico primer trimestre 1987 43

IDEOLOGICO

PABLO ROMAN: La alianza antifascista y las reivindicaciones
del pueblo mapuche 74

SERGIO VUSKOVIC: Teoría cristiana del cambio social 89

¡Si a la reconciliación! ¡No a la conciliación!

¡Todos contra la dictadura!

por Luis Corvalán L.

(Artículo publicado en la edición Nº 38, del 27 de abril, de la revista "Análisis" de Santiago).

Las manifestaciones populares de repudio al régimen de Pinochet que tuvieron lugar durante la visita que hizo a Chile el Papa Juan Pablo II, mostraron ante todo al mundo que nuestro pueblo no ha sido ni será jamás doblegado por la dictadura.

A propósito de esas manifestaciones tan masivas y de la lucha permanente que libran los trabajadores y el pueblo, son muchos los chilenos y no chilenos que se preguntan y nos preguntan cómo es que, sin embargo, no cae la tiranía y por qué aún las fuerzas democráticas no se unen para recuperar la democracia.

Tales interrogantes conllevan preocupaciones legítimas. Ya van más de 13 años de dictadura. Esta tiene en contra a la inmensa mayoría de los chilenos y se encuentra internacionalmente muy aislada. A pesar de ello y del constante batallar de cientos de miles y, en ocasiones, de millones de compatriotas, sigue en pie y decidida a perdurar por largo tiempo.

Carne y sangre del pueblo, los comunistas sentimos en las entrañas y en la piel la necesidad de que nuestra patria vuelva por los senderos de la libertad y la democracia, del progreso social. Pensamos que hoy, más que nunca, todos los partidos de oposición, todas las fuerzas democráticas, todos los hombres y mujeres que quieren dejar atrás estos negros años de persecuciones, torturas, asesinatos, relegaciones, destierros, cesantía y hambre, deben entenderse y luchar juntos por el triunfo de la democracia sobre la dictadura. Si hoy nos unimos y luchamos juntos podremos lograr la victoria en un tiempo relativamente corto. Si no lo hacemos, se corre el serio riesgo de que la dictadura se prolongue incluso más

allá de 1989, quién sabe por cuántos años. Estamos dispuestos a hacer el máximo de lo que nos sea posible para que esto último no suceda. Es deber de todos los revolucionarios y hombres progresistas hacerse cargo del dolor y los sentimientos del pueblo que quiere poner pronto fin al calvario fascista.

SUPEREMOS LA DISCUSION SOBRE LA VIOLENCIA Y LAS FORMAS DE LUCHA.

En la importante declaración que a fines de febrero dio a conocer la Comisión Política de nuestro Partido con el nombre de "Propuestas del Partido Comunista para una salida política", ratificamos expresamente el llamado hecho por los partidos de izquierda, con vista al entendimiento sin exclusiones de las fuerzas opositoras, bajo el compromiso de ceñirnos todos "a los objetivos políticos, tareas y medios acordados, a lo menos por un plazo que de conjunto se concierte". En nuestras propuestas expresamos abiertamente nuestra disposición a superar la discusión sobre los controvertidos temas de la violencia y las formas de lucha, a encontrar el consenso en los métodos y un camino común y concertado para el presente y el futuro cercano y mediano. Además, sugerimos varias formas dirigidas a plasmar el entendimiento y la acción mancomunada de todos los que queremos la democracia.

Ciertamente, estamos dispuestos también a considerar con la máxima atención los puntos de vista y las proposiciones de los otros partidos antidictatoriales. Cada cual debe prestar oídos a los demás, escuchar sus razones, tratar de entenderlos y buscar los denominadores comunes para la acción. El principal y primer diálogo que está a la orden del día es el que debe llevarse a cabo entre los partidos de izquierda, por un lado y los de centro-derecha por el otro. En este diálogo deben discutirse todos los problemas. Ahí debe analizarse tanto la política de la rebelión popular como las ideas de la desobediencia civil, del paro nacional prolongado y la creación de un estado de ingobernabilidad. Deben examinarse las diversas salidas políticas que puedan concebirse, comprendido un posible diálogo con las Fuerzas Armadas.

Desde hace algún tiempo, se propicia con insistencia la reconciliación entre los chilenos, la reconciliación nacional. Seguimos con interés los pronunciamientos que cada cual hace sobre el particular.

LA RECONCILIACION QUE CHILE NECESITA.

La sociedad chilena se halla hoy tremendamente dividida. La dictadura fascista ha profundizado las

diferencias de clase. Ha expulsado del país a miles de ciudadanos y ha empujado al éxodo a un millón de compatriotas que en razón de sus ideas no tienen cabida en las universidades, en las empresas públicas y privadas, ni en la administración y servicios estatales. Ha cavado un abismo de odios y resquemores entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, entre los militares y los civiles. La antipatriótica Doctrina de la Seguridad Nacional, la Constitución del 80, la resolución del llamado "Tribunal Constitucional" que declaró inconstitucional al MDP y la legislación sobre los partidos políticos, escinden todavía más al país al establecer que una parte significativa de la ciudadanía está al margen del derecho y de la ley. En estas condiciones, nosotros consideramos indispensable el reencuentro entre los chilenos. Creemos que debe restablecerse la convivencia política y social - que caracterizó ayer al país - sin perjuicio de las pugnas y luchas sociales en función de los intereses y aspiraciones de las diversas clases y capas que integran la nación. Deben retornar todos los exiliados. Una relación armónica y amistosa debe crearse entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, entre los militares y la civilidad. La posición que se haya tenido ayer frente al Gobierno de Allende o en relación al Golpe de Estado, y hasta la colaboración con el actual Gobierno, no pueden ser obstáculos insalvables para el reencuentro entre los chilenos, en el entendido, claro está, que él se concibe en el esfuerzo común por la recuperación de la democracia.

La reconciliación nacional no se puede lograr con buenas palabras y sermones, dicho esto sin desmerecer los sermones y las buenas palabras. Los problemas son concretos. La reconciliación entre los chilenos será efectiva si pasa por la derogación de la Constitución fascista y el abandono de la Doctrina de la Seguridad Nacional, por la democratización del Ejército y demás instituciones castrenses, por el respeto a los derechos humanos, por reconocerle al pueblo la soberanía del poder, por el fin de la dictadura.

NO A LA CONCILIACION CON LA TIRANIA.

Algunos políticos de oposición - y también perseguidos del régimen -, acogen el llamado de la Iglesia a la reconciliación como un proyecto dirigido a establecer en el país una cierta paz social, una suerte de desarme de los espíritus, un estado de pasividad del pueblo y, por consiguiente, una conducta de conciliación con el régimen dictatorial que sigue y seguirá haciendo de las suyas mientras permanezca en pie. El general Gordon, ex jefe de la siniestra CNI y actual representante de Pinochet ante la llamada Junta de Gobierno, lo ha tomado así. Con gran soltura de cuerpo ha dicho que la reconciliación debe

significar "borrón y cuenta nueva", es decir, la impunidad sobre los crímenes y los criminales.

No es esa la reconciliación que necesita Chile y quiere la mayoría del país. Más aún, al estilo de Gordon no se puede producir ninguna reconciliación. Esta debe construirse y basarse, como ha dicho el episcopado chileno, en la justicia y la verdad. Los crímenes deben ser destapados. La suerte que corrió cada desaparecido debe ser conocida. Las torturas deben ser reveladas. Los escándalos económicos y morales deben ser ventilados. La verdadera historia del golpe, los vínculos de los golpistas con la CIA y el Pentágono y con los antros de la oligarquía, deben salir a la luz pública. Y todo esto para que Chile entero constituya una barrera moral a fin de que nunca más las Fuerzas Armadas puedan levantarse contra un gobierno popular y constitucional como el que encabezó el gran Presidente Salvador Allende, a fin de que nunca más los hombres de uniforme disparen sus armas contra el pueblo, a fin de que nunca más se aplique en Chile la tortura y una parte de nuestros compatriotas tenga que vivir en el exilio.

El pasado no tiene vuelta, pero de él pueden y deben extraerse lecciones para que no vuelva a entornizarse en Chile un régimen tan inhumano como el que ha sufrido el pueblo en este período. Por esto es que hay que hacer justicia y revelar las verdades ocultas. La justicia implica también castigo. Podrá haber algún tipo de perdón para los soldados, suboficiales y oficiales subalternos si prueban que sólo actuaron por disciplina y acatamiento de órdenes, pero no deberá haberlo para los grandes culpables.

La dictadura fascista ha sembrado el odio contra el pueblo. Este odio sale de los fusiles que los soldados disparan contra indefensos ciudadanos, está en las cámaras de tortura de la gestapo pinochetista y en la cabeza de los torturadores y de aquellos militares que han sido moldeados en la ideología de la guerra interna. Ese es el odio que hay que erradicar. El que siente el pueblo contra el tirano y la tiranía forma parte de su carga revolucionaria y proviene de su amor a la libertad y la justicia.

Los chilenos necesitamos convenir en los caminos del tránsito de la dictadura a la democracia. Los comunistas partimos del principio de que sin lucha, sin presión social, sin acuerdo entre todas las fuerzas de oposición, no hay verdadero tránsito de la dictadura a la democracia. La oposición es la mayoría del país. Además, tiene la razón. Pero está visto que esto no basta. Debe tener también la fuerza suficien-

te, ser más fuerte que la dictadura. La fuerza no la da el número de por sí. Se la puede dar la acción unificada de todos sus estamentos, la lucha y la unidad de todos sus componentes. La unión hace la fuerza, reza el viejo adagio.

Para terminar con el régimen fascista que tiene el poder de las armas, la oposición requiere hacer uso de todas sus fuerzas, de todos sus efectivos, de todas sus reservas.

NO HAY SALIDA SIN LUCHA Y UNIDAD.

La dictadura no se irá por sí sola. Hay que echarla. Estamos llanos a considerar con los demás la cuestión de cómo hacerlo. Hallándonos ante una dictadura que se apoya en las armas, que es hija de la violencia, que practica todos los días el terrorismo de Estado y que hace uso de todas las formas de lucha contra el pueblo, incluso de recursos que jamás emplearíamos, como la tortura, la eliminación física o el destierro de miles de luchadores sociales, sostenemos que sería ingenuo pensar que ella sólo puede ser combatida y derrotada por medios pacíficos. No obstante, si alguna posibilidad se puede crear para poner fin a la dictadura por dichos medios, ella sólo podrá crearse como resultado de la acción decidida y combativa de la clase obrera y el pueblo, del más amplio y vigoroso movimiento de masas, de la concertación política de todos los opositores. Por lo mismo, los que hablan de una salida pacífica y están a la vez en contra de la movilización social y en favor de la dispersión de las fuerzas opositoras y de las exclusiones, de hecho no trabajan por ninguna solución y facilitan, en cambio, la permanencia de Pinochet en el poder.

No hace mucho, los líderes de la oposición de centro-derecha sostenían que la movilización social sin negociación no tiene sentido, pero que sin movilización social no hay negociación. Algunos voceros de dicha oposición reniegan ahora de toda forma de protesta y de movilización social, no obstante que el espacio de libertad del que hoy disfrutan se debe precisamente a las protestas y movilizaciones que condenan. Algunos otros se creen predestinados a controlar la movilización social, a dosificarla y a conducirla por los canales más de su agrado. Así piensan quienes han ideado el movimiento por elecciones libres y propician, nada más que en tales límites, la movilización social.

Pasados ya varios meses desde que se constituyó dicho movimiento, se constata que no alcanza la envergadura deseada por quienes lo lanzaron. No prende en el pueblo. Y no prende porque se plantea al margen

de las reivindicaciones más apremiantes de las masas, está marcado por el sello de la exclusión política e ideológica del sector más consecuente de la oposición y no agrupa ni representa a los trabajadores, los que brillan por su ausencia en el grupo de personalidades que lo patrocinan. Además, el pueblo sabe muy bien que no puede haber elecciones libres con Pinochet, ni insertándose en el sistema, y en ambas cosas no es clara la posición del susodicho movimiento.

ELECCIONES LIBRES SIN PINOCHET.

A la vez, se debe constatar que elecciones libres quieren todas las fuerzas que están contra la dictadura. Hay pues, en torno a ellas, un principio de consenso. Para lograr que la lucha por las elecciones libres sea el punto de encuentro de todas las fuerzas opositoras, es preciso que el pueblo desarrolle sus propias iniciativas, incorpore a esa lucha sus reivindicaciones económico-sociales y la transforme en una vasta movilización social por el fin de la dictadura.

El pueblo hace esfuerzos inauditos por llevar adelante la lucha y la unidad de todos contra la dictadura y por la democracia. En la base y en varios campos de la actividad social de emocionantes ejemplos de pelea, de coraje, de sacrificio y de unidad. En la lucha de los trabajadores por sus derechos económicos, sociales y políticos, en la batalla de los profesores - primero contra la municipalización y luego contra los despidos masivos -, en las tomas de terreno de "los sin casa", en la movilización de los estudiantes universitarios por las rebajas de las matrículas, luchan hombres y mujeres, jóvenes y adultos de las diferentes tendencias, "todos juntos y al mismo tiempo", como dice el lema de la Asamblea de la Civilidad.

LA OPOSICION DE CENTRO-DERECHA RETROCEDE CONSTANTEMENTE.

Un sector de la oposición, el de la llamada "Oposición Democrática", en la que impone sus rumbos la dirección del Partido Demócratacristiano, es renuente a la unidad, a la acción común y coordinada de todos los opositores, sean de izquierda, de centro o de derecha. Siempre encuentra argumentos o pretextos para rechazar la unidad y jamás razones para promoverla. Su actitud de soberbia y prepotencia la lleva a subestimar el aporte de los demás y a la torpeza de creer que la dictadura puede terminar sin la acción y la unidad de todas las fuerzas democráticas. El país entero ha visto cómo el referido sector opositor ha venido retrocediendo en sus posiciones y minimizando sus planteamientos, sin obtener nada a cambio. Ha cedido constantemente a la presión del régi-

men, del imperialismo norteamericano y de "El Mercurio". Abandonó la exigencia de la renuncia de Pinochet, que los reaccionarios y pacatos calificaron de desmedida. Hizo suyos los consejos de Robert Gelbard, emisario del Departamento de Estado, que llegó al país inmediatamente después del paro del 2 y 3 de julio del año pasado para recomendar a sus amigos que frenaran la movilización social y se desentendieran de los comunistas y de sus aliados más próximos. El paso del país a la democracia ya no es para la auto-denominada oposición democrática una tarea a la orden del día. Hoy cree que no existe otra alternativa que esperar hasta 1989 y ponerse en campaña para que ese año se pueda elegir presidente de la república entre dos o más candidatos o para lograr que sea limpio -- mayúscula ingenuidad política! -- el plebiscito que contempla la Constitución fascista.

Los partidos de izquierda tienen conciencia de las inconsecuencias y limitaciones de la oposición de centro-derecha. De ahí su empeño en concertarse entre sí para impulsar la movilización social y el acuerdo entre todas las fuerzas opositoras. Su acción unida está llamada a modificar sustancialmente a su favor la correlación de fuerzas en el seno del campo opositor, impulsando a los renuentes a entrar por el camino de la lucha y la unidad, atrayendo a su esfera a la inmensa mayoría del país, la fuerza suficiente para vencer.

Queremos subrayar la importancia de la labor unitaria y de las luchas comunes en la base social, en los lugares de trabajo y de vivienda, en las confederaciones, federaciones, colegios profesionales y sindicatos, en el seno de todas las organizaciones en que se agrupan los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, los mapuches y los pequeños y medianos empresarios, de la industria, el comercio, el transporte y la agricultura. Los miles de hombres y mujeres que actúan en estas esferas pueden y deben llevar adelante la gran tarea de forjar en la lucha la unidad del pueblo y de la nación chilena en contra de la tiranía. Particularmente significativo es y debe ser el fortalecimiento del MDP y el trabajo de entendimiento y coordinación en la lucha de los dirigentes intermedios, provinciales y comunales, de los partidos de izquierda. La acción conjunta de todos los opositores, la puesta en marcha de millones de compatriotas y en primer término de la clase obrera, es y debe ser obra de la energía y el esfuerzo de miles y miles de hombres y mujeres.

Los comunistas seguiremos bregando incansablemente, en los diversos niveles, principalmente en la base social y en las direcciones intermedias, por la unidad de todas las fuerzas democráticas, por el entendimiento de todos los opositores, tanto de izquierda como de centro y de derecha, esto es, incluso con gente con las cuales hemos tenido y

tenemos muchas diferencias. Nos guiamos por la convicción de que para derrotar a Pinochet tenemos que plasmar la más amplia de las coaliciones político-sociales de la historia de nuestra patria.



editorial

La lucha es lo decisivo

El manifiesto del movimiento Intransigencia Democrática, dado a conocer por su presidente Manuel Sanhueza y por otras personalidades que lo integran, plantea una posición clara, definida y que interpreta a los chilenos de diversas tendencias que están por el término de la tiranía y el restablecimiento de la libertad. Este manifiesto formula una advertencia muy justificada. Dice: "Nos sentimos obligados a pronunciarnos frente al peligro de que, a través de negociaciones, se imponga una mascarada democrática o de que algunos sectores de la disidencia, impulsados de buena fe por un realismo de corto plazo, se transformen en oposición funcional al régimen". Junto con denunciar la pretensión de Pinochet de dividir a sus adversarios mediante sus denominadas "leyes políticas", Intransigencia Democrática "llama a todas las fuerzas de oposición democrática a rechazar este intento de utilizarlos - como dice - para consolidar un sistema político excluyente e injusto, cuya perpetuación hace imposible la paz entre los chilenos". A la vez, Intransigencia Democrática propone una movilización masiva de los sectores populares en contra de tales leyes políticas con que el régimen pretende perpetuarse en el poder.

Contrasta este lenguaje directo, sin recovecos, con la ambigüedad del mensaje leído en una cadena de radioemisoras por el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Valdés, que conjuga la denuncia del fraude en que está embarcado Pinochet y la formu-

lación de reivindicaciones democráticas esenciales con, al mismo tiempo, la insistencia en dividir a la oposición, los consabidos ataques anticomunistas y de hecho una vergonzante aceptación de la Constitución fascista de 1980, a la que propone enmiendas, y de las leyes políticas derivadas de ella.

Una actitud dual de esta especie obtuvo lo que cabía. Pinochet hizo darle una respuesta displicente, despreciativa y mordaz, satisfecho de que, a pesar de los alardes, la Democracia Cristiana vaya enfilando hacia la trampa de sus leyes políticas. Así, el mensaje radial ha derivado a una polémica menor con el testaferro Cuadra.

De lo dicho por Gabriel Valdés es rescatable, sin embargo, que haya entendido y que formule como denuncia lo que la Izquierda viene sosteniendo respecto del fraude que está armando Pinochet mediante sus leyes políticas. Lo lamentable es que no saque las consecuencias debidas de esta situación, como lo ha hecho, en cambio, el Movimiento Democrático Popular en su carta a los obispos de la Iglesia católica, en que sostiene que "la reconciliación sólo será posible con el fin del régimen imperante y el advenimiento de una verdadera democracia en el país" y propone una amplia unidad para obtener la salida de Augusto Pinochet y el establecimiento de un gobierno provisional que convoque a elecciones de una Asamblea Constituyente con vistas a un régimen democrático representativo, pluralista y pluripartidista de soberanía popular.

Pinochet es experto en perpetrar fraudes brutales. Uno de ellos lo realizó en 1980 con la farfallea de un aparatoso plebiscito, cuyos resultados fabricó sin control de nadie, dando así por aprobada una supuesta Constitución que de punta a cabo es fascista. De acuerdo a ese engendro antijurídico, los cuatro comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas designarán al próximo presidente para el período de 1989 a 1997, reelegible de 1997 a 2005, con la sola condición de que sea ratificado por un nuevo plebiscito. Preparando tal plebiscito, Pinochet ha hecho promulgar sus denominadas leyes políticas. Una de ellas, la de inscripción electoral, no es sólo de inscripción propiamente tal, sino que deja al cuerpo electoral relativamente reducido, parcial, sin control democrático, insertado en un sistema en que los escrutinios, cómputos y resultados de cualquiera elección o plebiscito podrá arreglarlos Pinochet a su gusto y gana, con gente de su confianza, como en 1980, sin considerar para nada lo que haya votado la gente. La otra ley es de represión y limitación de sus derechos a los partidos políticos, convirtiendo a los que se so-

metan a ella en rehenes y piezas de la maquinaria de continuidad de la usurpación del poder derivada del putsch fascista de 1973. De allí que asuman una tremenda responsabilidad los que avalan tales instrumentos antidemocráticos de fraude, ayudándole a la tiranía a efectuar un engaño escandaloso.

Cuando son estos los hechos, reviste un valor significativo que el documento de la Conferencia Episcopal titulado "El desafío de la reconciliación" haya puesto el acento en la instancia a que Chile vuelva prontamente a la democracia. En él se hace notar que todos los chilenos deben pasar a la acción para buscar un camino de consenso. Refiriéndose a los dirigentes políticos y sociales, los obispos los exhortan a superar sus intereses particulares en aras del bien común de la nación.

Es este fin superior, este bien común identificado con el establecimiento de un real régimen democrático, el que exige un acuerdo de todas las fuerzas opositoras a fin de presentar una salida a la situación, suficientemente clara para concitar la movilización en su favor de todo el pueblo, del conjunto de los chilenos que están por la libertad. Como lo señaló Gabriel García Márquez en México al presentar el libro "Testimonios de la lucha por la democracia" de Anselmo Siles: "Ya es hora de que tomemos conciencia de que sin unidad no hay democracia". Únicamente un pueblo unido y en pie de lucha puede darle a Chile la libertad.

Es muy certera Intransigencia Democrática al llamar a la movilización masiva. Tal movilización masiva es la clave de todo, siendo determinante para forjar la unidad y para derrotar los planes de perpetuación de la tiranía.

Las informaciones aparecidas en Estados Unidos sobre las maniobras del gobierno de Reagan en favor de Pinochet arrojan luz en cuanto al verdadero trasfondo de la política norteamericana. Esta política se presenta con cierta dualidad, apoyando a la tiranía de una parte y haciendo ostentación, de otra parte, de que la presionaría para que abriese paso a una solución democrática. Sin embargo, los antecedentes que ahora han sido revelados demuestran un juego de doblez, hipocresía, falsedad, en que incluso determinados gestos aparentemente antipinochetistas tuvieron por objeto salvar al tirano de situaciones críticas y aplacar a las fuerzas opositoras, con vistas a dividir y debilitarlas.

El boletín o revista "Chile News", editado por los demócratas y liberales que conforman el conocido

"Grupo de Trabajo por la Democracia en Chile", ha hecho notar, por ejemplo, el papel desempeñado por un órgano de la administración de Reagan, la denominada Fundación Nacional por la Democracia (FND), que tiene un presupuesto anual de 25 millones de dólares a fin de desarrollar el anticomunismo y que ha empleado más de un millón cien mil dólares de esos fondos del gobierno federal para entregar subsidios a dos políticos chilenos, Eduardo Ríos y Sergio Molina, a fin de que aparezcan representando a organismos en su país de oposición y, con ese título, cooperen en las maniobras en el propio Estados Unidos en favor de Pinochet.

Las denuncias se concretan. El oficial de carabineros actualmente en retiro Eduardo Ríos figura, en las cuentas de la FND, recibiendo en dos años y medio cerca de un millón de dólares para establecer una organización denominada Central Democrática de Trabajadores. La FND justifica ese dispendio haciendo ver que tiene por objeto, según los términos textuales de su informe oficial, "contrarrestar la amenaza de rivales financiados por los comunistas". Pero, lo que ha despertado la indignación de los denunciantes es que el financiamiento federal de Eduardo Ríos ha conducido a que este aparezca con un título sindical chileno para interferir en la vida política norteamericana a favor de Pinochet. "Chile News" relata, al respecto, un episodio de no te nuevas. Leemos lo que expresa esa revista norteamericana. Ella dice: "A comienzos de abril, un colaborador del representante Ted Weiss telefonó al Grupo de Trabajo por la Democracia en Chile para averiguar quien era Eduardo Ríos. La semana anterior, Weiss había presentado una indicación al proyecto de ley de ayuda al exterior de la Cámara de Representantes para imponer sanciones a Chile debido a las violaciones de los derechos de los trabajadores por el régimen de Pinochet. El colaborador informó que Eduardo Ríos había enviado un telegrama a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara. En este telegrama, Ríos sostenía que hablaba en nombre de los trabajadores chilenos y urgía a los miembros de la Comisión a oponerse a la indicación de Weiss". Así, Ríos aparece más útil para Pinochet que su propia embajada en Washington. Y "Chile News" agrega otra serie de denuncias del mismo calibre sobre los manejos de Ríos.

En los fondos proporcionados por la FND, que naturalmente no son los únicos ni siquiera los más importantes que suministra Estados Unidos a sus agentes, encontró también el "Grupo de Trabajo por la Democracia en Chile", que en el ejercicio de 1986 apa-

recían cerca de ciento cincuenta mil dólares entregados a Sergio Molina, como coordinador del Acuerdo Nacional, para efectuar conferencias en Caracas y en Santiago. Entonces, investigaron a este otro personaje, Sergio Molina. Leeremos, también textualmente, la denuncia sobre el tal como aparece en "Chile News": "En octubre pasado el Coordinador del Acuerdo Nacional de Chile, Sergio Molina, se embarcó en un extraordinario viaje a Europa. El objetivo de su misión era presionar a gobiernos claves para que apoyaran la petición del régimen de Pinochet de un crédito de 250 millones de dólares del Banco Mundial, que necesitaba en forma crítica. El viaje era tanto más notable cuanto que la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos que integran el Acuerdo Nacional se oponen firmemente a la concesión de tales créditos al régimen de Pinochet. Esto incluye - dice "Chile News" - al presidente del PDC Gabriel Valdés, a cuyo partido pertenece Molina. El viaje de Molina estuvo precedido por una visita secreta a Washington. No se dispone de detalles sobre esta visita, que sólo se ha conocido recientemente. Poco después del viaje de Molina, el subsecretario de Estado asistente Robert Belbard viajó también a Europa para coordinar una estrategia política destinada a asegurar la aprobación del crédito en el Banco Mundial, donde Estados Unidos tiene considerable influencia". Hasta aquí "Chile News".

Se está comenzando a destapar la olla. Es una olla podrida. En cuanto al Banco Mundial, un chileno, Edgardo Boeninger, es consejero de ese Banco. Respecto de Sergio Molina, ahora se explica por qué, ante el práctico desaparecimiento del Acuerdo Nacional, ha necesitado crear otro organismo de pantalla, que denominó Comité por Elecciones Libres.

Es muy importante que, así como todas las fuerzas democráticas de la humanidad solidarizan con la lucha de nuestro pueblo contra la tiranía, haya también poderosos sectores que lo hacen en Estados Unidos, con amplio eco en el movimiento obrero, en las Universidades, en las Iglesias e incluso en el Parlamento. Esto obliga al gobierno de Reagan a maniobrar, a encubrir su política, a aparentar pujos aperturistas y hasta con algo de democráticos. Los actos terroristas de Pinochet, especialmente el asesinato en el propio Washington de Orlando Letelier y su secretaria, sensibilizan mucho a la opinión pública norteamericana y hasta la administración Reagan debe tenerlo en cuenta. Pero, la política de fondo del gobierno norteamericano es de sostenimiento de Pinochet, tirano que le resulta cómodo y rentable y con el que tiene afinidad. Ante la lucha tenaz del pueblo chileno, no deja de contemplar la posibilidad de que

debiera obligadamente deshacerse de él y, para tal caso, toma precauciones a fin de contar con fuerzas de recambio, de asegurar sus posiciones en las Fuerzas Armadas y de apuntalar la subsistencia de toda o siquiera gran parte de la Constitución fascista de 1980. Es muy claro, por lo tanto, que la tarea de deshacerse de la tiranía y conquistar la libertad es una tarea de los chilenos, que requiere el ascenso de la lucha de las masas y así forjar un entendimiento democrático, venciendo las intrigas, maniobras e intervenciones del imperialismo. Para hacer fracasar las maquinaciones de los agentes del enemigo y de los demás elementos antiunitarios cegados por el anticomunismo, lo decisivo es la irrupción y la presencia cada vez mayor, como protagonista del combate por la democracia, de las vastas masas populares. Las grandes manifestaciones contra las alzas y contra el hambre que han surgido en diversas ciudades toman decididamente ese camino.

Pinochet ha confirmado con su habitual brutalidad y sin ambages los objetivos en que está empeñado. Para él todo consiste en perpetuar la usurpación del poder efectuada con el putsch fascista del 11 de septiembre de 1973. A los llamados de la Iglesia a la reconciliación contestó con un exabrupto. Exclamo, airado, desvirtuando los propositos y el ánimo de lo dicho por la Conferencia Episcopal y queriendo disminuir la imagen de los obispos: "Ahora la oposición esta ofreciendo una mediación, pero la rechazo !, porque esto no es un partido de fútbol !". En una reunión con sus incondicionales del grupo denominado "Avanzada Nacional", integrado principalmente por agentes de sus organismos gestapistas y comandos represivos, les reiteró su disposición a seguir adelante contra viento y marea. A los que todavía concebían ilusiones en que, a través de las llamadas "leyes políticas", podría derivarse a alguna especie de apertura, les notificó en su gira austral de estos días que tales leyes conducen lisa y llanamente al rígido sistema antidemocrático de la Constitución de 1980, sin variación alguna. Ante la investigación de algunos de sus crímenes que, así como en Chile, tiene lugar también en Argentina, Estados Unidos e Italia, su actitud es ajena a todo arrepentimiento, por la sencilla razón de que continúa viendo en esas prácticas su instrumento básico de gobierno. A raíz de los exhortos de la Justicia argentina a dos generales chilenos por el asesinato de Carlos Prats y la petición oficial de los tribunales norteamericanos de que se les entregue a Contreras y Espinoza, en Calbuco bramó: "Nos están atacando !" y agregó encontrarse dispuesto a morir con la frente alta, aunque su idea es mas bien de seguir matando y atropellando en todas las formas imaginables los derechos humanos.

Y no se trata sólo de declaraciones del déspota. Sus fiscales y jueces militares insisten impertérritos en agredir día a día a los prisioneros políticos que se encuentran en sus garras y promoviendo penas de muerte en desafío al clamor de la humanidad que exige eliminarlas. Sigue funcionando sin tregua la máquina represiva. Hasta en lo referente a un asunto tan indefendible y desprestigiado como es el mantenimiento de la institución del exilio, Pinochet extrema su intransigencia. Las relegaciones a Chile Chico, Camiña y Puerto Aysén de Clodomiro Almeyda, Julieta Campusano y Mireya Baltra son medidas inicuas de obsecación antidemocrática, al igual que las amenazas a Isabel Parra. La expulsión de Gladys Díaz, Marisa Matamala y Lily Rivas intenta establecer el precedente de usar una vez más, como si tal cosa, ese necarismo persecutorio perverso. Pinochet ha llegado al extremo de obligar a los prevaricadores y sumisos ministros de su Corte Suprema de Injusticia a revocar la sentencia de autorización del retorno a su patria de ciento cinco mujeres chilenas destacadas y respetables entre las que figuran Hortensia Bussi de Allende, Carmen Castillo, Gladys Marín, Carmen Lazo, Verónica Denegri, Denise Pascal, así como las tres que hizo expulsar desde el aeropuerto y muchas más igualmente calificadas.

Queda una vez más en claro y Pinochet lo ha dicho él mismo que el gran dilema está planteado entre el mantenimiento del actual régimen, con todo lo que él representa, o la conquista por el pueblo de Chile de su libertad. Se engañan a sí mismos y engañan a los demás, favoreciendo así los planes del tirano, quienes se proponen dialogar con él. No podrá haber elecciones libres sin deshacerse antes de Pinochet y su institucionalidad fascista. La lucha contra la tiranía es lo primero y fundamental. De allí que constituya un crimen de lesa democracia el de los que se empeñan en dividir a las fuerzas opositoras y alientan intrigas contra el Partido Comunista y el Movimiento Democrático Popular.

La situación concreta plantea como tarea inmediata, para enfrentar el soberbio desafío del tirano, derrotar la conciliación y el 89-ismo, o sea la postergación de la lucha por la libertad para el año 89 o después. Se requiere claridad en el rechazo de las leyes políticas antidemocráticas de Pinochet, romper el espíritu cobarde de resignación al imperio de la Constitución fascista, reforzar la antigua consigna de grandes jornadas "Democracia, - Ahora !". Ello exige, indudablemente, la cohesión de los revolucionarios, desarrollar la lucha ideológica, construir más sólidamente el movimiento de masas independiente que se viene levantando en el país, avanzar con los que quieren avanzar, forjar la unidad a través de la acción y en el curso de la movilización del pueblo, concertar las fuerzas democráticas desde la base social.

del país

Una aclaración necesaria

DECLARACION PUBLICA

Numerosos organismos y militantes del Partido, como también amigos y aliados, nos han hecho presente su preocupación y extrañeza por las declaraciones de la compañera María Maluenda en las últimas semanas y, en especial, por su participación en el foro promovido por el Movimiento por Elecciones Libres, que se constituyó, como es bien conocido, con un carácter excluyente tanto política como socialmente.

La Dirección del Partido consideró esta situación cuidadosamente, teniendo presente la destacada trayectoria de la compañera María Maluenda, su dilatado aporte a las luchas del Partido y, también, los dolorosos golpes que la han conmovido como madre y esposa, golpes al Partido que, por cierto, la afectan a ella especialmente.

Hemos llegado a la conclusión que tenemos el deber de expresar públicamente que se trata de opiniones personales. Las opiniones del Partido han sido expuestas en nuestras "Propuestas para una Salida Política".

En nuestro Partido se puede tener opiniones personales diferentes de las de la Dirección y que se pueden y deben expresarse en su seno. Nuestros principios nos obligan a desarrollar nuestra actividad política pública con los criterios que resuelve el colectivo partidario.

Sobre los temas en que la compañera María Ma-luenda ha expuesto públicamente sus criterios perso-nales, se ha conversado y se seguirá conversando con ella con el afán de superar sus dudas y en la espe-ranza de que se integre plenamente a la disciplina partidaria y al trabajo por la aplicación de la línea del Partido como lo ha hecho durante toda su vida.

COMISION POLITICA
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

Santiago, 7 de Mayo de 1987.



!! LA REBELION PARA EL
EXILIO COMIENZA CON
EL RETORNO !!

Pascual Barraza cumplió ochenta años

Santiago, 15 de mayo de 1987.

Querido compañero PASCUAL BARRAZA:

Pasado mañana tú cumples 80 años. En nombre de todos los comunistas chilenos te saludamos de todo corazón. Las circunstancias en que vivimos y las leyes de la seguridad del Partido que de ellas se derivan, nos impiden alcanzar a tu casa para abrazarte personalmente y compartir contigo, tu querida compañera Carmen y tus hijos - aunque sea por un momento - el pan y la sal de la amistad. Ya que esto nos es imposible, queremos enviarte a través de estas líneas todo nuestro afecto y reconocimiento.

Desde niño conociste la explotación capitalista y la solidaridad obrera. Tu primer accidente del trabajo te costó una pierna cuando apenas tenías 16 años y laborabas en el viejo mineral de hierro de El Tofo, que pertenecía a la Bethlehem Iron Company. En 1925, hace ya 62 años, te incorporaste a las filas de nuestro glorioso Partido, el partido de Recabarren y Neruda. En él has sido y eres un ejemplo de tenacidad en la lucha, de firmeza revolucionaria y de disciplina consciente. En tu dilatada vida de comunista no se te conocen desmayos. En las duras y las maduras has estado en el puesto de combate que los trabajadores y el Partido te han asignado, entendiendo siempre que nuestra razón de ser es la lucha de cada día por los derechos y la emancipación de la clase obrera y el pueblo. Entre tus cualidades más sobresalientes está tu permanente vinculación con las masas. La población de La Granja te hizo regidor y luego alcalde durante 10 años. En el gobierno popular, encabezado por el recordado y gran Presidente Salvador Allende, te desempeñaste como un eficiente y

abnegado Ministro de Obras Públicas y Transporte. No se te fueron los humos a la cabeza, pues siempre te has guiado por la justa idea de que entre nosotros nadie es más grande que el Partido y nadie está por encima del Partido.

En tu larga vida de comunista has sufrido en carne propia la represión de diversos gobiernos reaccionarios. En tu juventud tuviste que enfrentar un consejo de guerra después de la trágica Pascua de Copiapó y Vallenar. Estuviste relegado en Pisagua, en Quellón y en Maniña durante el gobierno del traidor González Videla, y detenido en la Escuela Militar, bajo la dictadura de Pinochet. A tus 80 años, desde tu casa de la Pintana sigues con atención, día tras día, la valerosa lucha de nuestro pueblo contra la tiranía fascista y aportas a esa lucha toda tu experiencia, además de tu ejemplo de combatiente infatigable.

Nuestro Partido vive, desde el golpe militar hasta hoy, el período más difícil de toda su historia, la más brutal de las represiones. Pero no ha sido ni será abatido. Se mantiene y se mantendrá siempre de pie, seguro de que estos días pasarán, que la victoria será del pueblo.

Tus compañeros del Comité Central, del cual eres miembro por espacio de medio siglo, te deseamos muchos años más de vida y buena salud.

COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA
DE CHILE.



lucha antifascista

Una decisión moral, patriótica, de compromiso con el pueblo

Declaración formulada en Santiago por
Julieta Campusano y Mireya Baltra.

Hemos regresado a nuestra Patria ejerciendo el derecho inalienable de vivir en la tierra que nos vio nacer, donde nacieron nuestros padres, hijos y nietos.

Con esta acción hemos roto el destierro forzado a que nos condenó la tiranía por más de trece años.

El exilio es una crueldad premeditada inadmisible, una suerte de desgarró y esperanza.

Los años vividos en otras Patrias, la generosa solidaridad de otros pueblos no logra mitigar el desarraigo, la nostalgia y los recuerdos.

El exilio ha sido una burla. Burlada mil veces la opinión pública nacional e internacional. El exilio no ha terminado como lo proclamó Pinochet. Cientos de chilenos continúan impedidos de ingresar al país.

Esta es otra de las violencias que descarga la dictadura contra la población chilena.

¡ El exilio no puede prolongarse ni un minuto más !

Nosotras agotamos todas las iniciativas y acciones. Reiteradas tentativas de retorno emprendimos: En brazos de la solidaridad, junto a otros exiliados, llegamos, una y otra vez a Pudahuel. Cruzamos por tierra, hace tres años, las fronteras argentinas, sufriendo las agresiones y vejámenes de los cuerpos represivos del régimen en territorio chileno.

¿ Qué más podíamos hacer ?

El camino elegido corresponde a una decisión moral, patriótica, de compromiso con nuestro pueblo en su lucha por la libertad y la democracia.

Debíamos volver como fuera y volvimos.

Hemos regresado más convencidas que nunca en la fuerza y certeza de nuestros ideales.

Convencidas de la urgencia de la unidad, de la movilización permanente del pueblo, de la reconciliación basada en los principios de "justicia y verdad".

Venimos dispuestas a sumarnos a la tarea ineludible del combate cotidiano para eliminar para siempre de la vida nacional el terror, los crímenes, las torturas, las persecuciones, la cárcel, las relegaciones, el exilio, el hambre y la miseria.

Saludamos a los que nos antecedieron con su voluntad inquebrantable de vivir en Chile: Edgardo Condessa y el Secretario General del Partido Socialista de Chile, Clodomiro Almeyda.

Nos adherimos con entusiasmo al movimiento por el regreso de Hortensia Bussi de Allende.

Cantamos con las mujeres chilenas "Somos más". Porque somos más tenemos el deber de hacer de Chile lo que soñaron hombres en diferentes etapas de nuestra historia y de diferentes vertientes del pensamiento humanista y político: O'Higgins, Manuel Rodríguez, Balmaceda, Bilbao, Recabarren, Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei y el último Presidente constitucional de Chile, Salvador Allende.

Nuestro pasado es de gloria, nuestro presente debe ser de victoria.

Hemos llegado a nuestro hogar común: la Patria. Aquí permaneceremos.

Defenderemos el derecho a vivir en nuestra tierra, estamos ciertas que nos acompañará el pueblo, el amor de nuestras familias y la amplia solidaridad mundial.

Abrazamos con emoción a los trabajadores y a su Comando Nacional, piedra angular de la lucha por la democracia.

Abrazamos a la valerosa mujer chilena, hermanadas en el gran combate por la alegría y la felicidad.

Saludamos a las nuevas generaciones empujadas y rebeldes en el noble objetivo de la libertad.

Saludamos a los pobladores, recios y altivos, en su afán de conquistar techo para sus hijos. A los

profesionales, intelectuales y artistas, creadores del progreso y la belleza.

Al pueblo mapuche, a las masas campesinas en sus exigencias seculares de tierra y justicia.

Saludamos a las múltiples organizaciones de base, surgidas de la unidad y la resistencia.

Saludamos con respeto y admiración a la Iglesia Católica, ejemplo de consecuencia cristiana y vocación por los pobres. Respaldadas por las palabras del Papa, Juan Pablo II que estigmatiza el exilio como "muerte civil", nos decidimos por la vida y la Patria.

Saludamos a la Comisión de Derechos Humanos, enérgico vigilante contra la violación de estos derechos.

A la Vicaría de la Solidaridad, refugio del perseguido, sostén de las libertades.

Nuestro primer pensamiento al pisar tierra chilena fue para los familiares de los presos políticos-desaparecidos, de los torturados y encarcelados. Vuestra heroica actitud nos conmueve y nos compromete.

Abrazamos con amor de madre a los presos políticos por su digna conducta.

Saludamos al Movimiento Democrático Popular (MDP) potencial aguerrido de la izquierda, factor dinámico de la unidad más amplia.

Saludamos a los hombres y mujeres que militaron y militan en los Partidos de la Izquierda chilena.

Saludamos a los Partidos de centro-derecha que conforman, junto al Movimiento Democrático Popular y otras fuerzas políticas, la vasta y mayoritaria oposición democrática de Chile.

¡ FIN AL EXILIO ! ¡ VENCEREMOS !

Julietta Campusano
Senadora de la República

Mireya Baltra
Ministro del Trabajo
Gobierno Popular.

Julietta y Mireya han señalado un camino

por Volodia Teitelboim

(Declaración formulada al programa
"Escucha, Chile", de Radio Moscú)

En primer lugar, produce un inmenso sentimiento de alegría. Han cumplido su sueño de volver a su tierra. Todos sabemos cuánto les ha costado conseguirlo a estas dos mujeres valerosas, buenos símbolos de las chilenas de nuestro pueblo. Penaban por regresar. Padecieron 13 años de destierro. Cada día sentían el mal de ausencia. La solución no estaba para ellas en llorar, ni en enfermarse de exilio sino en trabajar sin pausa por la libertad y la democracia y en pelear a brazo partido por el retorno. Junto a patriotas decididos, pertenecientes a diferentes partidos, trataron antes de ingresar con riesgo de sus vidas, por Las Cuevas y luego en avión. Protagonizaron batallas campales reclamando el derecho a vivir en su propia patria. Fueron agredidas, salvajemente golpeadas. Y han vuelto a insistir. Esperamos que ahora tenga razón el dicho popular: "a la tercera es la vencida". Han sido recibidas con alborozo en Chile. Como a Clodomiro Almeyda, relegado en Chile Chico, que conmovió a todos con su ingreso, la dictadura relegó a Julieta a Sierra Gorda y a Mireya a Puerto Aysén. Los tres merecen mil veces la libertad, porque querer vivir en el suelo natal no es ningún delito, sino una muestra natural de patriotismo y de amor a su país. El júbilo de los chilenos de adentro se suma a la enorme satisfacción del exilio. Al fin y al cabo después de casi 14 años se hace aún más grave la ignominia de prohibirle a los chilenos el acceso a su tierra. Esperamos que en un día no lejano ingresen a Chile y por la puerta grande Hortensia Bussi de Allende, todos los exiliados, hombres y mujeres, sin excepción. Se que habrá que luchar todavía muchísimo para lograrlo. Hemos recibido numerosos llamados de diferentes partes del mundo aplaudiendo el gesto de Clodomiro, de Julieta y de Mireya. No nos cabe duda

que la opinión universal exige el fin del exilio y la libertad para los que vuelven sencillamente a lo suyo allí donde nacieron. Queda todavía mucho por hacer para alcanzarlo. Estoy cierto que ni relegaciones injustas ni procesos infames serán aceptados por una Humanidad vigilante respecto al drama de Chile. Clodomiro Almeyda, Julieta Campusano y Mireya Baltra han ejercido el legítimo derecho que tiene todo ser humano a vivir en su patria. Han señalado un camino. A solidarizar con ellos, a trabajar por el fin definitivo y total del exilio.



Dignas exponentes de la rebelión del pueblo

Queridas compañeras Julieta y Mireya:

Vuestra entrada clandestina al suelo patrio, como la de Clodomiro Almeyda, nos ha llenado de gozo.

La valerosa determinación que han tomado ha sido celebrada y apoyada por la generalidad de los chilenos y ha tenido un respaldo internacional muy grande.

El exilio es una barbarie. Pinochet lo ha mantenido por más de trece años. Pero ha recibido serios golpes. Se acerca el día en que puedan reunirse todas las familias chilenas dispersas por el mundo.

Ustedes, como Clodomiro Almeyda, han pagado vuestra osadía con la relegación a inhóspitos y apartados rincones. No obstante, han declarado que se sientan felices de estar en Chile aún en esas condiciones. Tienen el apoyo del pueblo, el calor de la solidaridad humana, visitas, llamados telefónicos desde diferentes lugares del planeta.

Ingresaron al país con la firme decisión de enfrentar todas las dificultades que pudieran presentarse. Si las detenían y torturaban, si las procesaban y metían en la cárcel o si las relegaban, responderían con firmeza. Si las ponían en un avión para sacarlas fuera del país, estaban dispuestas a dar la vuelta al mundo, sin bajarse voluntariamente de la nave, proclamando en todas partes que no aceptan el exilio porque quieren vivir en su patria. Ustedes son símbolo de la entereza y dignidad de la mujer chilena. Son exponentes de la rebeldía del pueblo y representan auténticamente el espíritu combativo de los comunistas.

Es justo recordar que antes se rebelaron contra la expulsión del país los compañeros Luis Godoy, René

Largo Fariñas y Osiel Núñez; que Jaime Insunza y el doctor Leopoldo Ortega se sumergieron en la clandestinidad para no ser aprehendidos y expulsados del territorio; que varios dirigentes políticos - entre los que se cuentan Luis Guastavino, Rolando Calderón, Oscar Barretón, Jaime Bazmuri y Oscar Moya - intentaron dos veces ingresar al país, una vez por Las Cuevas y otra por Pudahuel, y que el doctor Edgardo Condeza logró instalarse en Concepción luego de cruzar la frontera por un paso cordillerano. Son ejemplares la decisión y el coraje con que se actuó en todos estos casos.

Es imposible no hacer algunas reflexiones. A la luz de los hechos que hemos recordado y de la hazaña que constituye vuestro ingreso al suelo patrio es de toda evidencia que la dictadura es vulnerable y que en la lucha contra ella siempre es necesario que todos los revolucionarios y demócratas consecuentes pongamos en primer lugar las acciones firmes y decididas, nos esforcemos por mantener la iniciativa política, demostrar en los hechos la firme voluntad de luchar sin tregua contra la dictadura y hacer triunfar así la causa democrática.

La pasividad, la capitulación, no conduce a buena parte. Solo la acción puede abrir perspectivas de victoria. El único terreno en que el pueblo de Chile puede definir a su favor el pleito entre democracia y dictadura, es el terreno de la lucha amplia y multifacética, de la movilización, de la desobediencia civil y de la autodefensa de masas. Nuestra línea de Rebelión Popular se ha desarrollado y seguirá haciéndolo en ese terreno. Y la decisión de ustedes de ingresar clandestinamente al país es una contribución muy importante en este ya largo camino de combate.

Las últimas líneas son un recado para ti, querida Julieta, a pocos días de tu sesenta y nueve cumpleaños. Hermosa vida la tuya. Llegaste a Santiago formando parte de la delegación de Coquimbo al Congreso de la Alianza Libertadora de la Juventud, en septiembre de 1937. Desde aquellos años, luchas sin descanso por los derechos del pueblo y el ideal del Comunismo. En tu lugar de relegación, declaraste a la prensa: "no me siento extraña en Sierra Gorda. Somos hijas de pobre y en cualquier lugar, con un techo y un plato de comida, estaremos bien. No necesitamos más comodidades". Tu vida ha sido y es un ejemplo para hombres y mujeres chilenas, que te aprecian por tu siempre vivo espíritu revolucionario y por tu sencillez y modestia. Tus camaradas de Partido y Juventud te vemos como expresión de una comunista ejemplar: sacrificada, disciplinada, con un cariño enorme por el partido y velando siempre por su cohesión y u-

nidad. Un especial y fraternal abrazo con motivo de tu cumpleaños.

Queridas compañeras Julieta y Mireya:

Todos los comunistas nos sentimos orgullosos de vuestra hazaña y nos comprometemos a seguir apoyándolas con toda decisión en el gran objetivo que las anima, el reconocimiento de vuestro derecho a vivir en la patria y a proseguir sin descanso la lucha por echar a Pinochet y conquistar la democracia.

Afectuosamente.

Comisión Política del
Partido Comunista de Chile

15 de mayo de 1987.



Dignidad nacional frente a la desnacionalización

por Alfonso Carrasco

Muchos recordamos el día 11 de julio del año 1971. A veces vuelven las imágenes que a través de la televisión mostraron el acto que se realizó ese día en la ciudad de Rancagua cuando el presidente Allende anunció oficialmente la nacionalización de la gran minería del cobre.

Fue un discurso vibrante en un acto de suprema dignidad que interpretaba plenamente el sentir y el pensar del país hasta tal punto que nadie osó públicamente oponerse a esta medida patriótica que beneficiaba tan directamente el interés nacional.

Si hoy rememoramos esas imágenes no lo hacemos en la añoranza pasiva y doliente sino que alzamos los recuerdos como símbolo de dignidad, de tradición patriótica, cuyo significado está vivo en los sectores políticos que impulsaron la nacionalización y que hoy, con más razón y fuerza que ayer, la levantan.

Sobre todo porque hoy día el gobierno militar de Pinochet ha convertido la indignidad en línea de acción permanente. Baste recordar que una vez concretado el golpe procedió a indemnizar a las compañías norteamericanas de la gran minería del cobre. Les entregó 575 millones de dólares que el gobierno del presidente Allende había deducido de las "rentabilidades excesivas".

Este sólo acto de servicio a las compañías norteamericanas sería suficiente para identificar a los promotores, organizadores y ejecutores del golpe de Estado y sobre todo, los fines que se buscaban con su sangrienta materialización.

Y aún hoy algunos de los protagonistas del golpe tienen la impudicia de aseverar que actuaron en aquel entonces para defender el estado de derecho, el que estaría amenazado por el gobierno de la Unidad Popular. Lo que efectivamente estuvo amenazado fue el interés norteamericano y el de una reducida mi-

noría que hacía del privilegio y la desigualdad económica y social un "estado de derecho".

Pero todas las frases rimbombantes y la hueca palabrería en defensa de la nación, todos los contenidos de los bandos y proclamas, las declaraciones públicas de algunos partidos apoyando el golpe, pueden hoy día, a casi 14 años de dictadura, confrontarse a los hechos de la realidad.

Con razón algunos de los que conspiraron admiten que forman parte de generaciones fracasadas. Efectivamente, ningún político que pretende actuar como dirigente nacional puede sentirse orgulloso de haber contribuido a colocar a Pinochet en el poder.

AREA SOBRESALIENTE DE INDIGNIDAD.

Una de las áreas donde sobresale la falta de dignidad nacional es la económica que, claro, está inserta en los fundamentos de todo el sistema impuesto al país por la dictadura. Es base de la acción política de la dictadura. Y la política dictatorial asegura su desarrollo, como hoy se advierte.

Es lo que acontece con el patrimonio nacional. Con el remate descarado de la industria nacional a grupos económicos nativos (pero yanconas) y a los monopolios internacionales (ante todo norteamericanos). Sobre este último aspecto es que queremos referirnos en estas breves notas que hemos comenzado recordando el día de la dignidad nacional, 11 de julio.

El proceso de entrega del patrimonio nacional se inició apenas Pinochet se instaló en el poder. Es una de las principales consecuencias del golpe de Estado. Y causa, también. En ese contexto se explica la investigación del senado norteamericano que develó la conspiración foránea (de EE.UU.) en el golpe del '73.

Ya recordábamos como Pinochet se apresuró a indemnizar a las compañías norteamericanas del cobre. Hay que añadir, de pasada, que de acuerdo a la política monetarista (Chicago) el 11 de julio de 1974, como escarnio, la dictadura dictó el decreto ley conocido como "Estatuto de la Inversión Extranjera" número 600.

Este decreto tuvo como finalidad abrir las puertas de Chile al capital extranjero para que se beneficie de nuestras riquezas y pueda remesar sus utilidades sin cortapisas. Como el Pacto Andino representa una forma de defensa de las economías nacionales frente a la voracidad de los monopolios, la dictadura optó por retirar a Chile de ese organismo regional. Fue, por añadidura, una manera de debilitar el frente latinoamericano.- Así pisoteó las tradiciones de la independencia !

El país más favorecido con este Estatuto de la Inversión Extranjera...efectivamente, Estados Unidos, con 229 proyectos

que materializaron el 49,7% de las inversiones realizadas entre agosto de 1974 y diciembre de 1984.

Empero no fue suficiente. El monstruo es voraz. Y Pinochet su sirviente. Así en noviembre de 1985 reforma el Estatuto garantizando, entre otras medidas, la existencia de tributos invariables a las compañías extranjeras por 20 años; amplía a 8 años el plazo para concretar inversiones; acceso expedito a las divisas y luz verde para remesarla al exterior, etc.

Ah, pero entonces dijeron también la minería...Y Pinochet dicta en noviembre de 1983 el nuevo Código de Minería y la ley orgánica constitucional minera. Entre las "lindezas" figura en esta legislación la llamada "concesión plena" que convierte en inexpropiables los enclaves extranjeros en la minería.

AREA RARA Y EMPRESAS ESTRATEGICAS.

Empero aún quedaba patrimonio nacional. Porque hay que recordar en este glosario de la traición, que en el primer proceso de la privatización (1974) la dictadura entregó a los grupos económicos ligados al capital extranjero 19 bancos y 515 empresas productivas.

Y hay que anotar que, además, como esos grupos económicos se farrearón los bienes, en enero de 1983, el gobierno tuvo que intervenir para salvarlos del colapso con un subsidio de 3 mil 500 millones de dólares. Por cierto que esos recursos los cancelan todos los chilenos vía impuestos. Como ha escrito la revista Mensaje, el gobierno de Pinochet "socializa las pérdidas".

No obstante, como decíamos, todavía quedaba patrimonio nacional y la dictadura, a partir de 1986, comienza a entregar a los grupos económicos y a intereses extranjeros las empresas de los grupos en quiebra, y empresas del Estado.

El monto comprometido en esta entrega, considerando a las empresas estratégicas y los organismos públicos creados por ley, según el ingeniero Héctor Donoso, es el siguiente: el patrimonio conjunto alcanza a los 6 mil 500 millones de dólares; estas empresas y organismos realizan el 55 por ciento de la inversión pública y representan entre el 55 al 60 por ciento de las exportaciones nacionales. Su fuerza laboral llega a los 95 mil trabajadores, la mayoría mano de obra especializada.

Se trata de empresas como la CAP, Chilectra, Endesa, Entel, Laboratorio Chile, en el primer caso; y de Codelco, Enap, Enami, Lan Chile, FF.CC. del Estado, en el segundo. Las nombradas no son todas. Son muchas más.

EL MOMENTO Y LOS PROCEDIMIENTOS.

¿Cuál es el momento que determina la dictadura para proceder a este remate de los bienes del país? El primer anuncio oficial se produce en marzo de 1984. El gobierno dice que venderá el 30 por ciento de las acciones de las empresas filiales CORFO en un plazo de 5 años. En julio del año siguiente, el vicepresidente de CORFO, ratificó que se iniciaría la venta de dichas acciones.

Es decir se hace después que en 1983 las jornadas nacionales de protesta pusieron en peligro la estabilidad de la dictadura. Luego que la dictadura engatusa a la oposición de centro-derecha y provoca la división y el debilitamiento del frente opositor general, a través del llamado "diálogo".

Las vías de la desnacionalización tiene como una de sus formas la llamada capitalización de la deuda externa. Esta consiste en la elaboración de un mecanismo que autoriza a corporaciones extranjeras y a chilenos con capitales en el exterior a adquirir bienes productivos y recursos naturales a cambio de pagarés de la deuda externa.

Con estos pagarés las corporaciones extranjeras pueden (y ya lo han hecho) comprar acciones en las AFP y así procurarse el control de las empresas utilizando los fondos previsionales del mundo del trabajo. O bien comprando directamente acciones de las empresas de los grupos quebrados (área rara) o de las empresas productivas del Estado. A precio huevo.

La cuestión de los precios es uno de los mayores escándalos de la historia de Chile. Es tan vergonzoso que incluso dirigentes como Pedro Ibáñez o Gonzalo Eguiguren se ruborizan y demandan que se guarden las apariencias. Porque aquellos robaban como caballeros, en cambio ahora se hace a destajo, sin respetar ninguna norma.

LA CUESTION DE LOS PRECIOS DE VENTA.

A este respecto cito el artículo de Jaime Ruiz-Tagle, de la revista Mensaje, correspondiente a enero-febrero de este año, titulado "La privatización de las empresas del Estado".

"Por otra parte, en un período de post-crisis, como el que vive la economía chilena, no puede sorprender que el precio de las acciones esté muy bajo y sea muy inferior al llamado "valor libro" (que equivale al costo de las inversiones menos las deudas). En estas circunstancias un capitalista privado que quiere cuidar su patrimonio no vende, esperando un mejor momento. Sin embargo, el actual régimen no ha vacilado en vender, a pesar de que el precio de las acciones ha fluctuado entre un 70% y un 14% del valor libro. En consecuencia, el subsidio implícito del Estado a los compradores ha oscilado entre un 30% y un 86%.

"Proyectando estos subsidios al conjunto de las filiales

de CORFO que se han estado vendiendo, se llega a una enorme pérdida para el Estado, que ha sido estimada en \$ 200.000 millones (1.000 millones de dólares).

Ruiz-Tagle agrega otro dato que pone al descubierto el virtual saqueo de las empresas del Estado. Citamos otra vez a Ruiz-Tagle el que, a su vez, cita un estudio de Errázuriz y Weinstein:

"Una posibilidad de medición, cuando se trata de empresas que fueron anteriormente nacionalizadas, es considerar al valor al cual el propio Estado compró en el pasado. En el caso de Chilectra, por ejemplo, el Estado en 1970 pagó alrededor de US\$ 250 millones en moneda actual, que equivalen a unas dos veces y media el monto al cual se está valorando actualmente la empresa (en sus tres filiales), de acuerdo a las ventas recientes de las acciones".

¿ QUIENES SON LOS BENEFICIADOS ?

Hugo Fazio, en su "Resumen Económico Primer Trimestre 1987", indicó que Chile sufre el mayor proceso desnacionalizador de su historia.

Alude a una investigación realizada por Rozas y Marín que estableció que nueve grupos controlan o tienen participación en la propiedad de 121 empresas las cuales cuentan con un patrimonio global de 2 mil 600 millones de dólares.

¿Y cuáles son estas corporaciones transnacionales? Hay cuatro definidas como "esencialmente industriales" y son: British American Tobacco, Swedish Match Holding Inc., Blue Circle Industries y Bin Mahfouz.

Y cinco son calificadas de "financieras": Citibank, Bankers Trust, Aetna, American International Group y Cavendes.

Tal vez estos nombres no digan nada, salvo su condición extranjera. Pero agreguemos que Bankers Trust, Aetna y American International Group, son consorcios norteamericanos, los cuales controlan, además, las AFP Provida, Santa María y Unión, respectivamente. Lo anterior significa que controlan y utilizan en su beneficio los recursos previsionales de los trabajadores que imponen en esas AFP.

Otro ejemplo: la Sociedad Química y Minera de Chile (SQMIMICH) que fue nacionalizada durante el gobierno del presidente Allende. Ahora el gobierno de Pinochet la desnacionalizó. La mayoría de las acciones fueron compradas por la sociedad de inversiones ICC Chile Limitada. Lo de "Chile Limitada" es un simple eufemismo porque pertenece al consorcio norteamericano International Capital Corporation.

La revista Análisis, del 10 al 16 de marzo, publica una lista de bancos, empresas industriales y financieras que han sido traspasadas al capital extranjero.

Entre muchas otras nombra las siguientes:

- Compañía General de Electricidad Industrial, control mayoritario en poder de Bin Mahfouz, a través de Inversiones Pathfinder.

- Central Hidroeléctrica "Pilmaiquén", totalmente a manos del estadounidense, Bankers Trust.

- Copec, control del 41 por ciento - que seguramente pasará a ser mayoritario - compartido entre el grupo Angelini y la empresa neozelandesa Carter Holt Harvey.

- Enx, adquirida por la filial de Shell.

- Enaex, dos tercios de su capital fueron privatizados al mayor productor estadounidense de explosivos, Austin Powder, y el tercio restante vendido a Famae.

PARA TERMINAR, EL PROBLEMA DE FONDO.

¿Qué objetivos se proponen los grupos económicos y el gobierno militar de Pinochet con la desnacionalización y/o transnacionalización de la economía nacional?

El ingeniero Héctor Donoso, integrante del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, lo dice en forma sintética y clara en una carta que envió a la prensa en octubre del año pasado:

"La verdad es que los grupos económicos, causantes del desastre financiero que se develó en enero de 1983, aspiran a barrer al Estado del campo productivo en forma irreversible de manera de mantenerse, vigentes y hegemónicos, mas allá del presente régimen, lo que les daría un poder económico y político permanente. Piensan que la presencia de las compañías internacionales en este proyecto complicaría, en el futuro, la recuperación de sus empresas estatales por parte de la comunidad chilena ya que todo movimiento, en este sentido, tendría que pasar por una dura lucha nacionalizadora y enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional y la banca mundial"

Evidentemente la transnacionalización de la economía, y de otras formas políticas e ideológicas, forma parte del proyecto de la dictadura de institucionalizar en el poder, de proyectar el actual régimen militar mediante la aplicación de la Constitución de 1980.

Pero es también una verdad que impone la experiencia política que la permanencia de una determinada legalidad está en correspondencia a las correlaciones de fuerzas sociales y políticas que se vayan conformando.

Por eso corresponde conocer y asumir la actual realidad que ha venido imponiendo el régimen militar para superarla buscando la unidad del pueblo, a través de la movilización y

la lucha, para derrotar a la dictadura y sus designios.

En esta lucha contra la desnacionalización constituye un hito relevante la acción del gobierno del presidente Salvador Allende de nacionalizar la gran minería del cobre e instituir, el 11 de julio, como el Día de la Dignidad Nacional.



internacional

El Gran Octubre y nosotros, los países dependientes

por Orlando Millas

La proximidad del 70º aniversario de la revolución soviética asigna especial interés al análisis de las proyecciones que tiene ese acontecimiento en relación al desarrollo de los procesos históricos de nuestro tiempo en el sector del mundo en que está insertado Chile.

La transición revolucionaria del capitalismo al socialismo y al comunismo, iniciada por el Gran Octubre, corresponde a la maduración como proceso universal de la contradicción entre el carácter social de la producción y la forma capitalista de apropiación. Se crearon las premisas de la primera revolución socialista victoriosa en las condiciones del capitalismo a comienzos de este siglo. Marx consideró siempre al capitalismo como sistema mundial en que se desarrollan dialécticamente, insertadas en él, las economías nacionales, distinguiendo los países capitalistas adelantados y los países capitalistas atrasados. El régimen social que entró en crisis revolucionaria mundial es el nuevo capitalismo, o sea su fase imperialista, que había pasado de la dominación en general del capital a la dominación concreta de la oligarquía financiera. A pocos años de la Gran Revolución Socialista de Octubre, Lenin definió la situación en los siguientes términos: "El capitalismo se ha transformado en un sistema universal de sojuzgamiento colonial y de estrangulación financiera de la inmensa mayoría de la población del planeta por un puñado de países 'adelantados'." (1)

En el Gran Octubre se manifestaron todas las tendencias progresistas de la humanidad, aglutinadas en primer término en re-

lación a la misión liberadora de la clase obrera y, con ello, también en forma destacada las amplias fuerzas de emancipación nacional. Las repercusiones que ha tenido son muy vastas y alcanzan a todas las esferas, distinguiéndose en especial el impulso que ha dado a las luchas proletarias y a los combates de los pueblos sojuzgados.

En los setenta años transcurridos, el mapa del mundo se ha modificado substancialmente en razón de dos fenómenos simultáneos y concurrentes, de una parte las revoluciones socialistas y de otra parte el hundimiento de los imperios coloniales. El imperialismo no ha conseguido estabilizar su dominación, sino que ella agudiza grandes contradicciones y asume caracteres que en la perspectiva histórica subrayan su precariedad y transitoriedad.

En 1914, según acreditó Lenin en "El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo", seis grandes potencias (Inglaterra, Rusia, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón), con una superficie (16.500.000 kilómetros cuadrados) del 12,32% de la terrestre y un número de habitantes (437.200.000) del 26,38% de los del planeta, contaban con colonias de una extensión territorial (40.400.000 kilómetros cuadrados) equivalente al 244,84% de la propia y al 30,17% del mundo y con habitantes (273.800.000) equivalentes al 62,62% de los de esas metrópolis y al 16,52% de la mundial. Además Bélgica, Holanda y otras potencias menores tenían colonias de 9.900.000 kilómetros cuadrados (otro 7,39% de la superficie terrestre) con 45.300.000 habitantes (otro 2,73% de la mundial). Más aún, el análisis científico del problema por Lenin mostró su dimensión superior, haciendo notar la situación de Turquía, Persia y China como semicolonias y la condición de dependencia de otra gran cantidad de países.

En efecto, Lenin verificó "Para esta época son típicos no sólo los dos grupos fundamentales de países - los que poseen colonias y las colonias -, sino también las formas variadas de países dependientes que desde un punto de vista formal, político, gozan de independencia, pero que, en realidad, se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática. Antes hemos señalado ya una de estas formas, la semicolonía. Modelo de otra forma es, por ejemplo, la Argentina". (2) La referencia a Argentina es lícito extenderla al conjunto de América Latina.

Puede decirse, por lo tanto, que objetivamente las oligarquías financieras de las seis grandes potencias y sus aliadas de otras metrópolis coloniales menores habían entrado en contradicción profunda de intereses tanto con la clase obrera como con la inmensa mayoría de la humanidad residente en las colonias, semicolonias y países dependientes. Esta contradicción se desarrollaba en diversos planos, encontrándose en algunas regiones aún parcialmente neutralizada; pero, tendía en general a agudizarse y llegaba en vastos espacios a una situación crítica. El pavoroso crimen imperialista de lanzar al mundo al infierno de la primera guerra mundial acentuó y elevó a un nuevo nivel ese conflicto.

En el Gran Octubre se fundió con su carácter fundamental de revolución socialista el rasgo, que también asumió, de revolución de liberación nacional. En efecto, Lenin calculaba en el antiguo imperio ruso un 20% de población colonial (33 millones 200 mil habitantes, en un total de 169 millones 400 mil) residente en un territorio colonial ascendente al 79% (17.400.000 km². de un total de 22 millones de kilómetros cuadrados) (3). Cuando la clase obrera en alianza con los campesinos encabezó al pueblo ruso y realizó la revolución socialista, también se alzaron a la lucha las otras nacionalidades sujetas a la dominación zarista. A sólo ocho días del 7 de noviembre de 1917 el Estado soviético promulgó la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, proclamando la supresión del yugo nacional, la igualdad y la soberanía de los pueblos de la antigua Rusia, su derecho a la libre autodeterminación, su capacidad incluso para separarse y formar Estados independientes, la abolición de todos los privilegios y restricciones de carácter nacional o religioso. En la gesta de la defensa de la revolución ante las arremetidas reaccionarias y la intervención extranjera, lucharon heroicamente, junto al pueblo ruso, todos los pueblos y las naciones del antiguo imperio e instauraron uno a uno el poder soviético. Se puso en marcha así la construcción de un régimen inédito en la vida de la humanidad, el socialismo, como una tarea conjunta de las naciones que se agruparon voluntariamente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algunas de estas naciones pasaron directamente de formaciones económico-sociales precapitalistas al socialismo. Fue también lo que ocurrió al alcanzar la victoria la revolución mongola y constituirse la República Popular de Mongolia.

Los setenta años transcurridos han solventado, en términos irrecusables, la polémica de comienzos del siglo sobre la perspectiva que presentaba el im-

perialismo a la humanidad. Una serie de destacados teóricos, de economistas burgueses y de dirigentes del movimiento obrero, sostuvieron que, dado que el imperialismo implica un inmenso paso adelante en la socialización de la producción, cabía pronosticar que limaría los conflictos, abriendo camino a una organización más racional de la economía y posibilitando las soluciones de consenso nacionales e internacionales. Carlos Kautsky elaboró la tesis del "ultraimperialismo", o sea de una dirección concertada relativamente idílica por los grandes monopolios internacionales. En oposición a ese enfoque, el estudio científico efectuado por Lenin puso en evidencia que el imperialismo lleva al paroxismo las contradicciones sociales, desata conflictos en todos los niveles, promueve en su grado máximo la violencia, acentúa los desniveles de desarrollo de las economías nacionales, divide al mundo en Estados usureros y una mayoría de Estados deudores, contraponen a las cúspides financieras con las tendencias inagotables a la competencia de las capas burguesas y pequeño-burguesas expoliadas, hace del reparto de los mercados y de la dominación un campo de incesantes luchas, promueve la reacción y el terrorismo de Estado.

Que Lenin tenía razón lo han comprobado las dos guerras mundiales del presente siglo, otra sucesión de conflictos bélicos, el armamentismo desaforado, los regímenes fascistas, las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, las intervenciones tratando de aplastar a sangre y fuego las revoluciones populares, la expoliación extrema de los países dependientes, o sea los crímenes del imperialismo. Y éste tampoco ha logrado estabilizarse, sino que se debate en una crisis general de su sistema, en una permanente guerra comercial y en crisis concretas de su estructura en las esferas financiera, monetaria y energética, así como en su incapacidad para mantener los imperios coloniales, que se han hundido debido al conjunto de las nuevas condiciones históricas y, en especial, a la magnitud de los movimientos de liberación.

Durante el último medio siglo se ha desarrollado con diferentes correlaciones de fuerzas y en distintas condiciones la interacción dialéctica de las corrientes progresistas de la humanidad que en síntesis se vinculan a la misión liberadora de la clase obrera y a las luchas de emancipación nacional, aunque no se las representa en forma adecuada mediante esquemas porque tienen una riqueza viva de múltiples formas de manifestarse y enfrentar problemas concretos.

Un hecho de primera magnitud es la presencia en el mundo de hoy de la Unión Soviética y no sólo de ella. La gravitación en la esfera internacional de los países con regímenes socialistas influye directa o indirectamente en los asuntos decisivos, ha impedido que el imperialismo haya podido en los últimos de-

cenios promover una nueva conflagración universal, frenar la extensión de los conflictos locales y entregar una gran ayuda a los países que defienden sus intereses legítimos, su soberanía y su autodeterminación. De allí la expectación y el entusiasmo con que en las más amplias esferas antimperialistas de todos los continentes se han acogido los procesos de aceleración del desarrollo y de renovación surgidos en países socialistas. La clase obrera, la juventud y, mucho más ampliamente, en general toda la gente bienintencionada del mundo aplaude y deposita esperanzas en la "perestroika" soviética, en el despliegue de un socialismo en constante avance, cada vez más dinámico y creador, con mayor iniciativa y eficiencia, humanista al máximo.

Otro factor que pesa igualmente mucho más allá de sus fronteras es la lucha de clases en los países que son metrópolis del imperialismo. El movimiento obrero toma una nueva dimensión en las condiciones de la revolución científico-técnica y aún cuando no se concretan aún en determinadas regiones las coaliciones sociales antimonopolistas en perspectiva, constantemente se expresan en la solidaridad activa con las luchas anticolonialistas, antisegregacionistas, antifascistas y en general por las más diversas causas nobles de la humanidad. Los chilenos podemos dar testimonio de la importancia de esa solidaridad.

En cuanto a los movimientos mismos de liberación nacional, su eclosión ha sido y es muy variada, rica, multifacética, diversa. Lo mejor es estudiarlos seriamente en concreto, sin aplicarles cartabones y discerniendo el fondo de sus contenidos. Una gran parte del antiguo mundo colonial, semicolonial y dependiente ha avanzado ya a la formación económico-social socialista. El socialismo ha llegado también a América, donde se acrecienta día a día el prestigio y la influencia de la luminosa revolución cubana. Se desarrollan nuevas revoluciones populares, de las cuales igualmente en América Latina tenemos el ejemplo del heroísmo como que hoy en día la revolución sandinista de Nicaragua enfrenta la agresión desenfadada de Estados Unidos. De otra parte, hay un número muy grande de procesos sociales que se ha englobado como de "democracia revolucionaria" o "democracia nacional" y que suelen revestir en su complejidad incluso caracteres contradictorios. De lo que se trata, en substancia, es que se dan distintas correlaciones clasistas, ideológicas y políticas en el curso del enfrentamiento del vasto mundo de los países emergentes, de los que han conquistado en los últimos decenios su independencia y de los que son de antigua prosapia republicana pero sometidos a la dependencia, o sea de la mayoría de la humanidad contra la política neocolonialista del imperialismo.

Puntos álgidos de este enfrentamiento son las zonas en que el imperialismo emplea como fuerzas de

choque a los regímenes del África del Sur y de Israel y en otras en que sostiene guerras no declaradas contra naciones democráticas avanzadas, como son los casos de Nicaragua, Afganistán y Campuchea. Hay una gama muy heterogénea, múltiple y mutable de situaciones caracterizadas por distintos momentos y grados de conflicto de los países dependientes con el imperialismo. Por ejemplo, en América Latina constituye ya de por sí un acontecimiento positivo que después de la ola de procesos democráticos en la mayor parte del Cono Sur - aunque por otra parte aún subsista una tiranía tan antipatriótica como es la de Pinochet - haya llegado a predominar en la región un ansia conjunta de los gobiernos capitalistas más o menos democráticos latinoamericanos de hacer oír una voz propia en el concierto internacional y se haya hecho normal la reunión conjunta del grupo de Contadora y el grupo de apoyo.

En condiciones de tanta diferenciación de situaciones, es notable que, sin embargo, se alcance una coherencia básica en el trascendental Movimiento de los Países No Alineados, en una serie de otros organismos de coordinación regional y por esferas específicas y en las diversas tribunas internacionales. La razón no puede ser otra que la magnitud y profundidad de los problemas comunes.

En efecto, el dogal imperialista asfixia a la mayoría del mundo integrada por los países dependientes de Asia, África y América Latina. Los mecanismos financieros estrangulan como expresión sublimada del neocolonialismo. La doctrina norteamericana del neoglobalismo hace restallar el látigo erigiéndose Estados Unidos en gendarme mundial acosado a la vez por su lucha a muerte con sus socios de Europa Occidental y el Japón. Los términos de intercambio se han deteriorado y continúan deteriorándose al extremo. Se atrae gigantescas fugas de capital. Un inmenso porcentaje del comercio exterior de esta zona es manejado por las transnacionales imperialistas dominando las transferencias onerosas de tecnología, los mercados, el transporte, los seguros y el financiamiento. Crecen los retornos de utilidades. La deuda externa se ha convertido en un supersistema de despojo en que, a base de las condiciones iniciales usurarias, mientras más se paga más se debe, haciéndose imposible atenderla sin hundir las economías nacionales. Como consecuencia de todos estos factores, los países dependientes se han convertido, como se dice eufemísticamente, en grandes exportadores, además de mercaderías cada día más mal pagadas, de capitales; pero, no se trata de que hagan inversiones, sino de que son literalmente saqueados. En dicha expropiación está la raíz de la tragedia ecológica, de la violación ilimitada de los derechos humanos, del hambre de millones y millones, del retraso tecnológico, de la estagnación de las economías y de un sinnúmero de otros problemas,

conflictos y dramas.

El mundo está en presencia de un nuevo salto cualitativo en el desarrollo de las fuerzas productivas. La aceleración del proceso de desgaste de los instrumentos de producción requiere una gigantesca cantidad de capital fijo. El gasto en capital fijo es hoy tres veces el de los años 70. En estas condiciones, Estados Unidos y otras potencias imperialistas recurren, para sostener una demencial carrera de armamentos, que deforma su proceso de reproducción interna, a descargar su financiamiento sobre el saqueo máximo de los países dependientes, de todos ellos, los grandes y los pequeños, los más adelantados y los más atrasados, sin excepción. La fabulosa inversión en armamentos no crea ganancias máximas, es un derroche de capital muerto y, en las circunstancias actuales de hambre de capital fijo, se la está haciendo pesar sobre las naciones dependientes. Hay una dialéctica viva entre la paz como cuestión de sobrevivencia de la humanidad, la paz como única forma de afrontar los problemas contemporáneos y la paz, específicamente, como reivindicación de sus derechos e intereses por los países dependientes y como tarea que engloba las reivindicaciones inaplazables de los movimientos de liberación nacional.

El curso real de la evolución del imperialismo, los caracteres catastróficos que ya la crisis cíclica internacional capitalista de comienzos de esta década tuvo para el mundo dependiente y la perspectiva peor que acompaña a la que se está gestando, la agudización de todas las contradicciones objetivas plantea tareas de gran envergadura a los movimientos de liberación nacional y a los gobiernos democráticos de nuestros países y hace prever que deberán tender a cohesionarse e intervenir como gran fuerza progresista en favor de la paz, de la democracia, de los derechos humanos, de la emancipación y fraternidad de los pueblos y del avance social.

(1) Lenin. "Obras Escogidas en Doce Tomos". En español. Editorial Progreso. Moscú. 1976. Tomo V. Pág. 376 ("El Imperialismo, fase superior del capitalismo").

Idem. Pág. 456.

Idem. Pág. 418.

económico

"Resumen económico primer trimestre 1987"

por Hugo Fazio

- (- El país sufre el mayor proceso de des nacionalizador de su historia.
- "Energicidio" contra Chile.
- Se amplía proceso privatizador.
- Fuerte expansión de los principales grupos económicos.
- Régimen constituye grupos de poder en bancos de Chile y de Santiago.
- El "salvataje" del grupo Cruzat.
- FMI resolvió programa macroeconómico de 1987.
- El "milagro" en el endeudamiento externo.
- Decisión brasileña precipitó acuerdo con banca acreedora.
- Trigo: preocupación por producción record.
- CNT demanda reajuste de 22%.
- Despido masivo de miles de profesores.
- "Una solución justa a la deuda habitacional").

1987 se inició teniendo como característica central el recrudecimiento de la ofensiva fascista en tres direcciones interrelacionadas: la privatización de patrimonios estatales, la expansión de los principales grupos económicos presentes en el país y la globalización del dominio en Chile del capital imperialista, mediante el control directo de corporaciones transnacionales de empresas establecidas en el territorio nacional. Al iniciarse el año el plan de privatizaciones se amplió. Corfo anunció la subasta de nuevas filiales, al tiempo que se comunicaba que los diferentes ministerios le traspasarían sus empresas, ampliando así su papel de virtual martillero público. Grandes sociedades anónimas hasta al año pasado pertenecientes a Corfo cuentan ya con mayoría accionaria privada. Al finalizar el trimestre, como expresión gráfica de este proceso, Chilectra Metropolitana eligió un directorio con mayoría privada.

El cuadro de los grupos económicos se ha modificado sensiblemente desde 1983. Hoy, además, los principales grupos de capitales nacionales están asociados más estrechamente con capitales extranjeros. Al mismo tiempo, corporaciones transnacionales han constituido fuertes conglomerados en el país, aprovechando las privatizaciones, la posibilidad de transformar pagarés de la deuda externa en propiedad empresarial y el derrumbe sufrido por grandes intereses económicos internos. Los balances de 1986 mostraron que los grupos económicos se encuentran en un pleno proceso de expansión, aumentando sus patrimonios y generando altas utilidades. La conformación de directorios privados en los bancos de Chile y de Santiago - los dos más importantes del país, si se exceptúa el Banco del Estado - implica la constitución de nuevos grupos de poder económico, que surgen desde el interior del propio régimen.

El primer trimestre se caracterizó también, en lo que constituye una constante, por las gestiones vinculadas a la renegociación de la deuda y a obtener financiamiento externo destinado, en lo fundamental, a pagar los intereses adeudados al exterior. La economía chilena funciona entrampada como resultado del sistema de dominación establecido por la trilogía conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos acreedores. En el trimestre, como viene sucediendo en los inicios de cada año, el directorio del FMI aprobó el programa macroeconómico anual. La renegociación de la deuda con la banca acreedora - al resolverse en base a la fórmula propuesta por la tiranía de "chutear" hacia adelante el pago de intereses - finalizó sin que las institu-

ciones externas desembolsasen nominalmente "dinero fresco". La banca acreedora se esfuerza por incrementar los recursos que extrae del país. El economista Ricardo Ffrench Davis calculó en 1.100 millones de dólares las transferencias netas en su beneficio a producirse en el curso del presente año ("El Mercurio", 14-3-87). Este monto, por el acuerdo suscrito de prorrogar para el año siguiente el pago de intereses, descenderá en 1988, para volverse a elevar en 1989. La banca acreedora desde el reinicio en 1983 de los procesos de renegociación de la deuda externa viene disminuyendo sostenidamente los desembolsos de fondos destinados a pagarle en definitiva los intereses adeudados. En 1983-1984 proporcionó 2.100 millones de dólares de "dinero fresco", monto que descendió en 1985-1986 a 1.600 millones, para transformarse ahora sólo en una prórroga en el pago de intereses del próximo año. Postergación estimada, de acuerdo a cifras oficiales, en 447 millones de dólares.

En los primeros meses del año continuó el proceso de recuperación en los índices de actividad económica. El Índice de Actividad Económica Desestacionalizado, elaborado por el semanario "Estrategia", aumentó en el primer bimestre en un 5,9%, prosiguiendo con una tendencia que se manifiesta ininterrumpidamente desde el último trimestre de 1985. Sin embargo, el Índice de Actividad permanece aún un 9,5% por debajo de los niveles alcanzados en enero-febrero de 1981, antes del inicio de la crisis cíclica. Este proceso de recuperación se da con claras manifestaciones de desajustes en variables claves, para la propia política diseñada con el Fondo Monetario, obligando al equipo económico fascista, como constató "El Mercurio" (25-3-87), a actuar principalmente sobre las tasas de interés para buscar "frenar el crecimiento de la economía". La preocupación oficial, indica "El Mercurio", surge de la persistencia de tasas de inflación "pegadas" en niveles de 17% anual y, sobre todo, por la caída experimentada en el curso de 1987 en el excedente en la balanza comercial, situación que afecta el punto central de la política diseñada con el Fondo Monetario: generar recursos destinados a servir en parte el pago de intereses de la deuda. Si se proyecta a doce meses el superávit comercial del primer bimestre alcanza a poco más de 700 millones de dólares, en circunstancias que el programa macroeconómico establece un saldo positivo de 1.072,4 millones de dólares. "La tendencia ascendente del superávit comercial - anota con preocupación "El Mercurio" (14-3-87) - dejó de ser tal hace ya varios meses", para concluir a continuación que ello provoca "una restricción objetiva" en la recuperación económica. Los "frenos" aplicados persiguen cumplir con las decisiones establecidas con el FMI.

Cuadro N° 1

**INDICE ESTRATEGIA DE ACTIVIDAD
ECONOMICA DESESTACIONALIZADO.**

(Base: enero-febrero de 1981=100)

	IEAED	Indice		IEAED	Ind.
1981, enr-feb	112,15	100,0	1985, enr-feb	90,15	80,4
1982, enr-feb	92,70	82,7	1986, enr-feb	95,80	85,4
1983, enr-feb	84,25	75,1	1987, enr-feb	101,50	90,5
1984, enr-feb	89,60	79,9			

**EL PAIS SUFRE EL MAYOR PROCESO
DESNACIONALIZADOR DE SU HISTORIA.**

El investigador Patricio Rozas - comentando un estudio efectuado en conjunto con Oscar Marín sobre el notable crecimiento registrado en el curso de la década en la presencia en el país de corporaciones transnacionales - sostuvo, con pleno fundamento, que se vive "el mayor período de desnacionalización que ha conocido nuestra historia patria" ("Hoy", 16-3-87). Esta expansión se ve facilitada y estimulada por las condiciones extraordinariamente favorables creadas por la tiranía a la penetración extranjera. "El capitalismo autoritario - concluye Rozas, dando esta denominación al fascismo -, con sus pautas coercitivas, dio un espacio ideal al desarrollo transnacional". En los últimos años, el dominio del capital imperialista sobre la economía chilena se hizo más pleno, al pasar corporaciones transnacionales a controlar directamente numerosas empresas en el territorio nacional. Hasta el momento de darse este proceso, el saqueo imperialista se materializaba preferentemente por la vía financiera y mecanismos de comercio exterior. Ahora se globalizó.

Este proceso de penetración de capitales extranjeros se encuentra en pleno desarrollo. El estudio de Rozas y Marín analiza a nueve grupos transnacionales, cuatro de los cuales - British American Tobacco, Swedish Match Holding Inc., Blue Circle Industries y Bin Mahfouz - son clasificadas "como esencialmente industriales" - y el resto - Citibank, Bankers Trust, Aetna, American International Group y el grupo venezolano Cavendes - "como financieros". La investigación deja constancia que no pudo estudiar los antecedentes de la transnacional suiza Nestlé, por tratarse de una sociedad anónima cerrada, es decir plenamente dominada por un sólo accionista. Los nueve grupos analizados controlaban o tenían participación en 1986 en la propiedad de 121 empresas, las cuales contaban con un patrimonio global de 2.800 millones de dólares.

La penetración de las corporaciones transnacionales se ha producido, básicamente, sin generar nuevas empresas, sino que apoderándose a través de diferentes procedimientos de sociedades en pleno funcionamiento. Rozas y Marín destacan tres mecanismos: "capitalizar deudas y aceptar el traspaso de activos como modalidad de pago; compra de industrias que pertenecen a los grupos quebrados; adquisición de paquetes accionarios de empresas del Estado". El proceso se vio fuertemente estimulado al posibilitar la tiranía transformar pagarés de la deuda externa incobrables en propiedad de empresas radicadas en el país. De acuerdo a antecedentes proporcionados por el presidente del Banco Central, hasta fines de febrero, se habían efectuado operaciones de conversión de deuda externa - por distintos mecanismos, entre los cuales el más usado fue transformar los pagarés de la deuda externa - por 1.676 millones de dólares. El director de Política Internacional del instituto emisor, Francisco Garcés, por su parte, señaló que ello "era reflejo de la vocación pionera que anima al equipo económico" ("El Mercurio", 18-3-87). La verdad es que esta política lo que refleja es el carácter profundamente antinacional de toda la política fascista.

En esta ofensiva desnacionalizadora pasará también a desempeñar en el futuro un papel protagónico la inversión en acciones que - por autorización de la dictadura - vienen desde hace algún tiempo realizando las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), dado que una parte sustancial de los fondos acumulados por los imponentes son manejados por tres consorcios norteamericanos: Bankers Trust, Aetna y American International Group, que controlan, respectivamente, las AFP Provida, Santa María y Unión. Al finalizar 1986 el monto total de la inversión en acciones de las AFP ascendía a 16.298 millones de pesos (aproximadamente 77,6 millones de dólares al cambio oficial de esa fecha), en un curso que se encuentra recién en sus inicios. Los fondos de los imponentes constituyen en la actualidad la principal fuente de ahorro interno privado. La propiedad accionaria de las mencionadas AFP se concentra, por el momento, en Soquimich, Entel y Chilectra Metropolitana.

La política de privatización y penetración de corporaciones transnacionales conduce al país, ha denunciado el Colegio de Ingenieros, a una "situación de riesgo límite". "El riesgo - enfatiza el organismo profesional - no es posible ocultarlo sin cometer un crimen de lesa patria: Extranjeros dueños de las empresas ejes de la economía del país.

Extranjeros

administrando sus operaciones y remesando al exterior sus utilidades. Extranjeros determinando qué y cuáles tecnologías adquirir o abandonar y cuándo obtenerlas y no obtenerlas. Extranjeros determinando la estrategia de desarrollo del país, es decir ¡a donde ir!". ("Fortín Mapocho", 9-3-87).

El esfuerzo desnacionalizador se inscribe en un gran esfuerzo del régimen por estrechar todavía más sus lazos con el capital transnacional, en el marco de sus planes por perpetuarse en el poder. Los investigadores destacan que "esta mayor participación en la propiedad de grandes empresas y su mayor peso relativo como grupo de poder compromete al espíritu transnacional de modo más estrecho con la dictadura de Pinochet, su política económica y las formas autoritarias de dominación política" ("Fortín Mapocho", 16-3-87). Mirado desde otro ángulo, este proceso es la concreción de las obligaciones contraídas por la tiranía en el curso de los procesos de renegociación de la deuda externa.

"ENERGICIDIO" CONTRA CHILE.

El Centro de Ingenieros de la Empresa Nacional de Petróleos (ENAP) de Magallanes calificó de "energicidio" contra Chile ("Análisis", 17-2-87) el proyecto celebrado entre la tiranía y el poderoso consorcio norteamericano Allied Signal, para poner en marcha la planta de metanol de Cape Horn, en el extremo austral del país, calculada para atender un 5% del consumo mundial. Este proyecto fue la mayor inversión extranjera autorizada durante 1985. En dicho año, la suma total autorizada llegó a algo más de 420 millones de dólares, de los cuales 250 millones pertenecen al proyecto presentado por la sociedad Cape Horn Methanol Ltda., constituida por The Henley Group, filial de Allied Signal, con un 80% del capital accionario; la Compañía Financiera Internacional, agencia del Banco Mundial, con un 8%; la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, del grupo Matte, con un 10%; y la Comunidad Menéndez, con el restante 2%. El año pasado la inversión extranjera autorizada se redujo a 262 millones de dólares, para volver a incrementarse en el presente año, al suscribirse en enero un contrato del orden de los 300 millones de dólares, que entrega a otra transnacional norteamericana, AMAX, yacimientos de litio en la Segunda Región.

De acuerdo a antecedentes oficiales, la inversión extranjera materializada, bajo el amparo del DL 600, desde el año de su promulgación, 1974, llega a aproximadamente 2.600 millones de dólares, con un promedio anual, por consiguiente, cercano a los 200 millones de dólares. La inversión neta efec-

tuada se reduce fuertemente si se consideran los dividendos y las utilidades remesadas al exterior. De hacerse este cálculo, ha editorializado "El Mercurio", (20-2-87), "se comprueba que la inversión extranjera ha tenido un impacto poco significativo en la balanza de pagos. El flujo de capitales extranjeros - agrega el diario - se ha basado indiscutiblemente en los créditos internacionales y no en el capital de riesgo". Esta tendencia a no comprometer recursos líquidos en el país se acentuó luego que la dictadura posibilitó realizar inversiones utilizando pagarés de la deuda externa.

En lo fundamental, la inversión extranjera directa en los años de fascismo, ha tenido lugar cuando se trata de proyectos en los que, gracias preferentemente a franquicias y regalías extraordinarias concedidas por la tiranía, se garantiza una rápida recuperación. Un ejemplo muy claro de ello lo proporciona el proyecto metanol. "Con el mercado vigente y considerando que nuestras importaciones se hacen a 13 dólares por barril - señala el análisis de los ingenieros de la ENAP de Magallanes, utilizando datos de noviembre de 1986 -, cada unidad de materia prima energética importada cuesta 3,6 veces más de lo que pagará el inversionista en metanol; en lenguaje simple; compramos energía a 3,6 veces y vendemos a uno". Si el petróleo vuelve a subir, añade el estudio - como efectivamente ha acontecido - la magnitud de esta relación se hace aún más desfavorable. El balance para Chile es desastroso. De acuerdo a cifras entregadas por "Análisis", utilizando la investigación efectuada por los ingenieros de ENAP Magallanes, el acuerdo con Allied Signal de suministros de gas durante veinte años "aportará al país un ingreso neto de 300 millones de dólares, cuando el beneficio de consumir el recurso en Chile habría reportado un ahorro por menores importaciones ... equivalente a 1.941 millones de dólares. "Es una situación francamente inexplicable - indican textualmente los ingenieros de ENAP -, considerando además que los contratos quedaron sometidos a las leyes del país del inversionista (Estados Unidos), garantizándoles flujos positivos de beneficios durante toda la vida del proyecto, y con precios "blandos" que van subiendo a medida amortice sus instalaciones".

Este proyecto antinacional es, en realidad, un primer paso también en los planes de privatizar y extranjerizar la ENAP. Con el agravante, en el caso analizado, que un país importador de hidrocarburos - lo que le implica un egreso de divisas considerable - se desprende de reservas cuantiosas muy por debajo de su valor. Los planes privatizadores de ENAP se proponen avanzar a futuro por dos vías simultáneas. Una de ellas consiste en la fusión de sus dos refinerías (Petrox de San Vicente y Concón), para luego transformarla en una filial de Corfo, e iniciar posteriormente el tan conocido camino de venta del capital

accionario a intereses privados. La otra vía consiste en materializar un estudio ya iniciado para que "firmas privadas se hagan cargo de las explotaciones de algunos yacimientos" ("El Mercurio", 15-2-87).

SE AMPLIA PROCESO PRIVATIZADOR.

La decisión de la dictadura de traspasar a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) las empresas dependientes hasta ahora de diferentes ministerios - entre otras empresas Ferrocarriles del Estado, Empresa Marítima, Empresa Portuaria de Chile, Instituto de Seguros del Estado y el metro de Santiago -, constituye un nuevo capítulo en su desfrenado proceso privatizador. Corfo cumple en la actualidad, de preferencia, el papel de liquidador del patrimonio público a precio de liquidación. En 1986 puso en marcha mecanismos destinados a la privatización de 14 de sus filiales en varios casos totalmente. "Estos traspasos - recordó el semanario "Estrategia", (29-12-86) - se iniciaron a fines de 1985 y ... constituyen la tercera fase de un plan que desde 1974 ya ha realizado la venta de 92 empresas, 11 bancos y la liquidación de 49 empresas por activos (básicamente a través de licitaciones públicas), además de la devolución de 350 empresas requisadas o intervenidas".

Cuadro N.2

VENTAS DE EMPRESAS Y ACTIVOS CORFO

(Fuente: "Semines" N.77, febrero de 1987.
En millones de dólares de marzo de 1986)

Año	Empresas	Activos y otros (1)	Total
1974	3,5	14,1	17,6
1975	47,8	202,6	250,4
1976	93,5	25,8	119,3
1977	104,6	34,2	138,8
1978	77,0	51,3	128,3
1979	139,6	44,3	183,9
1980	24,0	53,7	77,7
1981	99,0	15,4	114,4
1982	8,6	2,1	10,7
1983	4,6	2,5	7,1
1984	5,4	25,7	31,1
1985	32,6	2,4	35,0
1986 (2)	200,0	s/1	200,0

(1). Incluye la venta de paquetes de acciones bancarias.

(2). Estimación en base a los ingresos por ventas en 1986.

En 1987, CORFO se propone iniciar o culminar la privatización de nuevas filiales. Licitará el gigan-

tesco Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y las empresas eléctricas Pullinque y Atacama. Pondrá a la venta parte del capital accionario - en un proceso que la experiencia ha demostrado que sigue un curso ascendente, hasta alcanzarse la mayoría privada - de la Empresa Nacional de Carbón, Carbonífera Schwager, LAN Chile, Endesa, la central hidroeléctrica Colbún Machicura y la Compañía de Teléfonos de Chile. Además, de continuar las privatizaciones iniciadas en 1986.

"Este traspaso de activos - saludó jubilosamente "El Mercurio", (10-1-87), comentando el proceso privatizador - ha adquirido rapidez, y la decisión de sacar el manejo ministerial de los ministerios para traspasarlos a la Corporación de Fomento es un paso positivo en la línea de modernización del sector público. La venta de acciones de empresas del Estado y el traspaso de unidades productivas controladas por la banca - agrega el diario de la familia Edwards - son las medidas de mayor importancia en el proceso de democratización económica. La reciente decisión de traspasar a CORFO las empresas bajo control ministerial es, también, un avance importante...". Estos pasos son, en oposición a lo aseverado por el vocero del régimen, la negación de la democracia - dado que acentúan el control del país por parte de una pequeña minoría - y no implican la menor "modernización". Por el contrario, son demostración del alto grado de parasitismo de las corporaciones transnacionales y los grandes intereses económicos internos, quienes no realizan la menor inversión para crear nuevas actividades, limitándose a apoderarse en operaciones altamente escandalosas de patrimonios públicos.

Las privatizaciones han tomado características tan desvergonzadas que incluso órganos de prensa empresariales o personeros cercanos al propio régimen han debido reconocerlo abiertamente. El abogado de empresas norteamericanas y cabeza de un conglomerado empresarial, Ricardo Claro, afirmó - antes de beneficiarse con este proceso al pasar a ser el accionista mayoritario de la Empresa Nacional de Explosivos - que en la venta de empresas públicas existe un "clima amoral" ("Estrategia", 5-1-87). El semanario "Estrategia", (29-12-86), a su turno, constató "que determinadas empresas están siendo adquiridas por personas que, de una u otra forma ejercen cargos públicos". En efecto, por ejemplo, Bruno Phillipi y Andrés Concha, "asesores de Inversiones Extranjeras y de la Cancillería, respectivamente", forman parte de los directorios constituidos por el Bankers Trust en la central hidroeléctrica Pilmaiquén y en la AFP Provida ("Análisis", 24-3-87). Francisco Javier Errázuriz - cabeza del grupo económico que se conoce con su nombre y que se califica a sí mismo como "defensor del régimen militar" - señaló, por su parte: "cualquiera podría pensar que las están vendiendo entre amigos" ("Análisis", 13-1-87).

Este es el sello de la "modernización" y "democratización" fascista.

"Quiénes están comprando las empresas públicas - subrayaron en un estudio el economista Enrique Errázuriz y el abogado Esteban Tomic - están obteniendo en algunos casos (sin aportar nada nuevo) tasas de rentabilidad que exceden del 25 o 30%... Las enormes utilidades que están haciendo los afortunados compradores que poseen recursos para adquirir el patrimonio público tienen como contraparte una ingente pérdida patrimonial para el Estado que superaría los mil millones de dólares" ("Hoy", 12-1-87). Las filiales CORFO - la generalidad de las cuales se encuentran en proceso de privatización o han sido ya en algunos casos entregadas a mayorías accionarias privadas - obtuvieron el año pasado utilidades por 49.765,1 millones de pesos (245,1 millones de dólares, al cambio oficial del 31 de diciembre de 1986), suma casi veinte veces superior a los resultados netos de 1985.

La ampliación del proceso privatizador acentúa todavía más estos atentados contra el país, los cuales sólo podrán ser frenados si el pueblo con su lucha se moviliza activamente para detenerlos.

FUERTE EXPANSION DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONOMICOS.

La política económica fascista está posibilitando a los grandes intereses generar fuertes utilidades, facilitando de esta manera el proceso de expansión de los principales grupos económicos. Así lo demuestran los resultados de las sociedades anónimas abiertas en el ejercicio 1986. El crecimiento de las ganancias de varios grupos, si se compara con 1985, es espectacular. En el caso de las sociedades anónimas abiertas controladas por Anacleto Angelini - considerando para efectos comparativos en ambos años al conglomerado Copec, cuyo control lo alcanzó en el curso del año pasado, en conjunto con el consorcio neozelandés Carter Holt Harvey - este crecimiento llegó al 556,8%, pasando sus utilidades de 4.205,9 a 27.622,9 millones de pesos (es decir, de 20,7 a 136,1 millones de dólares, aproximadamente). Este incremento se dio, en buena parte, como consecuencia de las altas ganancias registradas por Copec, el mayor conglomerado del país. Sus utilidades alcanzaron a 12.467,4 millones de pesos, monto que sube más o menos a 18.000 millones si se tiene en cuenta las sumas destinadas a absorber pérdidas de años anteriores, castigos e inversiones financieras.

Cuadro N° 3

GRUPO ANGELINI: RESULTADO DE SUS SOCIEDADES ANONIMAS ABIERTAS.

(Fuente: Balances al 31-12-86. En millones de pesos constantes de diciembre 1986)

Sociedad	Utilidades		Patrimonios	
	1986	1985	1986	1985
Copec	12.467,4	-2.724,2	45.792,8	31.937,3
Eperva	6.111,4	2.764,5	19.520,7	13.916,5
Indo	6.306,3	2.880,9	19.717,2	14.008,3
Iquique	1.383,0	599,7	13.601,9	12.398,3
Chilemar	668,3	270,2	2.229,3	1.647,1
Maderas				
Cholguan	359,1	219,7	3.559,2	2.972,1
Forestal				
Cholguan	327,4	195,1	4.432,7	3.937,3
Total	27.622,9	4.205,9	108.853,8	80.816,9

Las sociedades anónimas abiertas del grupo Matte - si se incluye, como en el caso anterior en ambos años Inforsa, cuyo control recién alcanzó al finalizar 1986 - triplicaron sus ganancias, al pasar de 6.180,8 a 20.837,1 millones de pesos (o sea, de 30,4 a 102,1 millones de dólares). Las mas altas utilidades del grupo Matte provienen de su principal conglomerado, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. Los resultados del grupo Luksic quiebran esta tendencia general. Si bien las utilidades de Madeco y Lucchetti se duplicaron, en el resultado global de las sociedades anónimas abiertas del grupo pesan mucho las pérdidas que se siguen produciendo en la Compañía de Cervecerías Unidas, cuyo control tomó el año pasado, en partes iguales, con el consorcio germanooccidental Paulaner. Las utilidades de las principales sociedades anónimas dirigidas por Ricardo Claro - Elcmetel y Cristalerías Chile - también se duplicaron.

Cuadro N.4

GRUPO MATTE: RESULTADO DE SUS SOCIEDADES ANONIMAS ABIERTAS.

(Fuente: Balances al 31-12-86. En millones de pesos constantes de diciembre de 1986)

Sociedad	Utilidades		Patrimonios	
	1986	1985	1986	1985
Papeles y Cartones	11.330,2	7.391,1	86.333,4	73.268,9
Minera				
Valparaíso	4.062,6	2.788,2	27.515,5	23.501,4
Inmobiliaria Urbana	638,9	464,6	4.575,5	4.336,8
Volcan	659,0	469,1	1.806,9	3.001,9

AFP Summa	240,1	166,2	979,5	829,4
Forestanac				
(en liq.)	- 56,9	237,9	161,4	1.595,4
Pizarreno (1)	889,0	638,9	8.314,1	7.868,1
Bice	1.283,4	182,1	3.808,7	2.596,8
Puerto				
Lirquén	361,0	350,5	2.169,8	1.782,3
Inforsa	1.429,8	-6.509,8	5.034,1	3.243,5
Total	20.837,1	6.100,8	140.698,9	122.024,5

(1). En sociedad con capitales belgas.

Este proceso de expansión y de elevadas utilidades es muy notorio igualmente en los consorcios extranjeros que actúan como conglomerados en el país. Estos intereses transnacionales han pasado a tener existentes muy destacado en el listado de los principales grupos económicos presentes en Chile. Un ejemplo claro de ello lo proporciona el consorcio de origen británico British American Tobacco. Esta transnacional, que inició sus actividades en el país en 1922 en la industria del tabaco, desde 1981 inició un vigoroso proceso de diversificación en sus inversiones, precisamente en el momento que se hacía patente la crisis de los mayores grupos económicos nacionales y la economía chilena se precipitaba en una aguda crisis cíclica. Este proceso lo enfrentó tomando dentro del territorio nacional la forma de un conglomerado, encabezado por Empresas CCT S.A., constituido en agosto de 1985. El grupo CCT, como han señalado los investigadores Patricio Rozas y Oscar Marín en su estudio ya citado, constituye "una de las máximas instancias de centralización del capital industrial transnacional presente en la economía chilena, tras iniciar una fuerte diversificación de sus inversiones en la industria nacional a partir de 1981".

El estudio destaca que sus inversiones se extienden desde la elaboración de papas fritas hasta negocios de ropa de moda de marcas famosas, pasando por la agroindustria y conservando el monopolio en la producción y la comercialización de los cigarrillos.

Junto con las utilidades crecieron los patrimonios controlados por los grandes grupos económicos presentes en el país. De acuerdo a los balances a diciembre de 1986, de las sociedades anónimas abiertas, el "Mapa de la Extrema Riqueza" lo encabeza el grupo de Eliodoro Matte, con patrimonios para las empresas analizadas de 136.890,2 millones de pesos (más o menos 674,3 millones de dólares al cambio oficial de diciembre del año pasado). Le sigue el grupo de Anacleto Angelini con un patrimonio ascendente a 108.835,9 millones de pesos (536,1 millones de dólares). La presencia del grupo Angelini, sin duda, va a fortalecerse cuando se normalice la situación patrimonial del conglomerado Copec, que disminuyó

sensiblemente por el colapso del grupo Cruzat-Larraz. Entre los capitales extranjeros presentes en el país como grupos económicos destacan el banquero árabe saudita Salim Ahmed Bin Mahfouz, que utiliza como sociedad madre para sus inversiones en Chile una empresa radicada en las Islas Caimán, en las Indias Occidentales Británicas, y el "Grupo de Empresas CCT". El primero participa en 37 sociedades con un patrimonio superior a los 400 millones de dólares, y el segundo en varias empresas de las cuales las cinco más importantes tenían al finalizar 1986 un patrimonio ligeramente inferior a los 130 millones de dólares.

Cuadro N.5

EL CONTROL ACCIONARIO DEL GRUPO BIN MAHFOUZ.

(Fuente: Patricio Rozas y Oscar Marín, "Estrategias de grupos multinacionales en situaciones recesivas: el caso de Chile 1980-1986. En porcentaje de control del total accionario de la sociedad)

I.- Empresas Agrícolas-Industriales	%
Agrícola, Forestal Santa Agatha	100
For. Tamagaleones S.A.	99
II.- Industriales	
Masira S.A.	87
Laminadora de Maderas S.A.	80
Maderas y Paneles S.A.	
Aserradero Valdivia Ltda.	50
Cemento Polpaico	41
Vidrios Planos Lirquén S.A.	94
Vidrios Planos Cerrillos S.A.	100
Madeco S.A.	3
Transformadores Tusan	98
Chilena de Medidores	49
III.- Energéticas	
Electricidad Industrial	23
Gas de Santiago	55
Electroindustrial Polpaico	41
Cia. Nacional de Fuerza Eléctrica	96
Melocotón Ltda.	25
IV.- Comerciales	
Cemco Ltda.	s/d
Comercial Lirquén Ltda.	100
Comercial Bío-Bío S.A.	96
Comercial Gasco Ltda.	100
C. y D. Internacional S.A.	100
C. y D. Internacional Ltda.	100
Comercio y Desarrollo S.A.	100

V.- Serv.No Financieros

Soc.Adm.Carrera Ltda.	50
Transportes Cerro Blanco	98
Indiver S.A.	15
Inversiones Coigue Ltda.	100
Inversiones Pathfinder	100
Pathfinder Securitass	100
Inmobiliaria General	100
Computacion Binaria S.A.	59
C. y D. Serv. Portuarios	100

VI. Serv. Financieros

Banco Sudamericano	3
Seguros El Roble	14
AFP Summa	9

VII.No clasificados

Sociedad Pétreos S.A.	99
-----------------------	----

Chile vive nuevamente - después de la crisis iniciada en 1981 y del derrumbe de grandes grupos económicos en 1983 - un fuerte proceso de expansión del capital monopólico. A diferencia de la etapa de crecimiento similar de la década pasada, este proceso se da con una fuerte presencia de capitales extranjeros, que han constituido sus propios grupos en Chile, aprovechando las franquicias otorgadas por el régimen fascista.

REGIMEN CONSTITUYE GRUPOS DE PODER
EN BANCOS DE CHILE Y DE SANTIAGO.

La elección, al finalizar el trimestre, de los directorios de los bancos de Chile y de Santiago - las dos mayores instituciones financieras privadas del país -, terminando en la práctica las intervenciones de ambas instituciones, demostró que el fascismo impuso grupos de poder a su servicio, constituidos teniendo como cabezas a los interventores Adolfo Rojas y Julio Barriga. El régimen se jugó entero tras este objetivo, haciendo uso y abuso de todo el aparato de poder, empezando por el que proporcionan los dos bancos. Los administradores provisionales utilizaron sus cargos para materializar estos propósitos. "El valerse de una enorme infraestructura que les ha sido entregada en administración provisional - comentó "Estrategia", (16-3-87) -, involucra transgredir normas que deberían ser respetadas por funcionarios públicos. Su poder actual les confiere una gran capacidad de presión sobre clientes y los trabajadores de las instituciones bajo su mando".

Cuadro N.6

MAYORES BANCOS NACIONALES:
COLOCACIONES Y CAPITAL Y RESERVAS.

(Fuente: Balances al 31-12-86. En millones de pesos)

Banco	Capital y Reserva		Colocaciones	
	1985	1986	1985	1986
Banco del Estado	52.338	80.385	387.196	396.089
Banco de Chile	40.975	72.469	317.143	355.793
Banco de Stgo.	38.250	53.992	188.364	191.799
Créd. e Inv.	7.633	10.586	118.066	137.757

Los interventores llegaron a la dirección de los bancos de Chile y de Santiago como funcionarios públicos. Ahora toman el manejo como personeros privados. La lista encabezada por Adolfo Rojas en el Banco de Chile - que eligió a cinco de ocho directores, y apoyó a un sexto - se conformó, además del fiscal del banco Guillermo Tagle, por ex ministros y altos funcionarios de la tiranía, propuestos por el propio ministro de Hacienda Hernán Buchi. "El equipo económico - comentó "Hoy", (23-3-87) - no quiso perder la oportunidad de controlar el proceso a posteriori". Los ex altos funcionarios públicos nominados fueron Sergio de la Cuadra, ex ministro de Hacienda, Patricio Mardones, ex ministro del Trabajo, y Martín Costabal, ex director de Presupuesto y actual gerente general de Pizarreño. La lista de Adolfo Rojas contribuyó a la elección también de Máximo Silva, ex ministro del Trabajo y actual integrante de las "comisiones legislativas" fascistas. Su postulación fue patrocinada por un conjunto de personas encabezadas por otro ex ministro, Carlos Cáceres, actual vicepresidente de Empresas CCT.

Para "El Mercurio", (29-3-87), esta toma de control desde el propio régimen, constituye un índice de que "el capitalismo popular" ha salido fortalecido. La dispersión del capital accionario se utilizó, en una forma habitual, como mecanismo para facilitar la centralización financiera, en este caso en beneficio de los grupos de poder oficiales. Con la particularidad, que en esta ocasión, los beneficiarios ni siquiera debieron invertir sumas de alguna importancia en la adquisición de las acciones, ya que el proceso se financió básicamente con recursos estatales. Los "capitalistas populares" pagaron apenas el 5% del valor de los títulos emitidos a sus nombres. La compra la realizaron utilizando préstamos de la CORFO, pagaderos a quince años con las utilidades que se espera dejen los mismos bancos, entregando como única garantía las propias acciones. La reprivatización de los bancos de Chile y de Santiago constituye, sin duda, uno de los capítulos más descarados en

el esfuerzo fascista por entregar a intereses privados empresas intervenidas o del Estado.

La reprivatización de los bancos de Chile y de Santiago fue posible utilizando cuantiosos recursos estatales. De otra manera, ambos bancos habrían en 1983 quebrado. El interventor del Banco de Santiago, Julio Barriga, constató que en dicho año el capital de esta institución, 25 millones de dólares, "lo perdió en cinco veces" ("El Mercurio", 29-3-87). Para sostener en funcionamiento los dos bancos, el Banco Central les concedió créditos de emergencia por dos mil millones de dólares. En lo fundamental, estos préstamos aparecen en la actualidad como cancelados. La mecánica utilizada consistió en darle otra forma a este financiamiento. El Banco de Santiago fue autorizado a vender "cartera mala" al Banco Central por la suma de 180.000 millones de pesos, para cuya cancelación tiene un plazo de hasta cuatro décadas, es decir hasta el año 2026. El Banco de Chile, por su parte, cuenta con igual lapso para recomprar cartera vencida y riesgosa por 217.000 millones de pesos. A ello debe añadirse los créditos CORFO - para posibilitar el llamado "capitalismo popular" -, 6.954.912 unidades de fomento al Banco de Santiago (26.000 millones de pesos) y 12.425.000 unidades de fomento al Banco de Chile (43.000 millones de pesos). Por tanto, los dos bancos tienen al momento de constituirse sus directorios privados deudas con el Estado por alrededor de 2.100 millones de dólares, suma muy superior al capital y reservas de ambas instituciones, y ligeramente mayor a los créditos de emergencia concedidos en 1983.

En resumen, los bancos de Chile y de Santiago, funcionan en base a recursos estatales, pero tienen directorios privados. El costo para mantenerlos en actividad ha sido muy elevado. Este costo, según señaló con todo descaro el administrador del Banco de Santiago, Julio Barriga, lo "pagó Moya" ("El Mercurio", 29-3-87). El manejo de estos recursos fiscales y los fondos captados por ambos bancos de terceros lo asumen grupos de poder estrechamente vinculados con el régimen. La formación de directorios privados en las dos instituciones es, de otra parte, un capítulo esencial en el proceso de recomposición del gran capital en el país, luego de las intervenciones de 1983 y la crisis sufrida por los grupos de Javier Vial y de Manuel Cruzat-Fernando Larraín.

EL "SALVATAJE" DEL GRUPO CRUZAT-LARRAÍN.

Gustavo Montero, presidente de la disuelta Comisión Progres, encargada de la "operación salvataje" del grupo económico Cruzat-Larraín, en entrevista concedida al diario "El Mercurio", (16-2-87), hizo un balance de la gestión realizada. La "Comisión Progres" tuvo a su cargo - precisa "El

Mercurio" - "administrar y liquidar unas cuarenta empresas productivas y otras 82 sociedades de inversión". La importancia nacional de este conjunto de sociedades revela el alto grado de monopolización alcanzado por la economía, tendencia que subsiste y a la cual la Comisión Progres dio una gran contribución al facilitar que las principales de ellas volvieran a quedar en manos de grupos económicos internos o de consorcios transnacionales. "Se llegó a decir - subraya "El Mercurio", analizando el potencial a enero de 1983 del grupo Cruzat-Larraín - que en conjunto representaba cerca del 5% del Producto Geográfico Bruto". En la entrevista, Gustavo Montero destaca como un "éxito" de su gestión lograr "atraer en este proceso capitales extranjeros".

Uno de los resultados de la Comisión Progres fue impedir el derrumbe total del grupo Cruzat-Larraín. A cuatro años de la intervención del conjunto de sus empresas, este grupo quedó con el control del 5,5% de sus activos originales, en circunstancias que de no haber mediado la intervención estatal la quiebra de sus distintos conglomerados y sociedades se habría generalizado.

Los dos principales conglomerados pertenecientes al grupo Cruzat-Larraín a enero de 1983 - Copec y CCU -, la dictadura, por intermedio de la Comisión Progres, los devolvió al control de grandes grupos económicos chilenos, asociados en ambos casos a fuertes intereses extranjeros. La Compañía de Inversiones "Los Andes Investment and Development Co.", perteneciente en un 50% cada uno al grupo Angelini y al consorcio neozelandés Carter Holt Harvey, pasó a tener la mayoría accionaria de Copec. Por su parte, CCU fue entregada a la sociedad conformada, también en partes iguales, por el grupo de Andrónico Luksic y el conglomerado germanooccidental Paulaner.

El grupo Cruzat-Larraín, al momento de su crisis, poseía dos de las principales Administradoras de Fondos de Pensiones: Provida y Alameda. Por este canal controlaba una parte significativa del ahorro interno. Ambas administradoras, ahora, están en manos de grupos financieros norteamericanos. Al B.T. Pacific, filial del Bankers Trust, le bastó adquirir con pagarés de la deuda externa el 40% de las acciones de Provida para ejercer su control absoluto, aprovechando la dispersión accionaria del restante 60% vendido a través del mecanismo denominado de "capitalismo popular". Los "capitalistas populares" cuentan apenas con un voto en el directorio. En cuanto a la AFP Alameda, luego de fusionarse con la AFP San Cristóbal - del colapsado grupo Vial - dio origen a la Administradora de Fondos de Pensiones Unión, traspasada al control de la compañía de seguros "La Interamericana", dependiente del consorcio estadounidense American International Group. El Bankers Trust, además, se apoderó del Consorcio Nacional de Seguros, otro de

los principales centros de poder del grupo Cruzat-Larraz. Posteriormente, el Bankers Trust, dando cumplimiento a normas estadounidenses, vendió la compañía de seguros generales del mencionado consorcio a Inversiones Penta Ltda., conformada por ex altos ejecutivos del grupo Cruzat. Se especula, como constató "Estrategia", (29-12-86), que el propio Manuel Cruzat estaría detrás de esta compra. De igual modo, se sostiene que Javier Vial estaría, entre otros conductos, actuando a través del grupo Bin Mahfouz, al cual lo introdujo en el país para impulsar empresas en conjunto. "No faltan los rumores - ha anotado "Análisis", (24-3-87) - que sostienen que después del colapso Vial habría resucitado económicamente y seguiría siendo socio del árabe Bin Mahfouz, oculto tras las misteriosas sociedades en las Islas Caimán".

En el Banco de Santiago - la mayor institución financiera del grupo Cruzat - el régimen conformó un grupo de poder "ad hoc". Queda aún por definirse la propiedad de las empresas de medios de comunicación que perteneciesen al grupo Cruzat-Larraz, Radio Minería y Revista Ercilla, para finalizar en todos sus componentes esenciales este proceso reprivatizador. La dictadura, por el momento, no muestra mayor interés en acelerarlo, ya que ha puesto ambas sociedades a su pleno servicio. La presidencia de los directorios actuales de Minería y Ercilla los ejerce en representación del régimen Alfredo Moreno, elegido director en el Banco de Chile.

El balance de la gestión Comisión Progresista constituye un ejemplo muy nítido de cómo el Estado fascista se ha empleado a fondo para sostener hasta donde le ha sido posible a algunos grupos económicos y para recomponer en el país el dominio empresarial directo del gran capital, externo e interno.

FMI RESOLVIÓ PROGRAMA MACROECONÓMICO 1987.

El directorio del FMI dio su aprobación, en el trimestre, al Programa Macroeconómico a aplicarse por la dictadura durante el presente año. Este programa tiene como objetivo central generar recursos a destinar al pago de los intereses de la deuda externa. Concede, por ello, particular relevancia a la evolución de la balanza comercial y propugna reducciones en el gasto público y bajos niveles de consumo para la gran mayoría de la población, buscando así mantener bajo control el volumen de importaciones, con vistas a obtener el mayor excedente comercial posible.

En 1986, esta política permitió - aprovechando también la baja del precio del petróleo en los mercados internacionales - alcanzar un superávit comercial que, de acuerdo a cifras del Banco Central, llegó a 1.079,4 millones de dólares. Este resultado se

obtuvo gracias a un incremento de las exportaciones de 12,3%, mientras las importaciones crecían, en relación a 1985, en un 5,8%. El programa macroeconómico de 1986 se había propuesto alcanzar un excedente de 835 millones de dólares, monto que fue superado, por lo tanto, en casi 250 millones de dólares. De este modo, con cargo a este superávit comercial se pudo cubrir un 59,9% del saldo negativo experimentado en la cuenta de servicios financieros, originado en lo fundamental por el pago de intereses de la deuda externa. El resto de los intereses se canceló obteniendo financiamiento adicional para este fin.

El superávit comercial del año pasado es el más alto de la década. Desde 1982, la política económica trazada viene arrojando resultados positivos en la balanza comercial, en un gran esfuerzo por exprimir al máximo al país.

Cuadro N.7

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL

(Fuente: Banco Central. En millones de dólares)

Año	Exportaciones FOB	Importaciones FOB	Superávit
1982	3.705,7	3.643,3	62,4
1983	3.826,6	2.817,8	1.008,8
1984	3.650,3	3.357,3	293,0
1985	3.743,1	2.954,7	788,4
1986	4.204,9	3.125,5	1.079,4

El programa macroeconómico de 1987 espera alcanzar un superávit comercial ligeramente inferior al del año precedente. La evolución de la economía en los primeros meses del año indica que esta meta resulta poco probable. Si bien ha seguido el crecimiento de las exportaciones, a lo cual han contribuido los mejores precios obtenidos en las ventas de productos forestales y de harina de pescado - además de la recuperación registrada en marzo en el precio del cobre, que llevó el promedio trimestral cerca del nivel anual proyectado, de 64 centavos de dólar la libra -, esta tendencia se ve contrapesada por el aumento en las importaciones, provocando una disminución en los excedentes comerciales. La proyección anual de la balanza comercial del primer bimestre lleva a un superávit de 714 millones de dólares, con lo cual se cubriría sólo un 41,7% del déficit en la cuenta de servicios financieros. Por eso, el equipo económico comenzó, en el trimestre, a adoptar medidas para mantener bajo control la evolución de las importaciones y garantizar el superávit comercial proyectado.

Los propósitos de la banca transnacional son los

de extraer el máximo de recursos del país. La economía nacional, calcula el economista Ricardo Ffrench Davis, ha entregado "un cheque" hacia afuera, año a año, de aproximadamente 1.200 millones de dólares, cifra deducible del pago de intereses más amortizaciones (no renegociables de la deuda externa), menos dinero fresco ("Estrategia", 26-1-87). El mencionado propósito - implícito en el programa macroeconómico - es un punto central de las diferentes instancias en la renegociación de la deuda externa. Existe el convencimiento generalizado de que el principal de las obligaciones es impagable e incobrable. El propio negociador de la deuda externa chilena, Hernán Somerville, lo reconoció abiertamente, constatando que ningún país está pagando la deuda. "Lo que estamos haciendo - dijo - es reprogramar el perfil del endeudamiento. Estamos administrando la crisis" ("IPS", marzo de 1987). El monto a servir, con recursos generados en el país, del pago de intereses, se convierte, entonces, en el nudo central de las políticas promovidas por el Fondo Monetario, los bancos acreedores y el Banco Mundial.

EL "MILAGRO" EN EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO.

El endeudamiento externo alcanzó al finalizar 1986, de acuerdo a estimaciones oficiales del Banco Central, a 19.352 millones de dólares, aumentando en sólo 0,2% con relación a diciembre de 1985. En el curso de la década, la deuda externa creció fuertemente hasta 1982, pasando de 11.084 millones de dólares en 1980 a 17.153 al cerrar dicho año. En 1983, el ingreso hasta entonces masivo de recursos externos comenzó a limitarse casi exclusivamente a los montos explícitamente establecidos en los procesos de renegociación, dirigidos a mantener el servicio regular en el servicio de los intereses y de las amortizaciones no renegociables. El curso ascendente en el endeudamiento externo se desaceleró. El capital financiero imperialista comenzó a extraer recursos netos de Chile, al ser los nuevos financiamientos concedidos inferiores a los pagos que debía hacerseles. En el trienio 1983-1985, las obligaciones externas aumentaron en 2.165 millones de dólares. En 1986, los acreedores lograron dar un nuevo importante paso en su beneficio. Se puso en marcha plenamente el publicitado proceso destinado a transformar pagarés de la deuda externa en propiedad sobre patrimonios físicos en el país o como mecanismos de blanqueo de capitales extraídos del territorio nacional en los años de fascismo. Estos hechos explican el bajo incremento en el endeudamiento externo del año pasado.

Cuadro N.8

EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA.

(Fuente: Banco Central. En millones de dólares)

1980	11.084	1984	18.877
1981	15.542	1985	19.318
1982	17.153	1986	19.352
1983	17.431		

El programa macroeconómico de 1986 establecía obtener alrededor de 1.200 millones de dólares en créditos externos, destinados a tapar en lo fundamental la brecha existente en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Pese a ello, el endeudamiento externo creció en apenas 34 millones de dólares. El "milagro" se explica por el aberrante sistema establecido con los pagarés de la deuda. A estos títulos de manera generalizada, en el curso de los procesos de renegociación de la deuda se les había otorgado previamente por el régimen al aval de la "República de Chile", dado que mayoritariamente eran de origen privado. "Dicho aval - denunció el abogado Ramón Briones - se dio por exigencia de la banca externa, y fue dado por una deuda privada mayoritariamente contraída por grupos económicos. Luego, estos mismos acreedores, conseguido lo fundamental, exigieron por primera vez a un país que admitiera la capitalización de los pagarés" ("El Mercurio", 26-1-87).

Nada justifica el aval público otorgado a un porcentaje muy elevado del endeudamiento global. Los grupos económicos que lo contrayeron dedicaron estos fondos en una subida proporción a actividades especulativas. Miles de millones de dólares se sacaron del país. Al producirse en enero de 1983 la cesación generalizada de pagos de las empresas pertenecientes a los grupos de Javier Vial y Manuel Cruzat-Fernando Larraín, el cumplimiento de las obligaciones de los dos mayores deudores externos se hizo sumamente dudoso. En esta situación, la tiranía concedió la garantía pública a un monto considerable del endeudamiento privado. Es decir, dio respaldo a obligaciones externas en la práctica casi sin valor. Ahora bien, como a pesar de este aval los pagarés de la deuda externa seguían siendo en realidad incobrables, procedió a permitir su conversión en inversiones extranjeras o como forma de blanqueo de capitales. Como si ello fuese poco, particularmente en el caso de las inversiones, la dictadura estableció un escandaloso mecanismo de subsidio. Pagarés que en los mercados financieros internacionales se transan por debajo del 70% de su valor nominal, la dictadura los recibe a su cotización par. El premio entregado es, por lo tanto, cuantioso. Con el agravante que este mecanismo se emplea preferentemente para apoderarse de activos ya existentes, no para poner en marcha nuevas actividades económicas. Obviamente, si la tiranía no hubiese dado el aval de la "República de Chile", la cotización en los mercados financieros de estos pagarés

sería aún considerablemente menor y, por ende, en verdad el subsidio real es todavía mucho mayor.

Esta política antinacional es altamente valorada por el capital financiero transnacional. Sus voceros resaltan que el ejemplo dado por Pinochet es digno de seguirse por otras naciones deudoras. Richard Huber, alto ejecutivo del poderoso consorcio financiero norteamericano Citibank, por ejemplo, manifestó: "Chile puede tener algunos problemas políticos, pero su mecanismo de capitalización de deuda externa es un modelo para otras naciones" ("Business Week", 19-1-87). No es para menos. Esta política facilita la entrega masiva de patrimonios nacionales a cambio de pagarés de otra manera incobrables. El egreso de recursos que dejará de salir del país, como resultado de este mecanismo, en la forma de intereses, pasará a hacerlo más adelante como remesa de utilidades.

DECISION BRASILEÑA PRECIPITO ACUERDO CON BANCA ACREEDORA.

La decisión del gobierno brasileño de suspender indefinidamente el pago de intereses de la deuda externa mientras que, como manifestó el presidente José Sarney, el país alcanza con los bancos acreedores "fórmulas de pago que no comprometan el desarrollo" ("Granma", 21-2-87), llevó al Comité de Doce Bancos, encargado de la renegociación con la dictadura chilena, y al equipo negociador fascista a apresurar un acuerdo. El compromiso suscrito permite al régimen de Pinochet cubrir la brecha financiera de 1987-1988, cuyo monto el programa suscrito con el Fondo Monetario Internacional estimó en 650 millones de dólares. En lo fundamental el financiamiento se logra postergando para después del bienio el pago de intereses por 447 millones de dólares, con la fórmula de reemplazar el servicio semestral de intereses por su pago anual. Los restantes 200 millones se obtienen en parte gracias a una reducción en las tasas de interés a pagar, las que en adelante se recargarán en un punto por encima de la tasa interbancaria Libor. Hasta ahora se cancelaba sobre la tasa Libor un recargo adicional de 1,37%. La dictadura ha pretendido presentar esta baja como una concesión especial. No es así. En la renegociación de la deuda externa mexicana se estableció una tasa de interés de Libor más 0,812% y en la realizada con Venezuela - que culminó poco después de alcanzarse el acuerdo con la dictadura chilena - se fijó la tasa Libor más 0,875%. El monto a pagar de intereses es, en la actualidad, el punto central de los procesos de renegociación de deudas, dado la imposibilidad de servir el principal.

El acuerdo en la renegociación de la tiranía con el Comité de Doce Bancos Acreedores se venía hasta ese momento dilatando por la negativa expresa del Citibank a la fórmula propiciada por la delegación

fascista de transformar en anual el plazo para el pago de intereses. Apenas producida la suspensión de pagos brasileña, medida que al decir de la cadena televisiva norteamericana NBC "provocó un escalofrío en el centro financiero de Wall Street" ("Granma", 25-2-87), el Citibank - fuertemente afectado por la decisión del más grande deudor del llamado "Tercer Mundo" - desistió de su oposición. La demanda de actuar en tal sentido provino de las más altas instancias financieras norteamericanas. "The Economist" entregó antecedentes de la gestión decisiva realizada por el presidente del Federal Reserve de Estados Unidos, Paul Voleker. "Desde el acuerdo de México - resumió "The Economist" -, el presidente del Citibank, John Reed, fue enfático en aclarar que ningún otro deudor podría pretender conseguir semejantes condiciones. De esa forma, el Citibank mantuvo bloqueadas las negociaciones de Chile y de Filipinas. Después del anuncio de la moratoria brasileña, en una reunión con varios presidentes de bancos norteamericanos, Paul Voleker indicó que las grandes entidades debían terminar sus disputas con los pequeños deudores y preocuparse de Brasil. El mismo día el Citibank aceptó el retiming chileno". "Si todas estas negociaciones quedaran trabadas o si se forzase a estas naciones a compromisos ruinosos - subrayó, por su parte, "The Wall Street Journal" (13-2-87) -, la crisis de la deuda podría desembocar en un estallido que a nadie le conviene".

"El Mercurio" (25-2-87) editorializó - luego de llegarse a acuerdo con el Comité de Doce Bancos - que el nuevo convenio reflejaría la "responsabilidad y eficiencia" con que el régimen administraría la economía y las buenas relaciones existentes con los acreedores. Toda la política económica fascista parte, en primer lugar, de los intereses del capital financiero imperialista y, por lo tanto, sus proposiciones se enmarcan dentro de los objetivos de éste. Hernán Buchi, en su última exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública, definió descaradamente cuál es el objetivo central del régimen frente al problema de la deuda externa. "La opción escogida - señaló Buchi - ha llevado primero a definir, junto al Banco Mundial y al FMI, la cantidad máxima de recursos transferibles al exterior por concepto del servicio de la deuda externa" ("El Mercurio", 23-12-86). Es decir, el punto esencial es para la dictadura - coincidiendo plenamente con el FMI, el Banco Mundial y los bancos acreedores - garantizar el flujo regular del servicio de la deuda. El programa suscrito con el Fondo estableció claramente el monto a transferir al exterior durante el bienio 1987-1988. Las negociaciones con la banca acreedora tenían, por lo tanto, únicamente como objetivo determinar su participación en el programa ya definido. La larga discusión producida con el Citibank no afectaba nada de fondo. Se trataba ante todo de precisar la forma cómo se cumpliría con el

pago regular de los intereses de la deuda. El Citibank se opuso en un principio a su servicio anual teniendo en cuenta todo el cuadro de las renegociaciones de las deudas latinoamericanas. La resuelta actitud de Brasil de suspender el flujo de intereses llevó al Citibank rápidamente a abandonar su postura.

En cuanto a las tasas de interés, si bien los resultados de la renegociación con la banca acreedora la disminuye en algunas décimas, su monto real sigue siendo extraordinariamente elevado. Al nivel actual de la tasa Libor se pagará aproximadamente poco menos de un 8% anual. Ello significa una exacción muy alta. Su monto es - tal como anotó en un foro efectuado por "Estrategia" (26-1-87) el empresario Efraín Friedman - de más o menos "el triple de las tasas históricas". El acuerdo garantiza la continuación del saqueo por la banca acreedora.

TRIGO: PREOCUPACION POR PRODUCCION RECORD.

El Ministro de Agricultura, Jorge Prado, informó que la cosecha de trigo de la temporada 1986-1987 estableció un record al superar los 17 millones de quintales. El resultado se dio a conocer en medio de un cuadro de gran preocupación de un lado por la reducción experimentada en los rendimientos y, sobre todo, debido al temor al interior del régimen de que nuevos incrementos futuros en las cosechas puedan originar "excedentes" imposibles de colocar. Para desestimar esta alternativa, la dictadura redujo el precio de adquisición del cereal.

La baja en los rendimientos fue, de acuerdo a las cifras oficiales, de 12,6%. En la temporada 1985-1986, según datos del INE, el rendimiento alcanzó a 28,6 quintales por hectárea. Los antecedentes entregados por Jorge Prado dan un rendimiento en la última cosecha de 25 quintales. Los productores trigueros habían adelantado cifras de reducción en los rendimientos superiores.

La disminución en los precios de adquisición fue importante. "En la cosecha del año pasado - señaló el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Trigo, Domingo Bocaz -, se comenzó pagando 3.150 pesos por el quintal, mientras que este año el precio inicial fue de 3.080, lo que de partida implica que los productores tuvimos que absorber toda la variación del Índice de Precios al Consumidor y, además, un porcentaje de valor nominal". El precio de compra bajó, en consecuencia, en alrededor de 20% real. La caída en los ingresos afecta particularmente a los productores pequeños y medianos, que constituyen la mayoría y trabajan habitualmente con rendimientos por debajo de los promedios. Esta reducción en los precios repercutirá, de otra parte, negativamente en la capacidad de pago de los agricultores masivamente en-

deudados con el sistema financiero. "Los productores que solicitaron créditos cerealeros - manifestó el presidente de los trigueros - van a tener grandes dificultades para cancelarlos y más grave aún será la situación de aquellos que este año deberán comenzar a cancelar el capital de los créditos que renegociaron" ("El Mercurio", 23-2-87).

Esta fuerte disminución en los precios de compra del trigo no se ha trasladado a los consumidores de pan. En cualquier variante siempre los intereses de las grandes masas están en abierta oposición con las políticas oficiales. La banda de precios del trigo - forma principal que adoptó la toma de medidas de protección a los productores, cuando los niveles de siembra habían alcanzado niveles muy bajos, causando un fuerte egreso de divisas - extrajo en definitiva los recursos para su financiamiento de los consumidores de pan. La memoria anual del Banco Industrial y de Comercio Exterior (BICE) calcula que en 1986 el precio interno del trigo fue superior en un 50% al internacional. En la coyuntura actual, cuando se disminuye el precio real de la banda fuertemente, con el propósito declarado de desestimar las siembras y evitar así un excedente en el restringido mercado interno, la baja beneficia a grandes intereses económicos intermediarios, particularmente a los consorcios que controlan el negocio de la molinería.

El hecho adquiere una gravedad mayor si se considera que en los años de tiranía el consumo nacional de pan ha sufrido una drástica contracción. Un estudio divulgado por el diario "El Mercurio" (1-3-87) constata que en los últimos veinte años el consumo per cápita anual más elevado se obtuvo en 1973, con 121 kilogramos. El estudio, igualmente, registra elevados guarismos de consumo para 1971 y 1972, los otros años de gobierno de la Unidad Popular. En los años de dictadura, la reducción en los niveles de consumo por habitante ha sido sostenida. Desde 1981, su nivel cae por debajo de la barrera de los cien kilogramos anuales per cápita. Con relación a 1973, la disminución es del orden de un 20%. Voceros del régimen sostienen la teoría que esta notable disminución se debería a modificaciones en el hábito de consumo de la población. Ello puede ser cierto para una reducida capa de los chilenos de altos ingresos. Pero, no guarda ninguna relación con la situación de la gran mayoría. Un estudio efectuado por el Programa de Economía del Trabajo de la Academia de Humanismo Cristiano en dos poblaciones populares de Santiago indicó que sus habitantes destinan a la adquisición de pan "el 30% de su presupuesto en comida" ("Solidaridad", 1-1-87). La capacidad adquisitiva por parte de sectores muy amplios del vital alimento es en términos reales cada vez menor. Si en 1981 el ingreso mínimo mensual alcanzaba para comprar 182 kilogramos de pan, el año pasado permitía adquirir sólo 98, usando en ambos casos datos del mes de junio de cada año.

El superávit triguero que preocupa a la tiranía, únicamente tiene fundamento a partir de la sensible baja anotada en la capacidad de consumo. Es cierto - ha señalado el economista del Grupo de Investigaciones Agrarias, Guillermo Fu - que hoy día con 17 millones de quintales se cubre la demanda nacional, pero, agregó, "si el país quisiera recuperar la disponibilidad de trigo que la población tenía en 1980 o antes, los 17 o 18 millones de quintales que se esperan ... resultarían claramente insuficientes. Porque se requerirían 24.850.000 quintales para recuperar la disponibilidad del período 71-73 y 20.298.000 quintales para recuperar el consumo de 1980" ("Solidaridad", 1-1-87).

C.N.T. DEMANDA REAJUSTE DE 22%

El Comando Nacional de Trabajadores levantó, en el trimestre, la reivindicación de obtener un aumento general en las remuneraciones de un 22%. Se trata de una exigencia destinada a paliar la aguda caída en los sueldos y salarios registrada en los años de fascismo y, en particular, desde los inicios de la crisis cíclica de 1981. De acuerdo a antecedentes proporcionados por el director del Programa de Economía del Trabajo (PET), Humberto Vega, si se toma "como base un índice de cien puntos en 1981, el sueldo mínimo legal (deflactado por el IPC oficial) ha disminuido en 1986 a un nivel de 63, mientras que deflactado por el IPC-PET, ha bajado a un nivel de 55. Por otra parte - añade Vega -, aunque las remuneraciones entre el 85 y el 86 crecieron en un 2%, entre 1981 (base cien puntos) y 1986, éstas han caído a un nivel de 87. Siguiendo el análisis de las remuneraciones sobre la base de un nivel de cien puntos en 1981 - concluye el director del PET -, se tiene que los sueldos de las grandes empresas han bajado a un nivel de 85,1 puntos y en las medianas empresas a un nivel de 57,7 puntos en 1986" ("Apsi Economía", diciembre de 1986). La gran mayoría de los trabajadores percibe ingresos inferiores a los considerados como necesarios para adquirir una canasta alimenticia familiar. Particularmente dramática es la situación de los trabajadores que ganan el sueldo mínimo legal, los cesantes incorporados a los programas de la dictadura para desocupados y la gran mayoría de los pensionados. Peor todavía es la realidad que viven los cesantes y la gran masa de ocupados disfrazados.

La demanda de un reajuste en las remuneraciones choca frontalmente con la política diseñada para Chile por el FMI y el Banco Mundial. Esta orientación se expresa en la fórmula, utilizada en sus intervenciones por el ministro de Hacienda fascista, Hernán Buchi, de "crecimiento con austeridad", dirigida a lograr un aumento en la inversión y en el ahorro

con vistas a posibilitar de esta manera incrementar la capacidad de pago del país de los intereses de la deuda, perspectiva a alcanzar - según sus autores - sobre la base de mantener en niveles muy bajos el consumo del grueso de la población. "Vamos a tener que estar muy atentos - expresó Buchi en la exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública - para que se mantenga el privilegio por el aumento de nuestras exportaciones y el ahorro no se desvíe hacia el consumo" ("El Mercurio", 20-12-86). Las tasas de inversión continúan, sin embargo, siendo marcadamente insuficientes. La inversión, medida como formación bruta de capital fijo y expresada como porcentaje del PGB, fue en 1986 de 15,6%, estimándose por los propios analistas oficiales que se requiere más de un 20% para mantener, según sus palabras, un crecimiento sostenido. Esta política conlleva, además, un acen- tuamiento en la redistribución regresiva del ingreso.

Durante el quinquenio 1982-1986, de acuerdo a antecedentes del PET, el consumo por habitante descendió en un 18%. La proyección económica oficial para el lapso 1985-1989 considera una tasa media de

expansión anual en el consumo de 1,6%, porcentaje muy similar al del crecimiento de la población, proyectando, por lo tanto, hasta fines de la presente década la baja registrada en el consumo per cápita. El economista de Cieplan, José Pablo Arellano, estima que en el presente año el consumo de cada chileno "será comparable apenas con lo que había en los inicios de los sesenta" ("Apsi Economía", id.). La disponibilidad de bienes por habitante ha descendido paralelamente. Según cifras del PET, "la disponibilidad de bienes de nuestra economía, es decir, el Producto Geográfico Bruto más todo lo que se importa y menos todo lo que se exporta, teniendo como base cien el año 1970, ha descendido en 1986 a un índice de 82,4 puntos. En términos monetarios, esto significa que si un chileno (en pesos de 1977) tenía un total de bienes disponibles por 31.113 pesos en 1977, en 1970, en 1986 ese monto cayó a 28.100 pesos". Desde luego, si la comparación se realiza con los años del Gobierno Popular la disminución es todavía mayor.

La política aplicada por la tiranía implica proseguir, como está dicho, con una redistribución regresiva en el ingreso, característica inserta en la política económica fascista. En los años de caída del ciclo económico, de inicios de la presente década, el régimen redujo drásticamente las remuneraciones reales. En la fase de recuperación del ciclo se concede a los trabajadores a quienes se otorga reajustes, aumentos nominales por debajo del alza del costo de la vida. "En el enfoque oficial - ha señalado el economista Jorge Leiva - fomentar la inversión significa aumentar las utilidades, lo que expandirá el

consumo de los sectores ligados a estas empresas. Y si se quiere mantener el mismo nivel de consumo global, deberá reducirse el de los asalariados" ("Análisis", 13-1-87). Un aumento en las remuneraciones, como exige el CNT, echaría por la borda estos propósitos. Esta demanda, por lo tanto, de concretarse afectaría uno de los puntos básicos y más reaccionarios del programa macroeconómico. El petitorio del CNT recoge demandas de diferentes sectores de la población, incluyendo la de amplias actividades nacionales interesadas en el aumento de la capacidad adquisitiva de las grandes mayorías.

DESPIDO MASIVO DE MILES DE PROFESORES.

El despido masivo de miles de profesores en los primeros meses de 1987 es una consecuencia directa de la política de "municipalización" o, más bien, de privatización, llevada adelante por la tiranía en el terreno educacional, así como de la disminución en el gasto público resuelto por el Fondo Monetario Internacional. Estos despidos fueron decididos friamente por la dictadura, junto con ponerse fin a mediados del año pasado al traspaso de los establecimientos

fiscales educacionales a corporaciones municipales. El 28 de mayo de 1986, el Ministro del Interior, Ricardo García, en un oficio reservado enviado a todos los intendentes, con vista a reducir los déficits presupuestarios que acompañaron el proceso de "municipalización", instruyó a reducir "los excedentes de profesores durante los años 1986 y 1987" ("Apsi", 28-8-86). Al municipalizarse los 828 establecimientos traspasados en esa fecha, se redujo el aporte fiscal a ellos en un 26%.

El problema de las reducciones presupuestarias no atenta sólo a la educación media y básica. La reducción en el gasto público es un punto central en la política económica diseñada con el FMI. El régimen tiene la instrucción de disminuir como sea el déficit fiscal de un 2,2% del PGB establecido para 1986 a un 1,7%. La Asociación de Académicos de la Universidad de Chile ha denunciado públicamente que la dictadura impuso a los institutos de educación superior, a partir de 1981, un sistema de autofinanciamiento que "ha ido paulatinamente destruyendo el patrimonio cultural acumulado" ("Análisis", 24-3-87). El documento de la Asociación de Académicos constata que el presupuesto del presente año experimentó una reducción en el monto del aporte fiscal de 1.843 millones de pesos, si se compara con el de 1986. "La verdad - subrayó el presidente de la Asociación de Académicos, Patricio Basso - es que ya estamos en los niveles de extrema pobreza". Esta reducción presupuestaria también ha provocado en las universidades la exoneración de profesores.

La municipalización en la educación fiscal ha sido definida por "El Mercurio" (10-1-87), como "pieza vital en la política gubernativa, que deberá completarse en algún momento - añade - con una efectiva autonomía operacional y financiera en la educación superior". Los planes fascistas de privatización son tan amplios en el sector servicios como en la esfera productiva, y se propone llevarlos adelante de cualquier manera." Los temas de solución más compleja - afirma "El Mercurio", analizando los distintos componentes de la política privatizadora - son los relacionados con ciertos servicios como la salud, la educación, las comunicaciones en general y, en particular, la televisión. La decisión oficial sobre estas materias es clara... Es evidente que quedan muchos puntos por definir, porque se trata de temas complicados... Se trata, sin embargo, de servicios claves que serán noticia permanente en los años venideros". Desde ya se anuncia acelerar la "municipalización" de los consultorios de salud, según ha afirmado el ministro de Salud, Juan Giaconí ("El Mercurio", 10-1-87).

La consumación de la política fascista implica una constante restricción de los servicios privatizados sólo a quienes estén en condiciones de pagarlos. Así se llega a absurdos como hablar de un "excedente" en profesores, cuando - como señaló el secretario general de la AGECH, Alejandro Traverso - "si tomamos el censo nacional de 1982, se prueba que en Chile hay 500.000 niños entre 9 y 19 años de edad, que están marginados del sistema educacional". Este solo antecedente, concluye Traverso, "revela que no sobran profesores" ("El Mercurio", 10-1-87). El excedente lo establece el régimen, como hace habitualmente, dejando a grandes masas al margen. La "solución" para la dictadura - al igual como la hace en el caso del trigo - es "desincentivando" las vacantes de pedagogías en las universidades. El Ministerio de Educación formuló esta tarea al Consejo de Rectores universitarios para impedir, según sus estimaciones, un excedente de aproximadamente 40.000 profesores hacia 1990 ("El Mercurio", 26-3-87).

Es la aplicación de una cerrada política de clase, puesta en función de intereses minoritarios. Desde el momento del golpe de Estado, "la matrícula de la enseñanza básica ha descendido en más de 90.000 alumnos (a pesar del incremento poblacional), se han cerrado decenas de escuelas de educación de adultos y, entre 1972 y 1984, el porcentaje de estudiantes entre la población de cero a 24 años disminuyó de 52,7% a un 49,9%, la cifra más baja de los últimos 50 años" ("Apsi", 25-8-86).

"UNA SOLUCION JUSTA A LA DEUDA HABITACIONAL"

La deuda habitacional continúa creciendo. De acuerdo a antecedentes proporcionados por la Federación de Deudores Habitacionales de Chile (FEDHACH), en la actualidad, un 40% de los deudores, es decir aproximadamente cien mil familias, se encuentran en mora con el sistema financiero, mientras que el resto, otras 140.000 familias, "les resulta cada vez más difícil cubrir el dividendo" ("Hoy", 30-3-87). El incremento de las fatídicas unidades de fomento (UF), en que se establece el monto de la generalidad de las deudas habitacionales, fue en los primeros meses del año más acentuado que el presupuestado en las proyecciones oficiales - al igual como aconteció en los demás mecanismos reajustables basados en la variación del IPC -, dado que el ritmo de la inflación, como constató "Economía y Negocios" (18-3-87), se ha "estabilizado alrededor del 17% anual durante los últimos tres trimestres". La inflación, añade la publicación, "es, sin duda, uno de los temas conflictivos del año actual".

El endeudamiento interno se encuentra fuertemente concentrado. Según datos a junio de 1986, casi la mitad de las obligaciones pertenecían a 703 deudores, en cambio otros 965.000 tenían tan solo el 2% de la deuda general. Las deudas internas constituyen, por lo tanto, un gran problema de masas. Un

capítulo muy importante de estas obligaciones proviene de las deudas habitacionales, cuyo número asciende aproximadamente a 600.000. Del total de las deudas habitacionales, entre 240.000 y 300.000 están formadas por obligaciones con el sistema financiero. Las restantes son deudas con instancias gubernamentales, donde los índices de no pago son igualmente muy grandes, dada las altas tasas de desocupación y subocupación y el bajísimo nivel de las remuneraciones en un alto porcentaje de los asalariados.

La FEDHACH - que en 1986 organizó una moratoria en el pago durante dos meses -, al finalizar marzo, hizo público un documento titulado "Una solución justa a la deuda habitacional", que toma el caso de las familias endeudadas con el sistema financiero. La propuesta de la FEDHACH se basa en cuatro asuntos fundamentales: término de todos los sistemas de reajustabilidad de las deudas existentes; recalcular los saldos adeudados, aplicando a los montos originales un interés y comisión no superior al 5%; establecer que el saldo deudor no puede ser superior a la tasación de aquella parte de la vivienda por la que se solicitó el crédito; y, finalmente, años de gracia en el pago por parte de los cesantes, subempleados y jubilados con pensiones de subsistencia "hasta que adquieran capacidad de pago".

El sistema de reajustabilidad impuesto por el fascismo ha tenido consecuencias aberrantes. El dato de la FEDHACH constata que "entre 1976 y 1986 cada 1.000 UF prestadas a corto plazo, los bancos braron 9.000 UF. Los nuevos mecanismos de reajustabilidad establecidos por la dictadura en los últimos años como alternativos a las UF - la Unidad Reajutable y el Índice de Valor Promedio - no modificaron nada el cuadro. Al optarse por la nueva modalidad reajutable, se daba por establecido el recuento de las estratosféricas deudas acumuladas a fecha. El cobro de intereses muy alto - que se siguió la fórmula de establecer las deudas en UF - constituyó un mecanismo de traspaso de recursos desde los deudores hacia el capital financiero. "Entre 1976 y 1981 por cada 1.000 UF de crédito a corto plazo dice la FEDHACH -, los bancos cobraron 4.178 UF de interés. En esta última cifra - agrega el estudio - los depositantes recibieron 764 UF, el encaje del Banco Central se quedó con 745 UF; en interés pagado por los bancos a los acreedores externos se fijó 160 UF; y el sistema financiero se quedó con 1.000 UF". El incremento desenfrenado de las deudas, impuesto por su reajustabilidad en UF como por los intereses usurarios cobrados, hace que la demanda de la FEI de recalcular los montos de las deudas sea enteramente justa. De no hacerse así, el problema subsistirá adquiriendo connotaciones de creciente gravedad. renegociaciones de deudas implantadas por el régimen únicamente, en el mejor de los casos, han permitido postergar el problema, alargando plazos y rebajando

los intereses, en consonancia con la evolución experimentada por éstos en el mercado interno.



ideológico

La alianza antifascista y las reivindicaciones del pueblo mapuche

por Pablo Román

(Ponencia presentada al encuentro de investigadores sociales comunistas chilenos residentes en Europa efectuado en Potsdam - República Democrática Alemana - del 12 al 4 de septiembre de 1986).

A partir del golpe militar Chile ha sido sometido a un regresivo proceso de sus estructuras básicas. Bajo el imperativo de la violencia reaccionaria como instrumento preponderante de gestión, el Estado refuerza su función de opresión expresándose como la dictadura más descarada y abierta de la oligarquía nativa y el capital imperialista. Estas son las fuerzas sociales que generaron a Pinochet, lo han nutrido y lo siguen nutriendo. Ellas constituyen la base potencial económica que hizo y hace posible el uso de la violencia reaccionaria sobre el pueblo y la permanencia de la dictadura.

No es, decía Engels, "ni mucho menos es la violencia política inmediata y no es tampoco su poder económico indirecto donde ha de buscarse lo primario. Por el contrario ¿dónde reside precisamente lo primario de la propia violencia? Reside en el poder económico, en la posibilidad de disponer de los recursos de la gran industria". (1)

Pinochet, criatura de los monopolios, cortó el avance del país deteniendo su progreso. Este gobierno no ofrece ninguna solución a los angustiosos problemas que se acumulan día a día. Toca a todos los sectores y grupos nacionales de Chile: a la clase obrera, a los empleados, a los campesinos, empresarios y al pueblo mapuche y otras etnias que sufren una doble explotación, por ser en su mayoría trabajadores y constituir una minoría nacional nativa.

La política de corte fascista aplicada por la dictadura es manifestación tanto de factores internos como externos, que expresándose en cada caso particular con caracteres y niveles propios tienen una

matriz única, común, el proceso de monopolización y transnacionalización de la economía capitalista a escala mundial en su etapa superior, durante el período de la crisis general del capitalismo. Esta dinámica es la que desplaza de la gestión social el democratismo habitual por el dominio de los monopolios lo que conlleva al predominio de relaciones de supeditación y de violencia, tanto a escala del capitalismo mundial como en los marcos de una nación, cuando la violencia reaccionaria se expresa no sólo en los marcos de la supeditación de una clase por otra, sino que también en la supeditación, discriminación y explotación de las minorías nacionales.

LA BASE OBJETIVA DE LA UNIDAD DEL PUEBLO.

La tendencia motriz de la realidad del país y su particularidad económica fundamental lo ha constituido el forzado proceso de monopolización y privatización económica impulsado por la dictadura. Este proceso ha determinado y predominado en no poca medida aspectos básicos de la vida social, de la economía, del manejo estatal, del movimiento cultural, etc. Sin embargo, en esta incidencia del proceso de monopolización sobre la sociedad en su conjunto se han dejado sentir los demás aspectos y procesos de la realidad. El nivel de desarrollo, los lazos de la dependencia, el subdesarrollo, las deformaciones estructurales del cuerpo económico del país, la presencia del fascismo, etc., son todos elementos que, sin cambiar los rasgos fundamentales del monopolio en general, acrecientan las influencias negativas y distorsionadoras en la vida del país; esto ha sido en particular relevante en la economía, donde los conflictos han sido extremos. Hay una conjugación dialéctica de elementos de la base y la superestructura que condicionan que las tendencias a la reacción en toda la línea tome un alto nivel de preponderancia sobre los demás aspectos que genera el proceso de monopolización y además, esto se manifiesta como un factor imprescindible al funcionamiento, a la formación, reconformación, mantenimiento e incremento del poder de los grupos económicos.

En los efectos y distorsiones del proceso de monopolización y privatización, constituido en el objetivo principal de Pinochet, se ubica la viabilidad material del encuentro entre los sectores afectados por la aplicación del modelo de la Junta, de aquellos que combaten por la democracia y libertad para terminar con la explotación y el saqueo parasitario de los recursos nacionales por parte de los monopolios.

Se requiere, indudablemente, de una gran dosis

de voluntad patriótica, de alianza y acuerdo de las más amplias capas de la población, de todos sus grupos étnicos que, por sobre las diferencias de intereses y proyectos, deben colocar, sin sectarismo de ningún tipo, el desplazamiento de Pinochet.

Hoy por hoy, señala el Partido Comunista, "ningún arco sectorio, ningún partido o bloques de partidos puede por sí solo desarrollar la movilización social que se requiere con miras a poner fin al régimen imperante y conducir al país a la democracia. Del mismo modo, ningún partido o grupo restringido de partidos podrá encarar con éxito la difícil situación que vive el país" (2).

No hay duda que Pinochet sólo será desplazado con la lucha y la más amplia unidad de todos los sectores y clases sociales. La democracia hay que conquistarla, es una tarea de la mayoría nacional. Para ello, se requiere de la fuerza suficiente. Los grandes problemas históricos se resuelven, a fin de cuentas, con la fuerza, "la única fuerza real la constituye la energía revolucionaria de las masas; con sólo la vanguardia, ni por muy fuerte, decidida que esté, no se podrá alcanzar el triunfo. Hay que contar para ello con la decisión, espontaneidad y apoyo de las grandes masas de la población".

De ahí la gran importancia de la política de alianza de clases y del compromiso político para coronar grandes tareas. Las alianzas sociales en las transformaciones de la sociedad, como una forma de la actividad de las personas, constituye una ley importante del desarrollo social y de la revolución.

Al examinar las bases que condicionan las alianzas políticas hay que detenerse en una regularidad de importancia, que no siempre se tiene presente, pero que constituye un factor decisivo en este asunto. El marxismo-leninismo nos enseña que en esto de las alianzas no es la maniobra política, la sagacidad de los dirigentes, el arte político la base de una unidad relativamente estable de las diferentes fuerzas sociales. La base lo constituye la coincidencia por un período relativamente prolongado de intereses socio-económicos de distintas clases y fuerzas sociales.

Si los dos lados no ganan nada con la alianza, decía Lenin, entonces el compromiso es imposible y, por lo tanto, no se hace necesario hablar sobre él (3).

Es impostergable alcanzar la unidad, hay que buscar los consensos adecuados a los problemas que afectan al país en su conjunto y a cada capa social en particular. Los factores objetivos que constituyen la base para alcanzar la meta de la unidad, cada día se

hacen más claros y relevantes.

No es fácil transitar por los caminos de la unidad. Criterios sectarios, intereses estrechos, prejuicios anticomunistas, desconfianzas, ambiciones, etc. han impedido hasta ahora alcanzar la unidad necesaria que conjugue los diversos proyectos políticos de oposición colocando la lucha por la democracia como el gran factor de consenso.

Los avances en la lucha y la unidad de acción del pueblo no son pocos, pero, son aún insuficientes para descomponer al dictador. Ayuda al consenso mínimo de acción y a las propuestas de las diferentes fuerzas profundizar en el estudio y valorización del peso de los intereses reales de cada grupo, clase y sector social del país. En este asunto, además de conjugarse factores de índole subjetivos y objetivos, intervienen asuntos de carácter particular, específicos, como manifestación de lo general. En esto, le cabe importancia al análisis de la estructura de clases del país, la correlación de fuerzas que se da, los intereses económicos y políticos e incluso las costumbres y tradiciones y diferenciaciones internas de las fuerzas políticas actoras de la oposición a Pinochet.

CLASE OBRERA Y CAPAS MEDIAS.

No hay duda que en cualquier arco de alianza a la clase obrera, a los trabajadores asalariados, le corresponderá un papel fundamental. Los asalariados, obreros más empleados, constituyen el 70% de la población activa. La fuerza de sus organizaciones, sus tradiciones de lucha, la influencia de las ideas socialistas en ella con una creciente presencia del Partido Comunista y otros partidos opositores la convierten en una fuerza social de envergadura.

El modelo neoliberal, de las "ventajas comparativas", impuesto al país ha variado y diferenciado la estructura de clases. Este proceso ha tenido lugar tanto con los asalariados como con las capas medias y el campesinado. En cuanto a las capas medias, a pesar de las variaciones sufridas por la estructura social mantienen su peso e importancia. Ocurre con ellas lo que suele llamarse la estabilidad inestable, o sea, caen, se debilitan algunos segmentos de estos sectores y a la vez, se reproducen y refuerzan otros, como ser, las capas medias de los servicios y distribución.

Cualquier proyecto alternativo a Pinochet debe contar con la participación de sectores de las capas medias. Por la capacidad de movilidad, relaciones, por su influencia política y nivel de organización en lo gremial y político se hace extremadamente complejo

avanzar en el combate contra Pinochet. La lucha contra el dictador es una tarea que debe encarar todo el pueblo. Quien estime que no es necesario trabajar la alianza con las más amplias capas de la población, es porque confunde el momento histórico que se vive, sus protagonistas, la correlación de fuerzas existente.

LOS CAMPESINOS.

La importancia del campesinado en la política de alianza es decisiva. El constituye el aliado natural del proletariado.

Entre los asalariados de la ciudad y el trabajador del campo y los explotados de este sector no existen divergencias de fondo, los intereses de estos pueden ser satisfechos en una democracia avanzada. El sentido de clase de esta alianza se refuerza privilegiando la más estrecha relación entre los obreros de la ciudad y del campo.

En las décadas del 60 y 70 se ha producido un grado importante de proletarianización como resultado del avance de las relaciones capitalistas, en particular de carácter monopolístico en sectores específicos, como ser: la producción frutera, la forestal, la distribución, etc. Hay estudios que estiman que un quinto de los trabajadores ocupados y cerca del 40% de los trabajadores productivos laboran en faenas agrícolas.

Entre los dos polos de clase del campo donde pasa la línea principal de las contradicciones de clase se ubican otros grupos agrarios de importancia, como ser: campesinos acomodados, campesinos medios, minifundistas, parceleros, cooperativistas, etc. Ellos tienen un rol decisivo en la vida del campo, en la generación del producto agrario y su influencia se hace sentir con fuerza en las relaciones de clase de la ciudad.

La importancia del campesinado, aunque no en los mismos términos y niveles a los años anteriores, continúa vigente. Como antes está vigente el problema de la tierra para amplios sectores de la población campesina. Para los 340.000 campesinos, incluidos los medios, pobres, arrendatarios, minifundistas, medieros, la tierra es una exigencia prioritaria en sus reivindicaciones.

Si a ello adicionamos a la población mapuche y otras etnias y a una parte importante de los asalariados agrícolas ligados a la tierra, es atendible que elevemos los esfuerzos respecto al problema de la alianza obrera campesina en su nueva dimensión.

De las variaciones y modificaciones de la estructura social, del proceso de diferenciación inter-

na de los diversos segmentos de la sociedad chilena, resultan dos importantes momentos:

1.- Se produce un proceso de polarización de clase. La distancia entre el pequeño número de magnates y profítadores del régimen con la mayor parte de la población en especial con los trabajadores se acrecienta. Esto es un factor objetivo que condiciona un mayor conflicto social, consolida la protesta nacional y la indignación de las fuerzas democráticas contra los monopolios y el gobierno.

2.- Se ha intensificado la diferenciación, es decir, se hace más compleja la estructura de clase y social. Aumentan su compartimentación y componentes. Esto nos llama a poner atención al elaborar la política de alianza, cuidando de compatibilizar lo específico de cada grupo social, lo que tiene connotación general y particular para cada uno de ellos.

EL PUEBLO MAPUCHE.

La derrota de Pinochet será posible sólo si se alcanza la más amplia y combativa unidad de todos los sectores sociales y grupos nacionales. Las reivindicaciones planteadas por Ad-Mapu, hechas suyas por el movimiento popular, constituyen un factor de unidad y dinamismo en la lucha contra la dictadura. Para el triunfo del pueblo se hace insoslayable la unión de todos los opositores sin diferencias étnicas. La solución del problema nacional pasa por la derrota del dictador y la solución de los grandes problemas que aquejan al país.

Resolver, por ejemplo:

1.- Las tareas del desarrollo socio-económico eliminando todo rasgo de desigualdad y elementos de supeditación de un grupo nacional por otro.

2.- La necesidad de desarrollar libremente al país y al pueblo coronando la plena igualdad entre los diversos grupos nacionales y étnicas que habitan Chile. No hay duda que cualquier rasgo de supeditación y desigualdad entre los grupos étnicos del país frena el desarrollo de la producción material y el intercambio e impide la interinfluencia y mutuo enriquecimiento de sus culturas.

La importancia del problema nacional es indiscutible. El toma diferentes connotaciones en relación a la clase y al momento histórico que se levanta. Sin lugar a duda, la lucha de Ad-Mapu por reivindicar el derecho del pueblo mapuche por la autodeterminación y respeto como pueblo, es un factor que dinamiza y refuerza el arco de alianza contra la dictadura.

El pueblo mapuche, que constituye alrededor de un millón de personas, plantea el problema de su identidad nacional con su exigencia básica de la recuperación de las tierras usurpadas por los latifundistas y grandes propietarios del campo.

LA REIVINDICACION DE LA TIERRA.

Para el mapuche la tierra es un bien de uso social, base productiva que se estructura en la cooperación y reciprocidad. Además, la tierra, como

otros bienes representa para el mapuche, "otra dimensión, que podría llamarse de carácter sagrado."

Ella proporciona alimentos...es parte integral de la existencia humana que va indisolublemente ligada al quehacer social.

La exigencia de recuperar sus tierras es una reivindicación muy profunda del mapuche, es una forma que los moviliza, los une. La tierra constituye, más que un mero medio de alimentación, el factor principal de su larga lucha por subsistir y lo fundamental para consolidar su identidad como grupo étnico en desarrollo. Ella le ha permitido mantenerse como grupo nacional étnico, sostener una larga lucha contra sus explotadores. En la tierra el pueblo mapuche identifica su identidad nacional.

Nuestro Partido, haciéndose eco de la reivindicación del pueblo mapuche, ha planteado en su plataforma de lucha - punto 12 - una actitud muy clara al respecto y a la participación de él en los quehaceres del Estado: "deben ser derogados todos los decretos y disposiciones que atentan contra el pueblo mapuche y atender sus demandas de tierra, estimular el desarrollo de su cultura y darle participación ciudadana, especialmente en la administración de las provincias que habitan" (4).

Es decidir que esta reivindicación sea planteada no en los marcos de la propiedad privada sino en un espíritu de comunidad y relaciones igualitarias frente a ella. Esto diferencia la plataforma de Ad-Mapu de las reivindicaciones por la tierra de otros sectores, además que lleva implícito un elemento social que bien tomado permitiría ayudar al campesinado a elevar su conciencia debilitando el peso de la psicología pequeño burguesa de la propiedad privada de los medios de producción.

El asunto mapuche no se agota con la solución del asunto de la tierra. El problema de la tierra está ligado a su autonomía y conquista de su plena

igualdad frente a la población no mapuche y el Estado. En tal perspectiva debe tratarse como un problema específico.

El pueblo mapuche, según señalan los documentos programáticos de Ad-Mapu, "constituye una población estimativa de un millón de personas, manteniendo formas propias de convivencia social, ritos, costumbres e idioma, conformando por tanto una cultura diferente inserta en la sociedad chilena".

Este pueblo que fue abruptamente invadido por los colonizadores españoles, tras las cruentas guerras, las epidemias y esclavitud es diezmado siendo arrinconado en una extensión de 475.400 hectáreas de tierras que corresponde a los 3.078 títulos de merced, para 77.841 personas. Son miles las familias mapuches que no reciben títulos de propiedad.

Mientras los títulos de merced que se entregaban al mapuche no eran superiores a 6 hectáreas, a los colonos extranjeros y nacionales se les entregaba parcelas de 500 y 40 respectivamente.

LA DEFENSA DE LAS COMUNIDADES.

Los despojos de tierras del mapuche, que fueron el factor fundamental de la constitución del latifundio han continuado en el transcurso de casi toda la historia del país. En 1931 por decreto supremo 4.111 se logra dividir parte de las comunidades que las propias autoridades de esa época habían creado. Entre 1931 a 1970 más de 950 comunidades, con un total de 241.422 hectáreas se dividen. Esta tendencia de la clase dominante del país a despojar al mapuche de sus tierras sólo pudo ser revertido durante el gobierno popular de Salvador Allende.

Con el golpe fascista nuevamente se plantea el problema de la división de las comunidades. En tal orientación la Junta militar ha dictado el decreto ley 2568 de 1979 que pretende terminar con las comunidades mapuches a través de la entrega de títulos individuales a los comuneros. Con la división de las comunidades los mapuches pierden su identidad territorial, pasan a engrosar primero la masa de minifundios de supervivencia, sin posibilidades económicas, técnicas ni financieras para mantener sus asignaciones, lo que profundiza su miseria y la desigualdad en la distribución de la riqueza entre los grupos étnicos del país.

Desde 1979 a la fecha, con el imperio de este decreto ley, se han dividido 500 comunidades de las 2.568 que existían a esa fecha. Si la situación política del país se mantiene invariable y continúa la

aplicación del modelo neoliberal de las ventajas comparativas, la división de las comunidades continuará.

El mismo decreto ley 2568, en su artículo segundo, inciso 26, estipula que las instituciones fiscales y de créditos pueden hipotecar las tierras indígenas, o sea, se crean las primicias para que el despojo de tierras se acelere. El pueblo mapuche constituye parte importante de los campesinos que no tienen tierra o con lotes insuficientes.

Esto agudiza aún más la economía de subsistencia del pueblo mapuche. La producción agrícola y pecuaria, el 62,5% va al autoconsumo y el resto, 37,5% va al mercado, donde son sometidos en lo general a toda clase de engaños y atropellos por intermediarios inescrupulosos y especuladores. La producción de trigo, por lo general, va también al autoconsumo; sólo venden pequeñas partidas. Aquellos que tienen más tierras, que son una pequeña minoría, realizan en el mercado parte de su producción. Del total de la producción de cultivos como el trigo, arvejas, lentejas, papas, que se genera por el sistema de mediería, en gran medida esta producción se ven obligados por la miseria en que se debaten, a venderla en "yerba".

Una familia mapuche compuesta por 5 personas, por concepto de ventas de productos del agro, de la ganadería, de pecuarios, más el valor del producto que va al consumo interno recibe el equivalente de 95 dólares mensuales (5).

Esto no muestra la real dimensión de los niveles de miseria, existiendo sólo un pequeño sector de mapuches que está por sobre la media de los 95 dólares. La mayoría recibe menos. Mas es casi imposible tomando en cuenta que las labores agrarias del sector que realizan extensivamente en una superficie de una hectárea por cada 2,7 personas, con ausencia casi absoluta de técnica, insecticidas, abonos y asistencia financiera.

La situación de sobrevivencia por la que pasa el pueblo mapuche los obliga a emigrar a las ciudades o contratarse con sueldos miserables en las propias regiones agrarias donde reside. En medio del acentuado proceso de concentración de la producción y del capital, en las condiciones de subdesarrollo general de la economía, se acentúa el diferenciamiento-distanciamiento respecto a los niveles de la propiedad tanto de los medios de producción como de los recursos financieros entre la población mapuche y no mapuche. Este proceso de distanciamiento durante el fascismo adquiere contornos intolerables. El debe ser enfrentado por cualquier gobierno democrático del postfascismo.

LA UNIDAD ETNICA NACIONAL MAPUCHE.

Pero si los niveles de desigualdad y opresión son tremendos en el plano de la economía, esto no es menos respecto a la participación en la vida política del país, en la cultura, en las artes, en las ciencias. Tomemos a modo de ejemplo lo primero. Han sido contados los representantes del pueblo mapuche en el parlamento o con responsabilidad de gobernador, de ministro o consejero a nivel de Estado. En los partidos políticos oligárquicos, burgueses y pequeño-burgueses del país, su presencia ha sido menguada y cuando se asigna algún mapuche a responsabilidades dirigentes, es por el expediente de la excepción o por algún interés político de coyuntura. Si en los períodos anteriores al fascismo la participación del mapuche era menguada, en estos momentos, cuando el pueblo chileno en su conjunto es sometido por la dictadura, la presencia del pueblo mapuche en los quehaceres del Estado es casi nula. Sólo los partidos populares realizan esfuerzos por promover a responsabilidades importantes, tanto política, sindical como administrativa a representantes mapuches. Son miembros de estos partidos los que han promovido la organización del pueblo mapuche y las posiciones de Ad-Mapu, el contenido claramente antifascista de su plataforma son en no poca medida resultado de ello.

Ad-Mapu se ha erigido en la genuina representante del pueblo mapuche que rompiendo con los límites del reivindicacionismo económico y de coyuntura, le ha impreso al movimiento tareas de carácter estratégico en un plano de clase definido que reivindica al pueblo mapuche como una unidad étnica nacional. Ligan los actuales dirigentes la lucha de los mapuches encabezados por Ad-Mapu al destino del movimiento popular en su perspectiva socialista. Al respecto son elocuentes las siguientes declaraciones de Ad-Mapu:

"Ad-Mapu y su pueblo están insertos en el movimiento de toda la clase obrera y de los campesinos chilenos. Se sienten aliados de todos los que luchan contra la dictadura. Su pensamiento y acciones son internacionalistas y adherido al Movimiento Mundial Indígena. Están juntos a todos los pueblos que luchan valerosamente contra el imperialismo, las oligarquías y la guerra nuclear" (6).

El gobierno militar y la burguesía monopolista ligada al imperialismo, han pretendido "solucionar" el problema nacional mediante el expediente de dividir las comunidades mapuches, privatizando sus parcelas. Esto significa la pérdida de la tierra, la aceleración de la asimilación y como corolario la pérdida de la identidad del mapuche como minoría na-

cional.

En declaración pública el Comité Exterior Mapuche, refiriéndose a la ley 2568, señalaba que el objetivo último de esta ley es el genocidio del pueblo mapuche, pretender liquidar su tradicional forma de vida en las comunidades y despojarlo de sus tierras, lo que constituye el fundamento de su existencia y cultura (7).

No es siempre fácil resolver los asuntos que atañen al problema nacional. Para definir las etapas históricas del surgimiento de este problema, su esencia, los caminos y principios para resolverlo, se requiere una posición de clase definida.

En la vida de la nación, en las relaciones internacionales, las particularidades étnicas ocupan un lugar destacado, pero ellas no transforman la nación en una unidad biológica, ellas están relacionadas ante todo con el desarrollo social, constituyendo rasgo característico de nación, el idioma, el territorio. Lo básico es, con todo, el aspecto económico, su carácter histórico.

La nación, la patria, ante todo es una categoría histórica. Sólo tomando el condicionamiento histórico real es posible conocer las causales finales de la conducta de las personas, sus sentimientos y puntos de vista.

Es, por tanto, importante tener en cuenta que al referirnos al sentimiento nacional, él no se puede examinar independiente de la historia y de las relaciones de clase.

La organización Ad-Mapu en su generación y objetivos programáticos trata estos problemas ligados al movimiento por la democracia y a la lucha de los trabajadores por su liberación; en ellos, lo nacional, la defensa de su cultura, de su idioma, de su tierra, responde a un sentimiento muy profundo del pueblo y lo expresa en términos de clase en forma de conciencia de pueblo oprimido y vejado y explotado en dependencia a las condiciones concretas de las relaciones de explotación existente en el país.

El pueblo mapuche, con contadas excepciones, pertenece a las capas de los trabajadores agrarios por cuenta propia, obreros agrícolas y obreros integrados a las ciudades. Se calcula que alrededor de 100.000 mapuches viven en la ciudad, en su mayoría en las poblaciones marginales de las grandes ciudades, cerca del 72%. Se desempeñan como obreros o trabajadores. Son pocos los sectores medianamente acomodados de los mapuches. No tienen mayor peso, como estamos, en la vida social del país. Ellos pueden asimilarse como capas de la pequeña burguesía que tienen su lugar en la lucha antifascista y antimperialista.

LA INCORPORACION DE LA PLATAFORMA MAPUCHE AL CONJUNTO DEL MOVIMIENTO POPULAR.

La estructura social del mapuche, donde el mayor peso le corresponde a los trabajadores y obreros, permite objetivamente que las formas de la consolidación nacional pueden ser ligados a la lucha de las fuerzas populares del país contra de la dictadura y el imperialismo.

Por la estructura social del pueblo mapuche, donde la presencia de los trabajadores es considerable, unir los combates de este pueblo por la consolidación nacional con la lucha del pueblo de Chile, por la libertad e independencia, no sólo es posible, sino una necesidad que impone la realidad del país.

La plataforma de Ad-Mapu, por su contenido y carácter de masa que toma, sus objetivos fortalecen el movimiento revolucionario chileno. Se dificulta la política de alianza si la gran masa del pueblo mapuche no se integra, si su programa de lucha no se inserta con las reivindicaciones y transformaciones de carácter revolucionario que implica postular a una democracia verdadera.

Se requiere de un gran trabajo para integrar a los obreros y trabajadores de las etnias nacionales que existen en el país. Esto no es tan fácil. Hay que hacer mayor conciencia que un pueblo o grupo nacional que oprime y no respeta a otro no puede ser libre, ni tampoco ser respetado. Se requiere, una gran voluntad para desprenderse de muchos prejuicios que por años la burguesía ha inculcado respecto al pueblo mapuche, calificándolo ofensivamente de flojo, ladrón, borracho, desconfiado, bruto, etc.etc.

Con estas actitudes racistas, discriminatorias hay que terminar. Debemos educar a nuestra clase en el respeto al pueblo mapuche, en la fraternidad y hermandad. No hay que olvidar, como señalara Lenin, que la revolución del proletariado requiere una larga educación de los obreros en el espíritu de la más completa igualdad y fraternidad nacional.

Hay que sacudir los prejuicios y luchar contra el rechazo, la discriminación que padece el mapuche especialmente en las capas y clases acomodadas de la población. ¿Cómo se expresa este rechazo? En racismo, agresividad, aislamiento, burla, violaciones de las mujeres. También, a través, de expresiones como: "mis indiecitos", "mis mapuchitos", o en forma más hiriente: "indio huevón", "indio bruto".

Estas manifestaciones racistas, es indudable, corresponden a los valores que imprime la ideología de las clases dominantes.

El racismo hacia el mapuche no tiene sólo motivación nacional, sino que corresponde también a la forma de relación y de desprecio a que son sometidos los trabajadores y en particular los obreros por los grandes capitalistas, o sea, el mapuche sufre una doble discriminación, por ser trabajador, falta de recursos y por ser mapuche.

Hay que realizar un gran esfuerzo por terminar con los roces, las desconfianzas mutuas. Para ello se requiere un mayor trabajo de concientización, de paciencia y comprensión de las causales de la desconfianza del mapuche hacia el "huinca". Ello perdura por largo tiempo y en mucho es justificada por los cientos de años de atropellos, asesinatos, robos de sus tierras, falta de posibilidades de desarrollo como pueblo.

La solución del problema nacional en su integridad y en forma definitiva se alcanza sólo con el socialismo, o sea, cuando existe la base económica para ello, cuando se organiza el Estado y la política sobre fundamentos democráticos y el poder político está en manos del proletariado. No obstante, este problema como medida democrática no puede esperar el socialismo.

En las condiciones del capitalismo la solución total del problema nacional es imposible. Sin embargo, se hace necesario alcanzar aunque sea en forma limitada determinadas transformaciones democráticas, que tomen los asuntos del problema nacional.

La mayor parte de las reivindicaciones y objetivos planteados por Ad-Mapu pueden ser alcanzados en una situación de democracia y con mayor razón si esa democracia es avanzada.

De las tareas inmediatas y de carácter estratégico contenidas en su plataforma se destacan: El derecho del pueblo mapuche a su autonomía, una reforma agraria con participación del pueblo mapuche, el respeto por la idiosincrasia y su cultura, la participación del Pueblo Mapuche en las decisiones de interés nacional, la derogación de los decretos leyes N.2560 y 2750, asistencia crediticia, apoyo educacional y médico, rechazo a la propiedad individual, reconocimiento de los títulos de merced, rechazo de la ingerencia foránea en los asuntos del pueblo mapuche, etc. Todas estas reivindicaciones por su significación y proyección de futuro apuntan a nudos esenciales de la convivencia nacional, que resueltas en un plano de clase definido deben manifestarse en una mayor participación en la lucha por parte de las

masas trabajadoras de la ciudad y del campo, en un reforzamiento de la unidad territorial y soberanía del país salvaguardando, por sobre todo, la unidad en la lucha de los obreros y trabajadores por la democracia y el socialismo. Hay que obstaculizar la ingerencia del imperialismo, de los sectores burgueses más reaccionarios y nacionalistas, que desean usar el problema nacional como cuña para debilitar la unidad de la clase obrera, las relaciones de los diferentes grupos nacionales, que habitan en el territorio nacional. El imperialismo no escatima recursos para granjearse la "simpatía" de las minorías nacionales y tenerlas como reservas para debilitar cualquier eventualidad de cambios avanzados.

Uno de los puntos gruesos de la plataforma de Ad-Mapu se refiere a la defensa y respeto de la idiosincrasia y cultura del pueblo mapuche. La cultura y particularmente el idioma mapuche deben recibir un impulso que desarrolle y multiplique todo lo valioso y progresista de dicha cultura. Hay que darle espacio y condicionar las bases materiales y organizativas para ello. Debemos plantear el desarrollo del idioma mapuche, su enseñanza, estimular la literatura, la poesía en esta lengua.

Hay que trabajar por disminuir la brecha cultural existente entre las nacionalidades. Esto, junto con constituir una forma más de la opresión al mapuche, la facilita, dificulta el trabajo de su educación política y por ende su plena participación en la vida social del país.

La organización Ad-Mapu con toda justeza ve en este problema uno de los pilares de la identificación y consolidación del pueblo mapuche. La posición e importancia que conceden a esto puede visualizarse por lo siguiente:

"Los mapuches constituimos un pueblo con su cultura, con una historia propia que nos hace diferenciarse del resto de la sociedad chilena".

"Los mapuches tenemos una cultura e historia propias. Se vuelve a repetir una legislación impositiva que anula nuestra especificidad cultural teniendo a corto período eliminarnos como grupo étnico, pasando a formar la masa de simples ciudadanos chilenos, pretendiendo de esta manera acabar con el mal llamado "problema mapuche" (8).

El pensamiento de Ad-Mapu es enfático respecto a la necesidad de desarrollar y enriquecer su cultura e identificar el acervo cultural como el fundamento de la identidad del mapuche. También esto implica el esfuerzo y la exigencia, como en sus diferentes plataformas lo señalan, por la educación de su pueblo y la formación de una intelectualidad comprometida con la lucha del pueblo mapuche y su entidad étnica.

Los planteamientos y exigencias que levanta Ad-Mapu enfilan en lo fundamental a considerar este problema en un sentido, no de separación de las nacionalidades, ni en un concepto abstracto de cultura, sino en la necesidad del pleno derecho e igualdad de las culturas y de los idiomas, en el mutuo enriquecimiento cultural, que es ajeno a la concepción sectoraria de "autonomía cultural nacional" que refuerza el nacionalismo y separa a los pueblos.

En esta perspectiva la lucha del pueblo mapuche y demás grupos étnicos menores constituye una necesidad histórica de clase definida con su contenido político que refuerza la lucha del movimiento popular, amplía su arco de alianza y la lucha contra Pinochet.

NOTAS.

- (1) - F.Engels, Anti-During, Ed.Pueblo pág.211
- (2) - Declaraciones a El Mercurio del Secretario General del Partido Comunista de Chile, Luis Corvalán, Bol.Ext.74
- (3) - Ver Lenin tomo 34, pág.136 D.C.
- (4) - Ver Una democracia renovada, nacional y popular, Orlando Millas, Bol.Ext.53, 1982
- (5) - Ver, Alcamán, Froiburg, 19 de agosto de 1985
- (6) - Ver, La lucha heroica del pueblo mapuche.pág.27
- (7) - Ver, Declaración pública Comité Exterior Mapuche,10 de noviembre de 1984, Frankfurt
- (8) - Ver, Aukiño, Temuco, Bol.N.3 págs. 5 y 8

Teoría cristiana del cambio social

por Sergio Vuckovic

(Ponencia presentada al encuentro de investigadores sociales comunistas chilenos residentes en Europa efectuado en Potsdam - República Democrática Alemana - del 1º al 4 de septiembre de 1986).

En relación a los problemas del cambio social en nuestra época, el pensamiento cristiano no presenta una orientación o una estructura unívocas. La visión cristiana latinoamericana del cambio social distingue tres variantes orgánicas y puesto que ellas presentan grandes diferencias, las estudiaremos separadamente.

La posición preconciiliar, tradicionalista, es sostenida por la minoría de la Iglesia Católica latinoamericana. Políticamente es conservadora y, en ciertos casos, reaccionaria.

La variante mayoritaria es la de centro, con posiciones preponderantes en la Iglesia oficial o Iglesia modernizante, como se le ha llamado en América Latina. Su peligro constante está en identificarse con un determinado partido político: la Democracia Cristiana.

La denominada Iglesia profética representa la tercera tendencia, caracterizada por la denuncia de las injusticias y de los abusos de poder, referidos a sus causas estructurales. Algunos de sus miembros crearon la teología de la liberación y se muestran abiertos al diálogo con los marxistas, partiendo del imperativo de liberar al pueblo latinoamericano de la opresión que sufre. Políticamente es progresista.

Hemos utilizado diversos adjetivos para nominar estas tres corrientes orgánicas del pensamiento católico

latinoamericano de hoy porque sería un error considerarlas sólo en sus connotaciones políticas; derecha, centro, izquierda; por cuanto sus motivaciones esenciales residen en un pensamiento estrictamente teológico; el debate sobre la Cristología (teocentrismo, antropocentrismo, trascendencia); la organización misma de la Iglesia (rol del obispo y de las comunidades cristianas de base) y sobre la acción pastoral en cuanto tal.

a) La posición pre-conciliar sobre el cambio.

Creemos encontrarla plenamente identificada en el Documento de Consulta que, sobre el tema "Evangelización en el presente y en el futuro de la América Latina", presentó monseñor Alfonso López Trujillo en la ceremonia de apertura de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) de Puebla (1979). Fue apoyado por muchos obispos argentinos y se habría transformado en el anti-documento de Medellín (1968).

La idea central de este documento de Consulta proponía el ideal de una Nueva Cristiandad para América Latina, entendiendo al continente como el baluarte temporal del catolicismo para el tercer milenio. El cambio social quedaba excluido de entrada.

La ideología de la Nueva Cristiandad se funda en una visión maniquea de la historia, la cual aparecía como la manifestación permanente de la lucha entre lo sagrado y lo profano. La sociedad se representa como destinada a reflejar, siempre parcialmente, los designios trascendentes de Dios. La Iglesia, representante de lo sagrado frente al Estado laico, es la llamada a guiar moralmente al mundo. Rechazando el así denominado "secularismo moderno", sea en la versión de los países capitalistas desarrollados o en la de los países socialistas, la Iglesia habría tomado en sus propias manos las banderas de una nueva forma de cruzada cristiana, entendida, ahora, como poder eclesiástico sobre la organización de la sociedad, con el propósito de garantizarse, a sí misma, espacios sociales apropiados para la difusión de la trascendencia, de lo religioso y de la fe. Se alcanza estos objetivos haciendo participar, directamente, a la Iglesia en la lucha política e ideológica, creando un proyecto específico de sociedad futura que, en buenas cuentas, termina por ser similar al proyecto esbozado por el capitalismo multinacional.

Esta renacida visión constantiniana del poder temporal de la Iglesia, fundada sobre una teología a-histórica, encontró una áspera resistencia y fue catalogada como un paso atrás en relación al Concilio Vaticano II, a las orientaciones del pontificado de Paulo VI y al espíritu de la Conferencia de Medellín.

Además se le criticó porque no reflejaba, absolutamente, la experiencia de millones de cristianos de las comunidades de base, que en los últimos años habían vivido su fe en el compromiso constante por la liberación de sus pueblos y

también porque no tomaba en consideración el esfuerzo de importantes sectores de intelectuales católicos, comprometidos en el diálogo con las diversas corrientes de la cultura moderna, entre ellas, el marxismo.

Por todas estas razones, el documento de Consulta fue abandonado y aún se modificó el orden del día propuesto. El Documento Final y el mensaje dirigido a los pueblos de la América Latina fueron el producto de la convergencia del sector profético (sobre todo los obispos brasileños) y del grupo modernizante (los obispos chilenos de modo particular).

Para la corriente pre-conciliar, la Conferencia Episcopal de Medellín se ha transformado en el enemigo interno a combatir con todas las armas y es así que el pintoresco profesor del Instituto de Teología de la Universidad Católica de Valparaíso, después del golpe de estado del 11-IX-1973, Miguel Poradowski, evalúa del siguiente modo el documento final de la Conferencia de Medellín del CELAM: "refleja en su enfoque general, en la terminología, en el léxico, etc. la nefasta influencia marxista en este más alto organismo de la Iglesia de la América Latina. Las maniobras subterráneas de los sacerdotes marxistas (sic), por dar al "Documento de Medellín" un carácter netamente marxista (sic) las denunció públicamente en su intervención y durante el Congreso Anti-comunista, celebrado en Río de Janeiro, en el año 1974, monseñor Geraldo de Proenza Sigaud, arzobispo de Diamantina (Brasil)" (1)

Para demostrar que la definición de pintoresco que le hemos asignado le corresponde verdaderamente, creemos conveniente citar la conclusión a la cual él llega en su opúsculo "Sobre la Teología de la Liberación": "CONCLUSION: la actual "Teología de la Liberación" es una forma del ateísmo contemporáneo (sic), al servicio del marxismo (sic)" (2).

La base filosófica de estas dos elucubraciones se encuentra en la distinción que hace Poradowski entre la "teología tradicional", que sería teocéntrica y trascendente y la "teología de la liberación", que sería solo antropocéntrica; olvidándose, aún desde el punto de vista técnicamente filosófico, que, a partir de la obra de Hegel, encontró su fin la distinción entre lo antropocéntrico y lo teocéntrico, en tanto esferas excluyentes. Este hecho real de la historia de la filosofía define esta distinción con el carácter de irrelevante ya que, filosóficamente hablando, no se vuelve atrás.

La base ideológica de la posición conservadora se halla en el axioma de la perennidad del orden social, descrito como emanación del orden divino, concretizado en el derecho positivo de los países capitalistas y como expresión escrita del precedente derecho natural; el cual exige que la autoridad debe estar al servicio del bien común, salvaguardar los derechos de los individuos, multiplicar la propiedad y

mantener el orden social.

El quid del asunto está en cómo entender el mantenimiento del orden social en las sociedades capitalistas, donde es siempre un orden de clase.

La respuesta de los sectores estabilistas hacia esta interrogante es muy sencilla: simplemente no reconocen la división de la sociedad en clases antagónicas. Esta sería "una invención de Carlos Marx" ignorando que, como el lo repitió varias veces, no fue Marx quien descubrió la existencia de las clases sociales y sus luchas; sino que esta fue el gran descubrimiento científico de los historiadores burgueses de la Revolución Francesa, vale decir Guizot, Thierry, Mignet, Thiers y Michelet.

Sin embargo, cuando llega el momento, también rechazan la contribución histórica de la Revolución Francesa, vuelven a mirar como modelo al medioevo, para sostener, como entonces, que el orden social se crea por medio de las jerarquías naturales, que establecen la subordinación del inferior al superior y establecen la estratificación de los grupos sociales en el lugar que el destino les ha señalado. Con tal fin predicán la exaltación de tres virtudes no dialécticas: la disciplina, el deber y la obediencia. Políticamente, esto significa predicar la justificación de los regímenes fascistas dependientes, en tanto mal menor, en presencia del "comunismo", considerado como el mayor peligro; con cuyo predicamento se adecúan, una vez más, a otra invención astuta de las multinacionales y especialmente de la administración Reagan, a través de la señora Kirpatrick, esto es la falsa diferencia entre regímenes autoritarios y totalitarios. Totalitarios fueron los sistemas de Hitler y Mussolini y también fueron autoritarios.

Desde el punto de vista sociológico, la posición pre-conciliar se traduce en un inmenso retardo que se vanifica en la tentativa de no ver la diferencia entre los fenómenos naturales (como producto de la obra exclusiva de la naturaleza en cuanto tal) y aquellos de carácter social (en los cuales lo determinante es la acción humana). Teológicamente, surge la pregunta siguiente: ¿todo lo que ha sucedido en la historia humana calza también con el orden establecido por Dios?

La respuesta a esta inquietud se puede desenvolver en dos marcos ideológicos distintos: o recurriendo a la socarronería escolástica, que sostiene que si los herejes llegan al poder es como un castigo a los pecados del pueblo cristiano o bien retornando a la autonomía de lo temporal; posición, esta última, que refleja más cumplidamente la opinión actual de la Iglesia que, a través de Manuel Ossa B., se preguntaba: "Concretamente en Latinoamérica, tenemos que dejarle a Dios que inter venga para sacarnos de nuestro subdesarrollo y remediar la miseria de las masas; o esta acción, muchas veces revolucionaria, nos compete únicamente a nosotros?" (3). Su respuesta es tajante: "la tarea de construir la historia

pertenece al hombre y sólo a él" (4), porque "comprende que Dios se ha comprometido también por su parte en la historia humana; pero sabe que este compromiso significa para El dejar que esta historia sea plenamente humana" (5).

Por último, monseñor Camara después de haber señalado que en nombre del derecho "natural" a la propiedad privada de los medios de producción se mantienen privilegios absurdos, constata que "son numerosos los principios invocados en defensa del orden, como si mereciese el nombre de orden, el desorden estratificado que se invoca" (6).

Como podemos observar, los sectores más clarividentes de la misma jerarquía eclesiástica latinoamericana abandonaron la viga maestra de sustentación ideológica de la corriente pre-conciliar. Sin embargo, esta sigue existiendo gracias a la ayuda que recibe de una parte de la Curia Romana y de sectores de la Iglesia norteamericana y española y aún es muy fuerte en el clero de Argentina, Colombia y de algunos países centroamericanos. Pero, como condenaba a la Iglesia a no tener un futuro, por su aspiración a un retorno imposible al medioevo, ha sido la misma Iglesia la que ha generado otras posiciones más de acuerdo con los tiempos nuevos, porque cambia la forma del mundo.

Un representante, en este caso destacado, de las posiciones pre-conciliares es el cardenal de Río de Janeiro, Eugenio Sales, ex amigo del gobierno militar brasileño y gran inquisidor del padre Leonardo Boff, uno de los representantes principales de la Teología de la Liberación.

En esta labor persecutoria, Sales es ayudado por el jefe del ex-Santo Oficio, el cardenal Joseph Ratzinger, quien, el 3-IX-1984 condenó la Teología de la Liberación en un documento oficial de la Curia Romana; sin embargo, como la época de las condenas ya pasó en la historia humana, su planteamiento no encontró acogida ni en el mundo de hoy, ni en la Iglesia, ni siquiera en la Curia Romana, que lo abandonó a su suerte.

b) La Iglesia oficial sobre el cambio social.

Actualmente en América Latina, esta es la posición mayoritaria, sea en el plano de la jerarquía que del pueblo cristiano. Es favorable a la condena de la doctrina de la "Seguridad Nacional", del militarismo y de la explotación interna (especialmente anti-latifundista) o internacional (de las empresas multinacionales). También condena al marxismo.

Esta condena del marxismo es un resabio que le viene impuesto por la corriente pre-conciliar y, porque se sabe como centro de la unidad de la Iglesia, es un tributo que paga a esta misma unidad. En ella también se refleja el peso de ciertas formulaciones abstractas y de exaltación del individuo a-histórico que son comunes en el discurso de Juan Pablo II. Aquí también influye el anti-comunismo visceral que caracteriza a la administración Reagan. En fin, en esta persistente condena al marxismo vemos una reedición de la "política del equilibrio": para poder rechazar los aspectos más aberrantes del capitalismo se debe condenar también al

marxismo. Estos hechos son los que explican el que algunos tratadistas definan a esta posición como de la Iglesia modernizante, en el sentido de tentar de corregir, de poner a tono con los tiempos nuevos sea a la sociedad latinoamericana que a la misma Iglesia; pero, sin traspasar los límites impuestos por el marco social capitalista. Desde este punto de vista político se la puede definir como una posición de centro.

Nada hay en la realidad de Latinoamérica que haga necesaria esta condena al marxismo. Es un lastre del cual la Iglesia terminará por deshacerse, en forma autónoma.

En cambio, es la existencia de situaciones reales, que "claman al cielo" y también el desarrollo de los aspectos progresistas de su propia doctrina los que hacen que la Iglesia oficial esté en permanente colisión con los regímenes autocráticos imperantes (Stroessner y Pinochet, por ahora), ya que ella ha hecho suya la defensa de los Derechos Humanos y de la Democracia y, en esta posición, a la cual ha advenido autónomamente, se encuentra participando en conjunto con los marxistas. Este encuentro está teniendo un significado fundamental para la liberación de nuestra Patria Grande y también en otros continentes.

Esta posición de la Iglesia oficial, como base para el desarrollo de una política de cambio social, ha venido madurando desde hace tiempo. Un precursor ilustre fue el obispo Manuel Larraín, que ya el 26-VII-1961 repartió las 180 hectáreas del fundo "Los Silos", de su diócesis de Talca, a los campesinos que en aquellos momentos las trabajaban.

Este gesto profético, decisivo en cuanto a la fecha, permitió a la Iglesia chilena ocupar un lugar de vanguardia en el conjunto de la iglesia latinoamericana de esa fecha, en materia de reformas sociales, en especial en lo tocante a la Reforma Agraria y la impulsó a ser consecuente con esta actitud que, al comienzo, fue una iniciativa individual; hasta 1968, la Iglesia chilena había entregado 14 fundos a la CORA (Corporación de la Reforma Agraria de Chile), cuyas tierras pasaron a mano de los campesinos que las trabajaban.

Esta actitud, propiamente católica, es decir, universal, de Manuel Larraín impregna también su "Llamado de un Obispo a los Cristianos", titulado: "Desarrollo: éxito o fracaso en América Latina", cuyas valientes páginas analizan distintos ámbitos de nuestros problemas. Decía: "nuestro subdesarrollo aparece ante todo en el estado de nuestra agricultura" (7) y tenía plena conciencia de ello cuando había establecido previamente la premisa siguiente: "Ante la conciencia de la humanidad de hoy aparece un deber claro y perentorio, desarrollar la tierra para que todos los hombres, y todos los pueblos puedan recibir sus frutos" (8). Además, se daba cuenta de la gravedad de las ataduras de nuestras economías con las

corporaciones extranjeras: "el problema básico de los países subdesarrollados es el deterioro de los términos del intercambio: se vende barata la materia prima y se compran caros los productos manufacturados" (9), todo lo cual lo lleva a concluir que en Latinoamérica "permanecemos en un colonialismo económico y social" (10). Es de pensar en lo que habría dicho sobre la nueva forma de explotación creada por las multinacionales a través de la Deuda Externa.

Reconociendo el valor de su gesto anticipador y generoso, Paulo VI lo pone como ejemplo en la nota 33 de la Encíclica *Populorum Progressio*, que dice a la letra: "Cfr. por ej. Mons.M.Larraín Errazúriz, Obispo de Talca (Chile), Presidente del CELAM, *Lettre pastorale sur le développement et la paix*, Paris; Pax Cristi, 1965" (11). Es la primera vez que un obispo latinoamericano es citado en una encíclica papal.

Si hemos dedicado un espacio mayor a la obra del obispo Manuel Larraín es porque su labor profética se concretó rápidamente en la Iglesia Católica chilena y tal es así que se elaboró una posición muy nítida en cuanto al cambio social, entendido, incluso, como revolución.

Tal definición de revolución está en el Glosario de la revista jesuita "Mensaje" N.115: "Es un cambio deliberadamente producido, responde a una ideología, a una planificación; es rápido y radical y se refiere a todas las estructuras básicas (políticas, jurídicas, sociales y económicas); cambio, por consiguiente, rápido, profundo y global de las estructuras vigentes. La revolución puede ir acompañada de insurrección, pero no necesariamente lo es" (12). Como vemos, se habla de cambios sin ambages y aún se está orgulloso de esta audacia: "Pero, ahora somos nosotros los que hablamos de revolución" (13). Además, se considera el concepto de revolución en su verdadero sentido cuando se dice que "lo esencial de la revolución es el cambio de las estructuras" (14); la que se plantea sobre una realidad captada en todas sus dimensiones y reconocida científicamente: "Lógicamente esta masa deseosa de revolución se inspira en la única ideología revolucionaria a su alcance: la ideología marxista" (15).

Con esta última constatación se desarrolla un tipo de pensamiento cristiano, de carácter profético, que será la tonalidad dominante de la tercera corriente orgánica de la Iglesia. Sin embargo, antes de pasar a estudiarla concretamente, debemos hacer dos consideraciones preliminares:

a) La teoría cristiana del cambio social, elaborada por la revista jesuita "Mensaje", en 1962, es la más avanzada dentro de la Iglesia oficial de Latinoamérica y

b) En el plano político, en algunos aspectos, se puede establecer una correspondencia con la creación hecha por la Democracia Cristiana chilena del concepto de Revolución en Libertad, dos años después.

En Haití y Filipinas se presencia la entrada en campo de una nueva fuerza social, que usa en clave política la

predicación religiosa; que no se detiene delante de los condicionamientos institucionales y puede contestar el orden vigente, abriendo paso a movimientos destinados a incidir sobre el ordenamiento social, cristalizado durante decenios.

La politicidad nueva de este mensaje religioso y del protagonismo eclesial se fundan en activar la movilización directa de las masas de creyentes, con la conciencia de que hoy día la lucha popular asume formas inéditas: se pasa de la resistencia pasiva al activismo democrático de la no violencia activa, basada en la movilización de millones de personas.

La iniciativa política de la Iglesia en algunos casos aparece vencedora para adecuarse a los tiempos nuevos. Así, en Haití, el Papa Juan Pablo II, al pisar el aeropuerto, el 9-III-1983 afirmó: "Es necesario que aquí cambien las cosas para que el pueblo comience a tener esperanzas" (16) y sacó de su sueno de topo al arzobispo Francois-Wolf Ligonde y puso a la Iglesia haitiana en oposición a la dictadura de Duvalier. Algo parecido ocurrió en las Filipinas, cuando el 17-II-1981, en el aeropuerto de Manila, Juan Pablo II sostuvo: "El desafío al cual cada nación debe hacer frente, y más aún en una nación cristiana, es el desafío de su propia vida interna". Y para que no cupieran dudas, en el mismo discurso agregó: "Aún en situaciones excepcionales no es lícito justificar cualquiera violación a la dignidad fundamental de la persona humana o a los derechos básicos que salvaguardan tal dignidad" (18). Y terminó afirmando que si se aceptase "la lógica de la seguridad nacional en nombre del bien común, aquella podría llevar a la tentación de someter al Estado el ser humano, su dignidad, sus derechos" (19). En el caso de las Filipinas, la posición de la Iglesia se hizo mas clara aún cuando el cardenal Agustín Casaroli, Secretario de Estado del Vaticano, de regreso de Manila, en 1981, declaró a la prensa mundial: "Es difícil formular un juicio, cuando existen situaciones en las cuales una parte quiere defender el orden constituido y la otra, la Iglesia, lo quiere cambiar. Una parte defiende ciertos valores y la otra, la Iglesia, sostiene que estos no son valores, sino situaciones que se deben cambiar" (20).

Este protagonismo eclesial también se demuestra en Guatemala, donde ayudó a la elección del demócratacristiano Vinicio Cerezo a la Presidencia de la República y en El Salvador, donde los esfuerzos por una mediación entre el gobierno del demócratacristiano Duarte y el Frente Farabundo Martí los llevó a cabo el arzobispo Rivera y Damas.

Es notable que en los casos de Haití y Filipinas la característica ha sido que los máximos representantes de la Iglesia, en dichos países, no conversaron ni dialogaron con los tiranos, sino que contribuyeron a su caída. Hace excepción a esta constante la fracasada gestión dialoguista del cardenal Fresno con el tirano Pinochet. Es de esperar que reflexione y se alinee con la actitud del resto del episcopado latinoamericano y con los deseos de la inmensa mayoría de la Iglesia chilena, que lucha contra la dictadura.

El activismo político de la Iglesia oficial, aunque no abiertamente partidístico, la impone como fuerza política importante, lo cual, por exigencia de consecuencia, ha hecho caer la acusación de "hacer política", que antes se formulaba contra los teólogos de la liberación.

c) La Iglesia profética sobre el cambio social.

Existe un esfuerzo teórico y práctico, muy consciente, de un sector cristiano, para asumir un compromiso auténticamente revolucionario con el pueblo latinoamericano. Un precursor ilustre fue el sacerdote Camilo Torres que, ya en 1963, veía claramente que "la Iglesia no está casada con ningún régimen temporal" (21), en el sentido de comenzar a constatar que la misión católica, ecuménica, propiamente universal de la Iglesia la lleva a separar su propio destino de aquel de un determinado régimen social y en el caso de América Latina, del destino de las dictaduras fascistas y aún del capitalismo. Pero, partiendo de una autolimitación precisa: no le corresponde a ella dirigir la revolución; así lo afirma explícitamente el editorial de la revista "Mensaje" N.153: "No le corresponde a ella (a la Iglesia) crear sistemas políticos ni hacer revoluciones sociales. Si acompañarlos con el apasionado interés de Dios por la historia" (22).

Al interior de esta autolimitación con la cual la Iglesia signa su propio destino humano está el reconocimiento tácito o manifiesto de no acompañar sólo al capitalismo y está también el comienzo de la comprensión que le corresponde o puede corresponderle de acompañar al socialismo. En este camino de evolución progresiva Paulo VI ha jugado un gran papel con sus esfuerzos en favor del mantenimiento de la paz mundial y con sus fervorosos llamados a respetar los principios de no intervención y de autodeterminación de las naciones, que se encuentran en su encíclica *Populorum Progressio*.

El punto inicial de esta toma de posición, de este comprometerse con su pueblo se concretó en la actitud del sacerdote Camilo Torres. No sólo como manifestación teórica, sino también como ejemplo de vida, del más puro heroísmo, capaz de dar la existencia por la liberación nacional. De sus declaraciones: "Yo soy revolucionario porque soy sacerdote y porque soy católico" (23) o "Jamás seré anti-revolucionario. Por esto jamás seré anti-comunista" (24); hasta su muerte en el encuentro de San Vicente de Chucurí, un sólo anhelo signa su vida: liberar Colombia de la opresión de los feudales y del imperialismo.

Si siguiendo su ejemplo, muchos sacerdotes y laicos cristianos han elaborado una nueva posición teórica, en relación al cambio social, conocida con el nombre de Teología de la Liberación. Algunos de sus representantes son: Gustavo Gutiérrez: Teología de la liberación, (Lima, 1971); Alex Morelli; Libera mi pueblo (Ediciones Carlos Lohle, Mexico, 1971); Hugo Assman: Oposición-Liberación, desafío de los

cristianos (Ediciones Tierra Nueva, Montevideo, 1971) y Teología de la Liberación (Servicio de Documentación MIEC-JECI, Montevideo, sin fecha). Además, en los inicios de la década del 70 surgió el Movimiento de los "Cristianos por el Socialismo", uno de cuyos principales portavoces es el sacerdote Gonzalo Arroyo, hasta hoy día en exilio.

Por la primera vez en América Latina y en su secular historia, el centro católico ha hecho suyo el lenguaje renovador y tomó muchas de las propuestas iniciales de la Iglesia profética, sin que los renovadores vinieran reabsorbidos; al contrario, Mons. Eduardo Pironio, cuando era Secretario General del CELAM, publicó una obra titulada también Teología de la Liberación (Ediciones de la Oficina Nacional de Catequesis, Santiago de Chile, sin fecha).

El abierto compromiso con su pueblo de amplios sectores de orientación católica, eclesiásticos o laicos, está creando a nivel latinoamericano la posibilidad de proponer la construcción conjunta de un mundo nuevo, mejor y más justo, producto de los esfuerzos comunes de una convergencia de movimientos de distinta inspiración ideológica: marxista, católica, laica, como se puede evaluar actualmente en el nuevo Nicaragua, que construye la Revolución Sandinista.

Ya se vislumbra la tendencia, que cada vez será más acentuada, a la creación conjunta de una nueva unidad política y moral, con una declarada posición pacifista, con una irrestricta libertad religiosa para todas las creencias y con un voluntad decidida a construir la sociedad nueva, como el concretarse de la expresión más democrática de los deseos e intereses de la inmensa mayoría de la nación latinoamericana que tiende hacia el socialismo.

Esta es la tendencia que se encarna en hombres como el cardenal Paulo Evaristo Arns, quien, conmemorando el asesinato del padre Exequiel Ramiu a manos de los "fazenderos", en la catedral de Sao Paulo, dialogaba con los fieles de este modo: "Quien no trabaja por la justicia no es cristiano. Repetirlo conmigo". En las naves de la catedral hay una explosión de voces. "En Brasil la justicia se llama Reforma Agraria. Quien no lucha por la Reforma Agraria traiciona a sus hermanos" (25); o como Frei (que viene de "fratel" y quiere decir hermano) Betto, dominicano que le hizo a Fidel la entrevista sobre la religión; o como monseñor Manuel de Céspedes, presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, que se pronuncia por una "coexistencia más serena" entre la Iglesia y el Estado Socialista (26); o como el cardenal brasileño Ivo Lorscheider, quien afirmó en el Sínodo de los Obispos, efectuado en Roma en XI-1985: "La Teología de la Liberación es un fruto positivo del Concilio que no rompe con la tradición teológica católica y es indispensable para la acción de la Iglesia" (27) y terminaba comprobando que la Teología de la Liberación "no es el producto de pocos teólogos aislados, sino el producto del conjunto de la Iglesia latinoamericana".

Su valerosa acción esta dando buenos frutos para el pueblo de nuestro continente e incluso está logrando corregir el juicio de la curia romana sobre la Teología de la Liberación; en efecto, el nuevo documento vaticano la define, ahora, "no sólo útil, sino necesaria" (29) y termina instruyendo a los fieles en el sentido que "es tarea de la Iglesia abrir las puertas a un proceso de liberación de los pueblos" (30).

Y si la Iglesia latinoamericana acoge esta buena nueva no sólo se encontrará con la comprensión de la clase obrera del Nuevo Continente, que sentirá que su mensaje ha sido escuchado, sino también con un protagonista leal que ha dedicado su vida precisamente a la liberación de estos pueblos.

Notas.

- 1) M. Poradowski: Sobre la Teología de la Liberación, Editora nacional Gabriela Mistral, Santiago de Chile, 1974, pp.17-18.
- 2) Id., p.34.
- 3) M. Ossa B. Cristianismo y sentido de la historia, en la revista "Mensaje", N.153, Santiago de Chile, 1966, p.539.
- 4) Ivi.
- 5) Id., pp. 549-550.
- 6) H. Camara, en la revista "Mensaje", N. 156, 1967, p.156.
- 7) M. Larraín, Desarrollo: éxito o fracaso en América Latina, Editora Universidad Católica, Santiago, 1965, p.10.
- 8) Id., p.20.
- 9) Id., p.11.
- 10) Id., p.15.
- 11) Paulo VI, Populorum progressio, Edit. Hijos de San Pablo, Alba, 1979, 6a. Edición, p.14.
- 12) Revista "Mensaje", Glosario, Santiago, 1962.
- 13) Ivi.
- 14) Id., p.590.
- 15) Id., p.589.
- 16) Juan Pablo II, citado en el diario "L'Unità", 25-II-1986, Roma.